**UNA MIRADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN Y LA
SALUD EN ECUADOR, BOLIVIA Y COLOMBIA**

ÁNGELA VIVIANA BURGOS MORENO

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSITÄT KONSTANZ
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO
Bogotá D. C.
2018**

**UNA MIRADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN Y LA
SALUD EN ECUADOR, BOLIVIA Y COLOMBIA**

ÁNGELA VIVIANA BURGOS MORENO

Asesor:

Janneth Milena Pacheco Baquero

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

UNIVERSITÄT KONSTANZ

MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO

Bogotá D. C.

2018

Agradecimientos

Con profundo sentimiento, le agradezco a Dios y su corte de ángeles y arcángeles por haberme permitido culminar este objetivo. A la dirección del programa de Maestría en Derecho Público de la Universidad Santo Tomas, por estar siempre prestos a colaborar. Y a mi tutora, Dra. Janneth Milena Pacheco Baquero, porque gracias a sus orientaciones podré concluir con el mayor logro académico de mi vida.

Dedicatoria

A mis padres por ser el pilar fundamental de todo lo que soy, en mi educación, tanto académica como de la vida. Por su apoyo incondicional, por sus consejos, sus valores y por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien. Gracias por su amor.

Tabla de contenido

	Pg.
Introducción.....	7
1. Antecedentes, desarrollo constitucional en Bolivia, Ecuador y Colombia y marco conceptual de políticas públicas.....	13
1.1. Procesos constituyentes como procesos políticos en los países andinos	15
1.1.1. Bolivia, Estado plurinacional, antes y después.....	17
1.1.2. Ecuador, revolución ciudadana y reforma constitucional.....	21
1.1.3. Colombia, antes y después de la Constitución de 1991.....	25
1.2. Marco Conceptual de Políticas Públicas. Orígenes, definiciones y elementos esenciales en materia de educación y salud.	37
2. Disposiciones Constitucionales y Públicas en materia de Educación y Salud en Ecuador, Bolivia y Colombia.	47
2.1. La Salud y la Educación en las Constituciones de Ecuador, Bolivia y Colombia.....	49
2.1.1. Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia.....	50
2.1.2. Constitución política de la República de Ecuador.....	51
2.1.3. Constitución política de la República de Colombia.....	53
2.2. Políticas públicas implementadas para garantizar los derechos a la educación y a la salud en Ecuador, Bolivia y Colombia.....	54
2.2.1. Sistemas de Protección Social en Bolivia. Bonos Sociales y principales programas en Salud y Educación.....	56
2.2.2. Los Planes Nacionales del Buen Vivir en Ecuador. Directrices para lograr la Revolución Ciudadana.....	67
2.2.3. Colombia: Camino a la paz, equidad y educación.....	89
3. Evaluación de los programas de acción pública y mecanismos de protección de los derechos a la educación y a la salud.....	102
3.1. Eficacia de las políticas públicas tendientes a determinar el cumplimiento de los derechos. Metodología de evaluación utilizada.....	103

3.2. Articulación de la Política Pública y los desarrollos jurisprudenciales.....	148
4. Conclusiones.....	147
5. Referencias bibliográficas.....	157

Introducción

En el transcurso de las últimas décadas, América Latina atravesó por múltiples reformas políticas tendientes a cambiar los paradigmas creados entorno a la conformación de regímenes democráticos dirigidos a cumplir con las exigencias de la misma. El discurso que se profesaba en la región, desarrollaba las ideologías de las luchas populares y sociales que buscaban el reconocimiento de sus derechos, con el fin de hacerlo extensivo a todos los pueblos y acabar así con las distinciones de clases que han permanecido desde tiempos inmemorables. Tales cambios políticos, desencadenaron la llamada por diversos autores la “tercera ola de la democracia”, que a partir de 1978 garantizó no sólo la posibilidad de que los ciudadanos accedieran a tomar las decisiones referente a los asuntos públicos de la nación, sino que se elegían dirigentes de los mismos, para que atendieran sus peticiones y los representaran, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo.

Para la consolidación de la democracia, su actuar debe regirse bajo unas prerrogativas determinadas, es decir, debe tener en cuenta lo preceptuado tanto en la Constitución y en la Ley para no sobrepasar ni extralimitar sus potestades. Con el fin de dar cumplimiento a tales reglas, en los diferentes estados se comenzaron a germinar necesidades de cambios tendientes a consolidar la democracia y otorgar potestades al pueblo.

Al establecerse la necesidad de generar cambios en los textos constitucionales, se comenzó a estudiar por los gobiernos de turno la posibilidad, que por medio de asambleas constituyentes, se produjeran nuevos textos, conforme a las realidades políticas de cada país, incluyendo nuevos catálogos de derechos tendientes a darles la importancia que merecen y la debida protección que el Estado debe garantizar. Así mismo, era imperioso cambiar ciertos aspectos de la parte orgánica de los textos, por cuanto se debían crear órganos de protección de los derechos, tales como las defensorías del pueblo y los órganos de cierre en materia constitucional, cuyo fin se circunscribe en proteger la debida aplicación de los derechos no sólo los fundamentales sino todos los derechos.

A partir de la década de los noventa, la región andina suramericana inició una serie de cambios constitucionales desde el proceso constituyente Colombiano de 1991, cuyo fin primordial era generar avances significativos en el país, para así mitigar la violencia que azotaba la nación por la afluencia de grupos al margen de la ley, que buscaban la continuidad de los problemas de legitimidad pero que no tuvo eco dentro del constituyente primario, por cuanto se innovó en el establecimiento del catálogo de derechos fundamentales, así como en los derechos económicos, sociales y culturales y en los derechos colectivos como el caso de los derechos al medio ambiente. De igual manera, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, se innovó respecto de la consagración de la acción de tutela, como garante de los mismos, teniendo en cuenta que otras constituciones latinoamericanas la habían adoptado, como el caso de la acción de amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Para los casos de Ecuador y Bolivia, los cambios constitucionales generados en el 2008 y 2009 respectivamente, obedecieron a los procesos electorales llevados a cabo, donde ascendieron nuevas fuerzas políticas que expresaban el sentir de movimientos populares con ideologías netamente izquierdistas. Sin embargo, tales procesos se realizaron a través de Asambleas Constituyentes avaladas y reforzadas por el constituyente primario. En tales textos, se reconoció y se les otorgó derechos especiales a las comunidades indígenas imperantes dentro de los territorios nacionales como aspecto fundamental de las mismas.

Para el presente trabajo se escogen los países de Colombia, Ecuador y Bolivia, por su cercanía en la región, además por haber sido la constitución política de Colombia el prelude de los textos constitucionales establecidos en los otros países, por cuanto, su catálogo de derechos fundamentales fue la base tomada en cuenta para los demás textos. Además, en Colombia se innovó respecto al establecimiento de órgano de cierre en materia constitucional, lo cual se replicó en los países estudiados, así como en la protección de los derechos fundamentales a través de las acciones de defensa y catalogar a los derechos al medio ambiente como fundamentales.

Al pretender desarrollar un tema donde el enfoque tiene como prioridad los derechos fundamentales a la educación y la salud en los ordenamientos políticos de Ecuador, Bolivia y Colombia, así como las políticas públicas formuladas e implementadas tendientes a dar cumplimiento a tales derechos, en primera instancia, se debe definirlos. En ese orden de ideas, se puede entender que por derechos fundamentales se conciben a los derechos inherentes del ser humano, a su propia personalidad que de ellos se extraen determinadas consecuencias jurídicas. Tales derechos deben ser proclamados y consagrados en un texto, para concederles un valor constitucional y garantizarlos a través de la instauración de una justicia constitucional, documento que se denomina constitución. Esa constitución como fruto del mandato del poder constituyente primario, refleja su voluntad a través de quienes la conforman, por cuanto consagran las necesidades del pueblo a través de principios y reglas de obligatorio cumplimiento por parte de quienes ejercen funciones públicas.

Para el cumplimiento de esos derechos fundamentales, los Estados deben implementar y adoptar directrices tendientes a garantizar su cumplimiento, independiente de la ideología política con la que hayan llegado al poder, es su deber primordial cumplirlos a cabalidad; dichas directrices se consideran como políticas públicas. De ahí, que este trabajo de investigación no se dedicará al estudio dogmático de los derechos fundamentales consagrados en las Constituciones de los países escogidos. Se trata entonces de hacer un estudio aproximado del estado de implementación y modos de protección de los derechos mencionados por parte de Estados que se dicen responder a los principios de un Estado Social de Derecho.

El derecho a la educación, entendido como aquel derecho que se predica a todos los seres humanos, les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena y el derecho a la salud, se refiere aquella condición innata que ostenta cada ser humano de gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, de tener acceso a una atención integral que propenda por mantener en condiciones óptimas su salud y de acceder a programas preventivos que no se enmarquen en atender cuando ocurra la enfermedad, sino que de manera anticipada, se prevengan dolencias. La óptima prestación de servicios tendiente a satisfacer tales derechos, se

considera como vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades actuales.

Para el estudio académico de las políticas públicas, no se centrará la presente investigación en sus etapas de formulación e implementación, sino que evaluarán las medidas implementadas en los países de estudio, respecto a los derechos a la educación y a la salud, con miras a determinar la prestación óptima y adecuada de dichos servicios públicos esenciales, teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales fijados para entender el cumplimiento de dichos derechos.

Los Estados, en términos generales, ostentan entre sus fines el deber de brindar las condiciones para suplir algunas necesidades de sus habitantes, más aún cuando en la actualidad, la dignidad humana es el principio fundamental del Estado Social de Derecho, teniendo un espíritu social, más que legalista. Si bien los derechos están referenciados en las normas como el Estado de Derecho y los ampara un principio de legalidad, debe entenderse que los derechos no sólo son contenidos axiológicos o fundantes que sirvan no de retórica, sino que se lleven a la praxis. De acuerdo con lo anterior, el Estado Social de Derecho, busca y es esencialmente importante para hacer valer la igualdad no solo frente a la ley, sino una igualdad material que proteja a los sectores más desamparados de la población, pero de manera efectiva.

Esta cláusula se integra al presente trabajo, por cuanto, los derechos a la salud y a la educación, ostentan un carácter socialista y de ello se deriva que en las nuevas constituciones adoptadas en Colombia, Ecuador y Bolivia, se hayan constituido como derechos fundamentales. En el caso de que no se estén cumpliendo con las políticas públicas instauradas por los gobiernos de turno tendientes a satisfacerlos, se entraría en un desbalance de la cláusula consagrada constitucionalmente de Estado Social de Derecho, o para el caso de Ecuador, Estado Constitucional.

El **problema jurídico** del presente trabajo tiene como finalidad, determinar ¿cuál es el estado de los derechos fundamentales a la educación y la salud, a través de la evaluación de las

políticas públicas implementadas en Ecuador, Bolivia y Colombia, como elemento esencial de los estados sociales de derecho? Para lo cual, se planteó la siguiente hipótesis: En las Constituciones adoptadas en Ecuador, Bolivia y Colombia, se encuentra consagrada la obligación de los Estados de ocuparse de la realización de derechos fundamentales, como la educación y la salud. Sin embargo, a pesar de las medidas formuladas e implementadas, no están siendo eficaces y se encuentran afectando el cumplimiento del postulado constitucional del Estado Social de Derecho. Lo anterior a la luz de la definición de los núcleos esenciales de los mismos y los estándares nacionales e internacionales de los derechos objeto de estudio.

Para responder la hipótesis planteada, se determinaron los siguientes objetivos de investigación. Como objetivo general, se planteó: Identificar los elementos relevantes de las políticas públicas en Ecuador, Bolivia y Colombia y el estado de su evaluación para la promoción y protección de los derechos a la educación y a la salud. Y como objetivos específicos los siguientes: En primer lugar, describir los antecedentes y el desarrollo constitucional de los países de estudio en el cual se enmarcan los procesos constituyentes que dieron lugar a la cláusula del Estado Social de Derecho en Ecuador, Bolivia y Colombia. En segundo lugar, identificar el desarrollo legal y constitucional de los derechos a la salud y a la educación en cada país de estudio. En tercer lugar, establecer a partir de los criterios constitucionales fijados para los derechos objeto de análisis, su cumplimiento desde los estándares nacionales e internacionales, a través de las políticas públicas implementadas Ecuador, Bolivia y Colombia y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 y para el 2016 y 2017, el porcentaje de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con el fin de desarrollar los anteriores objetivos, en el primer capítulo se procede a contextualizar lo referente con los antecedentes que precedieron en los países de estudio a los procesos constituyentes que se llevaron a cabo en 1991 en Colombia, en 2008 y 2009 en Ecuador y Bolivia respectivamente. Así mismo, se analizara un marco general de la definición de las Políticas Públicas.

En el capítulo segundo, se entrará a determinar lo concerniente con el marco constitucional y reglamentario de los derechos a la salud y a la educación y las diferentes políticas públicas implementadas para garantizar tales derechos en los países de estudio. Y por último, en el capítulo tercero, al tener todas las bases conceptuales para entrar a realizar el estudio del caso en particular, se analiza el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales establecidos para los derechos a la educación y la salud, a través de las políticas públicas implementadas Ecuador, Bolivia y Colombia. Igualmente, se determinan las herramientas de protección de los derechos estudiados, a través de los diversos pronunciamientos de los órganos de cierre en materia constitucional en cada país analizado.

1. Antecedentes, desarrollo constitucional en Bolivia, Ecuador y Colombia y marco conceptual de Políticas Públicas

En las últimas tres décadas, la región latinoamericana ha atravesado por transformaciones políticas e institucionales, entre otras. Importante para el presente trabajo, el desarrollo constitucional de los países andinos de Colombia, Ecuador y Bolivia, por cuanto, desde la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, emergen cambios importantes no sólo con relación a la ampliación y consagración de las cartas de derechos, sino novedades en su parte orgánica, tales como las creaciones de los órganos de cierre en materia constitucional, así como las figuras de los defensores del pueblo, quienes son los encargados de velar por el cumplimiento a cabalidad de los derechos de los integrantes de la sociedad. Así mismo, los cambios políticos adelantados en dichos países, generaron el establecimiento de un nuevo orden constitucional, que se describirá y analizará en las próximas líneas.

La finalidad de la democracia en América Latina, está encaminada a lograr altos niveles de bienestar para grandes sectores de la población, logrando la satisfacción de los miembros de las comunidades, cumpliendo además con los grandes desafíos de la misma que son alcanzar una verdadera democracia social¹ y fortalecer el Estado de Derecho a través del apoyo de la sociedad, siempre y cuando exista un verdadero compromiso de los actores y de las agrupaciones políticas con la sociedad civil y viceversa. Cuando las demandas sociales no se cumplen por parte de los actores políticos, se genera una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, las cuales, no son simplemente factores socioeconómicos, sino que tienen que ver con la forma de hacer la propia política generando descontento dentro de los habitantes de los territorios por el no cumplimiento de las prerrogativas a que tienen derechos desde su establecimiento en las diferentes cartas políticas aprobadas por el poder primario.

Ahora bien, es menester entrar a considerar los antecedentes con relación a la consolidación del sistema de derechos y garantías de los individuos exigibles a los Estados, lo que marca la

¹Se puede entender la democracia social, como la implementación de mecanismos democráticos de toma de decisiones en las instituciones no estatales que caracterizan a la sociedad civil.

nueva relación de éstos frente al establecimiento de la cláusula de Estado Social de Derecho, para los casos de Bolivia y Colombia y Estado Constitucional de Derechos en Ecuador, así: durante los últimos treinta años, América Latina ha atravesado por lo que se ha denominado “la tercera oleada de la democracia”, la cual se inicia en el año de 1978 (Roncagliolo, 2007); cuyo objetivo era mantener la estabilidad democrática lograda en la región -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela² (Verdesoto y Ardaya, 2005).

A partir de esa época, en la región andina, se comienza a vislumbrar cambios generacionales importantes para afianzar la democracia y garantizar el fin de la misma, es decir, forjar las condiciones imperantes para responder por las necesidades de los habitantes de los territorios. Además, se comienza a generar la necesidad de adoptar los mecanismos estatales por medio de los cuales, se garantizara el pleno cumplimiento de los derechos, articulando la producción normativa de las instituciones públicas con las actividades políticas y oficiales, para lograr la formulación, implementación y posterior evaluación de las políticas públicas. La región se ha caracterizado por la realización de procesos de reforma constitucional, política y electoral en casi todos sus países, sin que esto haya significado una mejora evidente en el bienestar de sus sociedades y en la gestión pública de sus gobiernos (Verdesoto y Ardaya, 2005). Lo anterior se traduce en que la legitimidad adquirida por los Estados, no responde exclusivamente en que se cumplen con todos los fines consagrados en las Constituciones, sino que existen cuestiones de

² Cuadro No. 1.

Tercera Ola de democratización en Latinoamérica.

Periodo	Año 1978 hasta el 2000
Contexto	Dominio absoluto del capitalismo neoliberal, con tendencia a la unipolaridad.
Objetivo	Derrota al neoliberalismo, construcción del poder del pueblo desde la lucha misma (soberanía popular). Socialismo democrático, humanista y libertario.
Estrategia	Se vuelve a combinar la lucha armada y la lucha parlamentaria, con un movimiento social amplio.
Resultado	Principal base de los partidos electorales: campesina, por ser la fuerza social más activa en la lucha popular, como movimiento armado y no solo como movimiento social.
Formas organizativas	Ejercicio de la democracia, hacia la dirección colectiva, la descentralización y el respeto a la autonomía. Se transformó en norma la autosuficiencia.

Fuente: Elaboración propia.

diversa índole, como las de tipo presupuestal, que le impiden a los gobiernos un total cubrimiento de las necesidades básicas de los habitantes de la Nación.

En la década de los noventa y a principios de los años 2000, en Bolivia, Ecuador y Colombia, se produjeron cambios constitucionales importantes, donde se reflejaron las nuevas tendencias adoptadas en consecuencia a las épocas en las cuales fueron generadas; es así como en Colombia, en el año de 1991, a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se realizó un proceso democrático sin precedentes en la historia nacional (Hurtado, 2006). Diferente situación aconteció con las Constituciones de Bolivia y Ecuador, por cuanto fueron producto de Asambleas Constituyentes, pero sus antecedentes radican en haber sido propuestas de campaña de los presidentes Evo Morales y Rafael Correa como mecanismos para alcanzar el poder con sus proyectos socialistas con ideologías de izquierda.

Por tanto, en las líneas que siguen, se describirán y analizarán los procesos políticos que antecedieron la creación y posterior promulgación de las Constituciones que aún se encuentran vigentes en los países de estudio, con el fin de conocer la protección constitucional de los derechos a la salud y a la educación y comprobar si las políticas públicas formuladas e implementadas por los gobiernos de turno, garantizan la adecuada prestación de esos derechos o si por el contrario, quienes son objeto de vulneración deben acudir a instancias judiciales en búsqueda de que se actué de manera objetiva y expedita, para lograr así, el cabal cumplimiento de sus derechos y por último, pero no menos importante, la definición de políticas públicas, sus orígenes y elementos esenciales a determinar para evaluar su aplicación respecto de los derechos estudiados – educación y salud- en los tres países de análisis.

1.1 Procesos constituyentes como procesos políticos en los países andinos

Con la expedición de la Constitución Política de Colombia en 1991, cuyas líneas programáticas tenían un tinte progresista, al consagrar la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho como principio fundante de su democracia, varios países de Suramérica, entre ellos Ecuador y Bolivia, adoptaron posteriormente posiciones similares a la

establecida en nuestro país, con evoluciones en el ordenamiento constitucional tendiente a reconocer más derechos a la ciudadanía y creando mecanismos para su eficacia y eficiencia pero de estilo más populista que vanguardista, por cuanto los gobiernos en los que fueron creadas, fueron producto de profundas crisis políticas e institucionales donde “...los sistemas de partidos tradicionales se han desplomado y han sido sustituidos por regímenes de vocación refundacional...” (Caetano, 2011, p. 10).

Las constituciones producto de esos cambios, tuvieron procesos de aprobación diferentes. En los tres países de estudio, las constituciones fueron originadas en el seno de asambleas constituyentes elegidas de forma democrática y directa, conformadas por ilustres personajes de la vida política, académica, cultural y económica de los países, donde se analizaron los puntos álgidos que debían ser incluidos en cada texto en particular, ampliando la carta de derechos y proclamando sus respectivos mecanismos de protección en caso de vulneración alguna. Los porqué se originaron en cada caso particular las necesidades de actualizar la normativa constitucional, se entraron a establecer en los subcapítulos siguientes, teniendo en cuenta que los fenómenos políticos que acontecían tanto en el año de 1991 en Colombia, como en los años 2008 y 2009 en Ecuador y Bolivia, fueron determinantes para tomar la decisión del cambio, como fue el caos social que se vivió en Colombia por cuenta de los carteles del narcotráfico, o la llegada al poder de personajes con ideología de izquierda, cuya pretensión principal era conformar un bloque socialista en Suramérica, en compañía de Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros.

Los cambios suscitados en los procesos constituyentes, abrieron caminos para una reforma de las cartas políticas en su parte orgánica, al igual que ampliaron su radio de acción y de aplicación,

...en procura de dar voz a los “*invisibles*” ancestrales de los regímenes anteriores (indígenas, pobres, negros, mujeres, sectores marginados en general, etc.) y a exigir el cumplimiento largamente postergado de sus legítimas demandas de justicia y de vigencia de derechos, tanto en materia política, económica, social como cultural. [cursivas y comillas en texto fuente] (Caetano, 2010, p. 10)

Para entrar a estudiar el tema principal de este trabajo, se hace necesario comenzar por examinar cada proceso constituyente en particular, es decir, mirar desde una óptica objetiva, los diferentes sucesos o acontecimientos que no sólo llevaron al poder a militantes de partidos con ideología izquierdista, sino las condiciones políticas y sociales que determinaron la necesidad del cambio constitucional, pues por lo general, las nuevas constituciones surgen en momentos de crisis, donde se ve la necesidad de generar una innovación social y política, para después, centrarse en la proclamación de los derechos fundamentales a la salud y a la educación, así como, al establecimiento de políticas públicas tendientes a protegerlos de cualquier amenaza o vulneración de que sean objeto. Por tanto, al estudiar la crisis que antecedió la necesidad de la expedición de la nueva norma constitucional, se puede entender el proceso político que le siguió, con el fin de entender las razones y la lógica el proyecto de cambio que se propone como solución.

1.1.1 Bolivia, Estado plurinacional, antes y después.

El proceso constituyente boliviano arrancó en las luchas sociales que desde la década de los años noventa han reivindicado la necesidad de un cambio constitucional en el país que apuntara hacia la integración social, la mejora del bienestar del pueblo, la ampliación y aplicación de los derechos y hacia un gobierno responsable que respondiera a las expectativas de participación que propugnaban los ciudadanos. Comienzan a surgir nuevos movimientos, de los cuales, el más significativo fue el de los “cocaleros”, conformado por cultivadores de la hoja de coca, organizados en federaciones de sindicatos de productores.

El principal dirigente rigente cocalero, Evo Morales, organizó una fuerza política que le permitió ser electo diputado nacional en 1997. Luego de su elección como diputado, Morales fundó el MAS (Movimiento al Socialismo) y presentó su candidatura a las elecciones presidenciales de 2002, donde llegó al segundo lugar con 19,43% de los votos. Este éxito sorpresivo se debe a su larga trayectoria como dirigente sindical y al creciente protagonismo que adquirió en el movimiento social. (Basset, 2004, p. 60)

Por tanto, se puede decir que Evo Morales surgió como un líder de origen étnico y que por su condición de dirigente sindical ha luchado incansablemente por las mayorías indígenas y populares, velando siempre por la protección de los recursos naturales, el reconocimiento de derechos a la población indígena y el arraigo a la madre tierra como precursora de la vida.

En abril del año 2000, se generó una masiva y combativa movilización en la ciudad de Cochabamba, denominada “Guerra del Agua”, que permitió la aglutinación de los movimientos existentes en esa ciudad, a través de la Coordinadora por el Agua y la Vida, en razón a la privatización del servicio del agua y el alza de las tarifas cobradas, consolidándose este movimiento como uno de los iconos de la izquierda internacional y de resistencia contra el neoliberalismo fundante en la región. A través de ésta misiva, se activaron los espacios locales de participación política y en consecuencia se dio el resurgimiento de la democracia local (Tapias, 2005). Afianzándose así la revivificación de los movimientos sociales, donde predomina más el sentido de aglutinación que de articulación de propuestas serias para la región, puesto que aprovechan cualquier tipo de protesta, para sumarse a las filas y obligar al gobierno a ceder a sus requerimientos.

En junio de 2002, se presentó Evo Morales Aima, por primera vez, como candidato a la Presidencia de la República en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS), la organización política creada en 1995, que ha sido considerado a lo largo de la historia democrática de Bolivia como un “...instrumento político que busca la toma del poder a través de la participación electoral para recuperar tierra y territorio” (Costa, 2007, p. 91). En esta oportunidad, el MAS se ubicó en el segundo lugar y obtuvo la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de estirpe derechista.

En las elecciones de 2005, el MAS, logró que por primera vez en la historia de Bolivia, fuera electo su candidato a la presidencia Evo Morales Ayma, al alcanzar el 53,74% de los votos válidos. Todos estos movimientos tuvieron nuevos protagonistas encabezados por los indígenas,

campesinos y las clases menos favorecidas. El liderazgo de un dirigente cocalero³, marcó un camino distinto, pues la lucha política buscaba la reivindicación indígena, el ataque a todo aquello que representará el Imperio y el giro ideológico hacía una marcada izquierda.

Esto originó una crisis de gobernabilidad que terminó en un pacto histórico con la oposición parlamentaria (Podemos), el 21 de octubre de 2008, acuerdo político logrado con la condición de que el presidente Morales renunciara a sus aspiraciones reeleccionistas para el 2014 y a cambio de esto, se pudiese dar vida a la nueva Constitución celebrada a partir de una Asamblea Constituyente. (Insignares, 2015, p. 95)

Para afianzar el cambio de gobierno y determinar el cumplimiento de las propuestas que sirvieron de base para su elección, Evo Morales convocó "...la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para establecer nuevas pautas de relación entre el Estado, economía política, cultural y sociedad con innegable protagonismo del movimiento campesino e indígena." (Mayorga, 2008, p. 22), con la exclusiva finalidad de efectuar una "transformación estructural que permita refundar el Estado y por esta vía por vez primera incluir en él a todos los bolivianos que habían sido excluidos por las instituciones pro-neoliberales." (Peña, 2009, p. 83)

En las elecciones para la Asamblea Constituyente, realizadas en julio de 2006, el Movimiento Al Socialismo (MAS), venció con mayoría absoluta de votos y comenzó sus labores el 06 de agosto de 2006, pero en su desarrollo, se produjo graves divergencias entre el oficialismo y la oposición que impidieron un acuerdo sobre la reforma constitucional. Luego, en diciembre de 2007, la Asamblea Constituyente aprobó el texto de la nueva Constitución solamente con la participación de la mayoría oficialista y sus aliados, pero sin la presencia de la oposición. (Peña, 2009)

Luego, se le presentó un referéndum al pueblo para su aprobación el 25 de enero de 2009, confirmando así el "...apoyo a las políticas públicas propuestas e implementadas por el MAS y

³Evo Morales subió al poder convirtiéndose en el primer presidente indígena de Bolivia, un país que tradicionalmente había sido gobernado por blancos, en contraposición con la mayoría étnica imperante en el territorio.

fortalecieron la legitimidad del proceso de cambio.” (Anria, Cameron, Goenaga, Toranzo y Zuazo, 2010, p. 244). La tasa de participación superó todas las expectativas al situarse cerca del 90,26%. La nueva Constitución fue finalmente “...aprobada con 2.064.397 votos válidos favorables a la misma (61,43%)...” (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, s.f., p. 37), frente a los votos en contra de 1.296.175 (38,57%). (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, s.f.)

La implementación de reformas constitucionales presuponía esfuerzos significativos para la refundación de una Bolivia más igualitaria e incluyente y la descolonización de la administración pública del país. Esa “refundación”, tiene carácter revolucionario y político, cuando establecen que “...por un lado es revolucionario en cuanto busca una redistribución radical de la riqueza y el poder; por el otro, es político en cuanto requiere la constitución de un nuevo Estado fundado a partir de pactos sociales más incluyentes.” (Anria et al., 2010, p. 245)

El carácter plurinacional del Estado, la convivencia de elementos liberales con indígenas, la apuesta por la regeneración democrática, el valor de los derechos sociales, el papel del Estado en la economía, etcétera, plantean en definitiva un texto que no pasará desapercibido en la historia constitucional. Difícilmente podría ser de otra manera, por cuanto las formas de legitimidad, las reivindicaciones constituyentes, la *necesidad* de una regeneración del país y la búsqueda casi desesperada de respuestas reales a problemas reales son comunes con otras experiencias latinoamericanas.

Como punto estratégico del Gobierno Boliviano, se encuentra la recuperación de los recursos y sectores estratégicos de la economía, con la reactivación de empresas como la estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), lo que ahora le permite intervenir directamente en la gestión productiva de la riqueza, así como en la regulación de contratos, por cuanto estaban en manos de particulares e incluso de algunas potencias mundiales. (Insignares, 2015, p. 95)

Se desarrolla el principio establecido dentro del proyecto de carta constitucional de ser un Estado “plurinacional” en los siguientes artículos del Título I del proyecto, lo cual

...ha conducido ha [Sic] declarar “oficiales” los 38 idiomas de las “naciones y pueblos indígenas originarios”, juntamente con el castellano, así como a la desaparición de la “nacionalidad boliviana”, y a la afirmación de que el carácter “republicano” del Estado es cosa del “pasado”. Esta primacía “plurinacional” a su vez define el sentido primario de lo que en todo el texto, empezando por el primero, se debe entender por “pluralismo”, que aparece como un valor reivindicado., que no es precisamente lo que se entiende en términos democráticos modernos. (...) Así, en el capítulo de los “Derechos Fundamentales y Fundamentalísimos” -que es lo más rescatable del proyecto de constitución y la más extensa por los “grupos diferenciales” incluidos- a pesar de declarar que los derechos son universales y prohibir toda discriminación, se consagra lo que se llama la “ciudadanía diferenciada” como en la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Constitucional Plurinacional, y del Consejo Electoral Plurinacional, y del Consejo Electoral Plurinacional, con dos sistemas de elección de sus miembros en condiciones desiguales. [comillas en texto fuente] (Lazarte, 2008, p. 27)

Por tanto, al haber descrito las etapas no solo de la llegada al poder de Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, sino del porque se determinó la necesidad de integrar una Asamblea Constituyente que forjara un nuevo texto, se puede concluir que la lucha por la igualdad de las mal llamadas clases sociales, que la posibilidad de integrar a todos los pueblos indígenas que conforman la nación y reconocérseles sus derechos y la imperiosidad de defender su territorio y que no dependa de injerencia extranjera en la parte económica, sino abastecerse de su propia tierra, fueron los aspectos relevantes que dejó ese proceso constituyente. En ese mismo sentido, se procederá a analizar los antecedentes que precedieron a la Asamblea Constituyente que dieron origen a la Constitución de 2008 de Ecuador, donde se tendrán en cuenta dos momentos claves ocurridos en 1998 y durante la llegada al poder del actual presidente Rafael Correa Delgado.

1.1.2. Ecuador, revolución ciudadana y reforma constitucional.

En la década de los noventa, se creó un distanciamiento entre la izquierda partidaria y la ideología de izquierda social, se fue formando, una nueva teoría por parte de los ideólogos de la transformación estructural ecuatoriana y se entró a sustituir el movimiento indígena, el cual había logrado crear una representación de carácter social y político. Esta representación se denominó

“Pachacutik”, se articuló a finales de 1992. Entonces, en adelante en los movimientos no tradicionales de la esfera política ecuatoriana, se vislumbraron dos vertientes, la izquierda política y el movimiento indígena, tanto a nivel nacional como local. Esto demuestra un reordenamiento de los sectores que no fueron afectados con la crisis de Europa oriental (socialismo), quienes favorecieron a los movimientos sociales a fin de lograr objetivos conjuntos para el país.

Todo este cambio político y la crisis institucional estuvieron signados por las presiones del pueblo, que han sido un ejemplo en el ámbito regional, ya que no se enmarcaron dentro de la violencia ni durante el levantamiento armado, como ocurrió en otros países vecinos. (Insignares, 2015, p. 90)

Debe entenderse que los movimientos sociales en Ecuador son representativos en la medida en que provocaron el derrocamiento de tres presidentes entre los años 1997 y 2005: Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005).

Bajo el gobierno de Alfredo Palacio González en el 2005, fue nombrado como Ministro de Finanzas, el economista Rafael Correa Delgado, quien posteriormente cesa sus funciones e inicia una carrera política prominente, militando en el Partido Político Alianza País que lo habría de llevar a triunfar el 26 de noviembre de 2006 en las elecciones presidenciales” (Rodas, 2007, p. 210)

La principal propuesta que planteo a la ciudadanía como candidato a la presidencia, se circunscribió en la “...necesidad de sustituir al Congreso Nacional por una Asamblea Constituyente que se reuniría, al triunfo de Alianza País, para redactar una nueva Constitución que diera cuenta de las aspiraciones del pueblo...” (Rodas, 2007. p. 215), con el fin de reordenar un proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas impulsadas por el pueblo, necesarias para mantener una sólida democracia que durante muchos años fue derrocada por la inestabilidad de los gobiernos. Rafael Vicente Correa Delgado, toma posesión de su cargo el 14 de enero de 2007

...y a partir del día siguiente inició su periodo presidencial en un entorno de repudio a la corrupción imperante y cuestionamiento generalizado de los partidos tradicionales que se hizo evidente en el amplio respaldo que obtuvo, en la *consulta popular* del 15 de abril de 2007, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cuya labor se orientará a una reforma estructural del sistema político y económico ecuatoriano. (Plazas, 2007, p. 139)

El voto favorable a la convocatoria fue de 81% y una vez aprobada la nueva Constitución por la Asamblea Constituyente reunida en la ciudad de Montecristi, resultó ratificada por medio de un referendo popular celebrado el 20 de octubre de 2008, que puso en vigencia la nueva Carta Política del Ecuador, donde se cristalizó la orientación ideológica de las fuerzas renovadoras lideradas por Correa y que habían obtenido en el seno de la constituyente más del 50% de sus miembros (Echeverry y Duque, 2015).

Como innovación de la Constitución aprobada por el pueblo, se encuentra la “... inclusión de un catálogo de derechos y la referencia expresa al concepto de Estado Constitucional.” (Insignares, 2015, p. 91). Referente al concepto de ese Estado, más adelante se tratará su concepto. Ya en ejecución del mandato presidencial, a través del “Programa de revolución democrática”, Correa Delgado planteó cinco revoluciones “...a partir de un “humanismo cristiano de izquierda”, las cuales se enmarcaban en: 1. Revolución constitucional y democrática, 2. Revolución ética, 3. Revolución económica y productiva, 4. Revolución educativa y de salud, 5. Revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana.”⁴ (Plazas, 2007, p. 140)

⁴ 1.Revolución constitucional y democrática: Dentro de esta, se propuso una reforma constitucional que incluya la Implementación de Mecanismos de Participación democrática como la revocatoria del mandato, la fiscalización social de la obra pública y la veeduría ciudadana; la planificación democrática, la transformación del sistema electoral. 2. Revolución ética: La propuesta más significativa de esta revolución fue la definición de las políticas públicas a partir de la permanente consulta a la sociedad civil. Dentro de esta, se incluye la revocatoria del mandato presidencial. 3. Revolución económica y productiva: De acuerdo a esta, la economía ecuatoriana esta desligada de lo social y lo ambiental, por tanto, enuncia una transformación social, la reactivación productiva y la generación de empleo, a partir de un nuevo pacto social que oriente relaciones equitativas y justas entre empleadores y empleados, en función de las siguientes medidas: Política de trabajo integral. Donde se reconoce que es en el sector privado donde se genera el empleo, pero igualmente es necesario que el Estado intervenga con políticas macroeconómicas y sectoriales que conduzcan a la equidad en los órdenes social, económico, de genero e intercultural; Política sectorial de fomento a la inversión generadora de empleo. Es decir las actividades que demanden empleo o contribuyan a incrementarlo, generando un impacto social favorable. Se menciona en el *plan Correa*, la construcción de viviendas, el desarrollo rural, la inversión social, la educación y el trabajo independiente. Políticas netamente de estirpe social; Política dirigida a la juventud. Fundamentalmente dirigida a la educación de alto nivel; Estabilidad laboral y la

Algunos apartados de la exposición de motivos del citado programa, son relevantes mencionar por cuanto aducen a la protección de los derechos de los individuos así:

...el desarrollo es más bien un proceso mediante el cual los objetivos, las libertades y las oportunidades reales de los individuos se amplían para lograr aquello que se valora. Tradicionalmente se ha tendido a confundir entre medios y fines. El crecimiento económico, la modernización y el cambio tecnológico son medios para el desarrollo. El fin de este es la ampliación de las capacidades (o libertades) de los seres humanos...” (Plazas, 2007, p. 141)

Al haber descrito y analizado los antecedentes de las Constituciones Boliviana y Ecuatoriana, Se puede concluir que el resultado de los procesos constituyentes fue refrendado por el constituyente primario, es decir, el pueblo como poder originario avaló la labor de los designados para llevar a cabo la gran tarea de construir cartas políticas donde prevaleciera la determinación de los derechos fundamentales y la respectiva garantía de cumplimiento. Además, las Constituciones proclamadas obedecen a los programas de gobierno de los presidentes electos de la época. Tales son los casos de las Constituciones de Bolivia y Ecuador, donde no sólo se le da el lugar a la Pachamama sino que se abre espacio a todas las comunidades indígenas a través de una composición plural.

dignificación del trabajo. Generación de una regulación legal que proteja a los empleados, estimulen los sistemas de cogestión de empleadores y empleados, enmarcados en la actividad económica. Siendo la inminente finalidad de esta, la redistribución del Ingreso entre empleados y empleadores; Promoción de la autonomía económica de las mujeres; Reingeniería del sistema financiero público y su orientación prioritaria al crédito para pequeñas y medianas empresas para soluciones de vivienda; La reforma agraria con redistribución de la tierra, protección de los recursos hídricos, reconocimientos de territorios a los indígenas, innovación tecnológica y educación de calidad para los trabajadores agrarios; La consideración del petróleo, la seguridad social, la energía eléctrica y las telecomunicaciones como patrimonio de todos los ecuatorianos que impone la intervención directa del Estado. 4.Revolución educativa y de salud: En este aparte, reivindica a las personas como el mayor capital que tiene un país y se enuncian los integradores de esta revolución así: La construcción de una política educativa para la era del conocimiento y de la información, a partir de una verdadera “cultura de la investigación”; Política en salud, que sea el resultado, la expresión de muchos factores sociales, económicos, ambientales, culturales, biológicos y genéticos que sean materia de trabajo intersectorial e individual; Protección social eficiente, en beneficio de los marginados, donde se auspicie su protección y se defienda su inclusión social. 5. Revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana. Se anuncia, en el contexto necesario de las políticas internacional y de la integración económica, creando un mundo más equitativo y justo, donde se respete los principios internacionales de autodeterminación de los pueblos y se descarten las intromisiones imperiales. El trabajo permanente en pro de una verdadera integración latinoamericana que supere el viejo e ilusorio discurso económico de los grandes mercados y los grandes consumidores de la región y se oriente a una concepción más profunda que consulte la historia, la cultura y los numerosos factores que unen a los latinoamericanos.

Ahora bien, es el turno de analizar los antecedentes de la Constitución de Colombia, lo cual, en las páginas siguientes se entrará a desarrollar.

1.1.3. Colombia, antes y después de la Constitución de 1991.

Colombia, se ha tomado como referente para el resto de las constituciones de la región, por cuanto con la expedición de la Constitución de 1991, se innovaron aspectos relacionados con el catálogo de derechos fundamentales, la creación de varios órganos colegiados como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría del Estado Civil, entre otros. No solo por lo descrito en líneas anteriores, Colombia ha sido ejemplo a nivel suramericano, sino por el proceso mediante el cual se llevó a cabo la determinación de la necesidad del cambio constitucional, es decir, la Asamblea Constituyente, en razón a que la Constitución de 1886 sólo aceptaba cambios constitucionales mediante trámite en el Congreso de la República y no por el poder primario, situación que generó inconvenientes para su inicio, pero que no fue un obstáculo para que se llevara adelante el proceso a feliz término.

Fueron bastantes los acontecimientos que ocurrieron para que la cabeza del poder ejecutivo de la época, decidiera sobre la imperiosidad de acercarse al pueblo y se tomara la decisión de cambiar la norma que regía en materia constitucional desde el 04 de agosto de 1886, estando Colombia en una situación de orden público, social, económico y cultural muy diferente, a lo que acontecía en 1990, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Son numerosos los tratadistas que describen el proceso por el cual se llega a la Constituyente, durante y después con la materialización del texto, pero para efectos del presente trabajo, se realizará un recuento histórico desde los albores del Frente Nacional (años setenta), hasta el gobierno de César Gaviria Trujillo en el año de 1991, donde se promulga y proclama la Nueva Constitución Política de Colombia, que hasta hoy se encuentra vigente, con modificaciones y adiciones, pero sin un cambio en su esencia primordial, el pasar de un estado de sitio a un estado social de derecho.

La historia de la Constituyente de 1990, no solo se remonta a los años que la precedieron, sino desde mucho tiempo antes, como se describirá y analizará en las líneas que continúan.

Desde el año 1958, en Colombia existe una tradición electoral, es decir, se ejercen democráticamente los derechos de elegir y ser elegido a través de las elecciones, en la periodicidad que contemplaba la Constitución de 1886. En esa época, las disputas por el poder eran entre el partido Conservador y el Liberal, cuya trayectoria se puede calcular desde mediados del siglo XIX. Entre los años 1948 a 1957, acaeció la guerra civil llamada “La Violencia”, donde se excluía al adversario utilizando la violencia, lo que condujo a una “polarización política” (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2010, p. 104). En el año de 1958, entre los liberales y los conservadores se pactó el “Frente Nacional”, cuyo fin era ponerle fin a las guerras ocurridas durante la época de “La Violencia”, pero no todo fue fructífero, quedaron sin resolverse problemas generados durante la guerra civil, tales como las grandes demandas de campesinos forzados a aislarle en las selvas para sobrevivir a la violencia o quienes dejaron el campo y se desplazaron a las ciudades huyendo de la muerte entre 1948 y 1964.

Con el Frente Nacional se terminó la dictadura y se dejó atrás el régimen policial que encabezó el genocidio después del asesinato de Gaitán y del levantamiento liberal. Pero el monopolio del poder por el bipartidismo, con la alternación en la Presidencia y la paridad en todos los cargos públicos, dejó por fuera a quienes no formaran parte de las maquinarias de los partidos del Frente Nacional y de los señores feudales de la política regional. Y a ese país excluido le tocó soportar décadas de Estado de Sitio y de promesas incumplidas que incluyeron la reforma agraria o la participación social y política de las capas medias urbanas, de los intelectuales o los trabajadores. Las elecciones de 1970 dejaron un retrato de la crisis del Frente Nacional y marcaron el inicio de otra ola de violencia y guerras en la historia del siglo xx. Las élites bipartidistas resolvieron prolongar a dieciséis años ese régimen de monopolio político y de Estados de Sitio, y para hacerlo recurrieron al fraude electoral para desconocer el triunfo en las urnas del general Gustavo Rojas Pinilla. El país se salió de madre y volvió a intensificarse la violencia y el alzamiento guerrillero. El presidente Alfonso López Michelsen resumió la situación al final de la década de los setenta con su lema “Constituyente o catástrofe”, que era evidencia de que la realidad social y política del país no cabía en la camisa de fuerza del Frente Nacional a pesar de todos los remiendos hechos al orden constitucional. La llamada “Pequeña Constituyente”, propuesta por López Michelsen para reformar la justicia y hacer ajustes al Estado, fracasó en medio de las controversias entre las cúpulas de los partidos y la agitación social que se resumió en el Paro Cívico Nacional de 1977.

No se dieron los cambios pero sí la catástrofe de décadas de violencia generalizada hasta el proceso constituyente de 1990. (González, 2012, p. 66)

Por tanto, la “Pequeña Constituyente” nació debido a la necesidad de terminar con la violencia que golpeaba al país en los años setenta, pero no se pudo llevar a cabo por los mismos actores políticos y sociales. En 1974, con el fin del Frente Nacional

La clase política gobernante era cada vez más consciente de la impotencia del frágil Estado colombiano para hacer frente a la situación de agitación social, violencia y criminalidad crecientes. La respuesta de los gobiernos sucesivos (López Michelsen, 1974-78; Turbay, 1978-82; Betancur⁵, 1982-86, y Barco⁶, 1986-90) fue la propuesta de sendas reformas constitucionales, que fueron bloqueadas en el Congreso de la República o declaradas inexecutable por la Corte Suprema de Justicia, salvo la elección popular de alcaldes, contenida en el Acto Legislativo 1 de 1986 (Safford y Palacios, 2002, p. 336)

Terminando la década de los ochenta, Colombia estaba sumida en el caos y en consecuencia se convirtió en uno de los países más violentos del mundo (Montenegro, 2006). Las masacres cometidas por la alianza militar-paramilitar se alternaban con la violencia guerrillera; la eliminación de un partido político (Unión Patriótica), con el asesinato de políticos, intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales (Hernández, 2013). En ese orden de ideas, se puede establecer que el periodo del “Frente Nacional”, no es un modelo de democracia como tal, sino que se considera como un periodo en el cual, los dos partidos políticos

⁵ Betancur inició la apertura democrática en el país, con la incorporación de los principales grupos y movimientos armados a la vida civil; promovió la vivienda sin cuota inicial, la universidad abierta y a distancia, la campaña Camina, orientada a la alfabetización masiva, y la amnistía tributaria. Durante su gobierno se aprobó la ley sobre elección popular de alcaldes; reformas a los regímenes departamental y municipal, al Congreso y a la justicia. (Tocancipá, s.f.)

⁶ Barco, al ocupar la presidencia puso en marcha el controvertido esquema de "gobierno-oposición", con el cual buscaba superar los vestigios del bipartidismo que, en su concepto, bloqueaba el sistema político, impedía la crítica y desvirtuaba el papel de los partidos, al concentrar su atención en la distribución de sus cuotas burocráticas. La respuesta del conservatismo a este esquema fue la "oposición reflexiva", absteniéndose de participar en la administración. Los primeros meses de su gobierno fueron tormentosos: además de la oposición conservadora al nuevo esquema, tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos de paz firmados durante el mandato de su antecesor. A ello se sumaron numerosos atentados guerrilleros y el terrorismo vinculado con el narcotráfico. (Herrera, s.f.)

predominantes en el país, pactaron su alternancia en el poder, con el fin de no competir, disfrutarlo por mitades y excluir del gobierno a todas las opciones diferentes (Osuna, 2009)

En 1989, ¿De dónde salía la idea de un plebiscito para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en ese momento? era una idea que ya tenía recorrido y trayectoria en el país. En parte, tenía que ver con la urgencia que se venía planteando desde hace años en círculos liberales cercanos al gobierno de Barco de que era indispensable hacer una reforma institucional importante para conjurar la crisis de legitimidad de finales de los años ochenta. Esta posición tenía eco tanto en los profesores invitados a la mesa de discusión del Rosario como en los alumnos mismos, que ya habían dicho en el comunicado de la Marcha del Silencio que se tenían que reformar “aquellas instituciones que impiden la solución de la presente crisis”. El origen de la idea del plebiscito es del mismo gobierno de Barco. Inicialmente este se había opuesto a la reforma constitucional; incluso en su discurso de posesión había rechazado la posibilidad de hacer una reforma constitucional y sus innovaciones en el manejo de la situación del país se planteaban todas a través de decretos de estado de sitio. Sin embargo, la Corte Suprema tumbaba uno tras otro los decretos, y la situación empeoraba. En 1988 Barco propuso un plebiscito para permitir entonces la reforma constitucional; por oposición del Partido Conservador, sin embargo, el plebiscito se convirtió en el referendo de una reforma adoptada por vía del Congreso. Antes de sacar esto adelante el Consejo de Estado declaró inconstitucional el acuerdo entre el gobierno y el Partido Conservador para hacer el referendo. Allí murió la idea del plebiscito, pero quedó en el aire la propuesta de que una convocatoria al pueblo era parte de la solución que el país necesitaba. (Lemaitre, 2009, p. 91)

Como bien se expuso, la propuesta del plebiscito no fue abanderada por los órganos colegiados judiciales existentes en el momento, y fue desestimada por razones de índole política y social, pero, se generó la inquietud sobre la imperiosidad de generar un cambio en toda la arquitectura institucional del país, para no continuar en el camino de la guerra y la zozobra. Otro evento que marcó la necesidad de cambio en el país, en la antesala de las elecciones de 1990, fue el asesinato de Luis Carlos Galán (Candidato a la presidencia por el partido liberal colombiano), el 18 de agosto de 1989:

...y junto a él varios de sus seguidores o amigos que llamaban a perseguir a los carteles y a extraditar a los capos. Fueron asesinados, entre otros, el ministro Rodrigo Lara Bonilla, el ex ministro Enrique Low Murtra, el gobernador de Antioquia Antonio Roldán; el general Waldemar Franklin, comandante de la Policía de Antioquia, la periodista Diana Turbay y el director del diario El Espectador don Guillermo Cano. Los capos de la mafia dinamitaron edificios en Medellín y Bogotá y desataron una ola de terror que además incluyó bombas en aviones, centros comerciales y en lugares públicos, secuestro de dirigentes políticos o de sus familiares y de conocidos periodistas. Más de sesenta carros bomba explotaron en Medellín y Bogotá. Los sicarios eran recompensados por matar policías cuando llegaban inermes a sus casas al terminar la jornada; por otra parte, la guerra entre carteles significaba centenares de muertos cada semana en las principales capitales de Colombia. Y a la guerra de los carteles se sumaba la otra guerra, la de la insurgencia y la contrainsurgencia, que tenía nuevos capítulos después del fracaso de las conversaciones intentadas en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Después de la tragedia provocada en el Palacio de Justicia, el M-19 llamó a una “guerra contra la oligarquía” y secuestró al dirigente conservador y candidato a la Presidencia de la República, Álvaro Gómez Hurtado, para liberarlo a cambio de unos diálogos de paz. La ruptura de la tregua con las FARC se acompañó del genocidio de miles de militantes de la Unión Patriótica y de la reorientación de esa guerrilla para hacerle la guerra al Estado y derrocarlo por las armas. Es en medio de ese ambiente de terror y como reacción a él, que emerge, desde diversas vertientes, el movimiento para reinventarse las instituciones e intentar con una Constituyente oponerle un pacto de democracia, paz y esperanza a la violencia y al fracaso de las respuestas de inspiración militarista. (González, 2012, p. 64)

Al ver que el país se encontraba sumido en una ola de violencia por cuestiones de índole política, donde cada dirigente que proponía un cambio en el anclaje estatal era asesinado por no apegarse a la apología a la guerra, fueron el detonante para desatar un amplio movimiento estudiantil, inicialmente incubado en las universidades privadas⁷ pero rápidamente extendido a todo el país. La bandera de ese movimiento fue el cambio del viejo régimen y la convocatoria de un plebiscito para abrirle paso a la renovación. El movimiento “Salvar a Colombia” impulsado por las juventudes universitarias también promovió la necesidad de una Constituyente (González, 2012). Ese grupo estudiantil,

⁷ Universidad del Rosario, Los Andes o la Javeriana, entre otros centros de educación superior

... asumió su rol renovador y desde las aulas, surgió la fórmula de la Séptima Papeleta. En marzo de 1990 debía realizarse la elección de Senado, Cámara, Asamblea, Alcaldía, Concejo y Consulta Liberal para elegir candidato presidencial. Los estudiantes agregaron un séptimo voto para que obrara como un plebiscito de opinión a favor de una Asamblea Constituyente. Una idea tan novedosa que pronto se pegaron los políticos. Después derivó en fervor ciudadano. (...) Con apretada decisión, en octubre la Corte respaldó el decreto. (...) La Alianza Democrática M-19 se quedó con 19 curules. El Partido Liberal, aplicando la llamada “Operación Avispa”, alcanzó 24 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional logró 11 curules. Esta votación permitió a Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez compartir la presidencia de la Constituyente. El 5 de febrero de 1991, voceros de los indígenas, de los sindicalistas, de todos los matices ideológicos, emprendieron la tarea de redactar una nueva carta de navegación para Colombia. En octubre la Corte Suprema de Justicia respaldó el decreto de estado de sitio para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente “...y el 9 de diciembre los colombianos, con abstención electoral del 75%, conformaron la anhelada Constituyente” (Cardona, 2011)

Entonces, se puede determinar que desde los años setenta, se entabla la necesidad de una Constituyente y finalizando la década de los ochenta, se volvió a tocar el tema,

...siempre en choque con la Constitución entonces vigente que sólo aceptaba cambios constitucionales mediante trámite en el Congreso de la República. Con un Congreso capturado por el clientelismo bipartidista y con cada vez mayor presencia del narcotráfico, resultaron infructuosos los intentos de modernización institucional e imposibles las iniciativas de reforma para instituir la figura de la Asamblea Constituyente. El presidente Barco llegó a proponer un pacto político para incluir una papeleta de voto en las elecciones de 1988 que sirviera para promover la reforma institucional, pero la idea se ahogó en la reunión de los partidos políticos. En lugar de la papeleta optaron por una Comisión de Reforma. La papeleta de Barco, aunque no era para promover una Constituyente, dejó en el ambiente la posibilidad de utilizar esa figura como un instrumento de pronunciamiento extrainstitucional y de soberanía popular. (González, 2012, p. 68)

Así, ante tan difícil panorama, sobrevinieron dinámicas de búsqueda de soluciones políticas. Allí se originó el punto de inflexión histórica que condujo a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya posibilidad y realización se relacionó directamente con varios procesos de paz con la

insurgencia e implicó el cambio político e institucional más importante en nuestra historia reciente con la Constitución Política de 1991 (González, 2012). Los grupos alzados en armas, tales como:

...el Ejército Popular de Liberación (EPL), junto con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), ante la expectativa en 1990 de conseguir la convocatoria de la Constituyente, iniciaron negociaciones de paz con el Gobierno Nacional y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia adoptar un fallo que permitiera una Constituyente sin restricción a su soberanía y su temario –como lo pretendía el gobierno Gaviria– y con facultad de reformar integralmente la Constitución Política, argumentando que tal posibilidad permitiría consolidar los pactos de paz en curso con los diferentes movimientos alzados en armas. Así fue como en 1991, al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente, hubo nuevos pactos de paz definitivos con el EPL, el PRT y el MAQL. . (Villarraga, 2012, p. 72)

El 7 de agosto de 1990, se posesionó en la Presidencia de la República César Gaviria, quien continuó con la idea de llevar a cabo la reforma constitucional que había promovido Virgilio barco y

...mediante el Decreto 1926 del 24 de agosto estableció "medidas para el restablecimiento del orden público", es decir, la celebración de una Asamblea Constitucional, con un temario y una composición previamente acordados con las fuerzas políticas más importantes. La Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la convocatoria, pero inconstitucional el temario que se fijaba a la Constituyente, y de esta manera se abrió la puerta, no ya para una reforma constitucional, sino para la expedición de una nueva constitución (Younes, 2004, p. 189)

La Corte planteó que debía tenerse en cuenta "su virtualidad para alcanzar la paz. Aunque es imposible asegurar que el mencionado decreto llevará necesariamente a la anhelada paz, no puede la Corte cerrar esa posibilidad" (Younes, 2004, p. 191).

Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema derrotados en la sentencia final sostuvieron la inconstitucionalidad del decreto gubernamental, con base en argumentos que merecen recordación. En el Salvamento de Voto, los magistrados que se apartaron de la decisión

mayoritaria plantearon: "Tememos estar en presencia de un retroceso de nuestro régimen institucional por la implantación de un nuevo período de expansión del estado de sitio más allá de los confines que la Constitución le señala [...] El ímpetu propio de la excepcionalidad constitucional parece empujar siempre su ejercicio más allá de los límites que le competen" (Baquero et al., 1990, como son citados en Hernández, 2013, p. 57).

Los apartes que limitaban la competencia de la Asamblea fueron declarados inexecutable. También suprimió la norma que disponía un control de constitucionalidad posterior sobre el texto que expidiera la Asamblea. Esta decisión convirtió a la Asamblea en un cuerpo soberano y autónomo, en una verdadera Asamblea Constituyente, sólo limitada por el mandato fijado por el pueblo en el tarjetón. (Romero, 2012, p. 184)

El estado de sitio (excepción), una figura del derecho constitucional diseñada para afrontar una crisis de un orden constitucional y permitir su defensa, se convertía ahora en la fuente formal de su disolución. En un momento de anomia y violencia generalizada, la nueva Constitución de 1991 tuvo una función histórica similar a la del plebiscito de 1957, es decir, la de un mito político fundacional. (Mejía Quintana 1998 177). De nuevo, un pacto constitucional aparecía como el medicamento para la enfermedad y como un renacer de la nación. La Asamblea Nacional Constituyente fue percibida como un gran espacio democrático y pluralista, por el papel desempeñado por nuevos actores políticos y sociales: la participación de los exguerrilleros del M-19 y de otras pequeñas organizaciones que abandonaron también las armas, los grupos de indígenas y de negros, tradicionalmente excluidos y discriminados en Colombia. (Hernández 2013, p. 6)

Al establecerse esos acuerdos con el gobierno y los grupos al margen de la ley, al ver la necesidad de cambio en los poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial), por cuenta de la presión de los narcotraficantes al incrementar la violencia en el país por no acatar sus "peticiones" y otras cuestiones más, llevaron a que el 09 de diciembre de 1990, se identificara

...el apoyo popular a la convocatoria de la Constituyente en las elecciones, donde se consultó oficialmente al pueblo sobre la convocatoria a la Asamblea. El resultado de la votación por la Asamblea Constitucional fue así: Sí: 4.991.887, No: 226.451, Total: 5.218.338. . (Centro de Estudios Constitucionales, plural, 2012, p. 75)

La Asamblea Constituyente, que deliberó entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, fue el punto de llegada de un conjunto de acontecimientos que atropellaron la política colombiana de los años ochenta y principios de los noventa. (Centro de Estudios Constitucionales, plural, 2012)

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue, de hecho, uno de los resultados políticos de negociaciones con grupos guerrilleros, y ella misma parece haber sido un escenario de diálogo con grupos de poderosos narcotraficantes. El gobierno de Barco había tenido éxito en un proceso de paz con varias organizaciones guerrilleras que pedían una participación en la expedición de una nueva constitución, y, en efecto, participaron en la ANC (Chernick 1999, 180). Al mismo tiempo, el grupo de Los Extraditables, liderado por el capo del narcotráfico Pablo Escobar, había ejecutado una serie de atentados y secuestros contra personajes importantes del establecimiento. El gobierno de César Gaviria negoció con ese grupo, y en algún momento ya era un secreto a voces... de modo sospechosamente coincidente, Pablo Escobar se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991, el mismo día que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el artículo 35, que prohibió la extradición de nacionales (9) (García Márquez 1999, 319; López Restrepo 2006, 426). (Hernández, 2013, p. 7) <http://vlex.com/vid/constitucion-enemigos-fracaso-consenso-507489106>

En la Asamblea participaron los sectores de mas representación política e importancia del país: Partido Liberal Colombiano, Alianza Democrática M-19 y exponentes de las distintas vertientes conservadoras; minorías como la Unión Patriótica; movimientos ex-guerrilleros recién incorporados al régimen: Esperanza, Paz y Libertad (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Movimiento Indigenista Quintín Lame; organizaciones Indígenas y representantes de la Unión Cristiana que no pertenecía a la confesión religiosa oficial del Estado. (Bohórquez, 2001, p. 17)

Ahora bien, la Constitución de Colombia de 1991:

...redactada y aprobada por una Asamblea Constituyente elegida mediante voto popular, es ampliamente considerada como la más democrática que haya tenido el país en su historia independiente, no solo por su origen, sino también por su contenido. Si bien la Carta de 1991 no carece de vacíos, incoherencias y defectos, su espíritu es indiscutiblemente democrático: se trata

de una Constitución ampliamente pluralista, que contribuyó a quebrar el monopolio que sobre la vida política del país mantenían los dos partidos tradicionales, a la vez que profundizó el proceso descentralizador iniciado durante la década anterior; también procuró crear un mejor equilibrio entre los poderes públicos, devolviéndole atribuciones al Congreso, mientras que fortalecía el Poder Judicial e introducía nuevas limitaciones al poder discrecional del presidente de la república. (Bejarano et al, 2010, p. 128)

...la Constituyente de 1991 adoptó una forma de poder independiente frente a los poderes establecidos, rescató la doctrina del poder popular constituyente y expidió una nueva Constitución Política que restableció también en su contenido el principio de la soberanía popular. (Villarraga, 2012, p. 70)

Dicha Constitución “...es considerada como la primera en Latinoamérica con una real vocación integracionista, que no surgió de manera espontánea, sino que se evidencia desde los primeros intentos realizados incluso desde cuando se encontraba vigente la Constitución de 1886. (Insignares, 2015, p. 84)

La nueva Constitución dio lugar a la creación de una serie de instituciones nuevas (entre ellas, la Fiscalía General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, los jueces de paz), reorganizó las funciones y competencias de cada una de ellas, y les otorgó instrumentos novedosos (como la acción de tutela) con el fin de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Bejarano et al, 2010, p. 137)

La Constitución Política de 1991 definió a Colombia como un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, y es precisamente la noción de dignidad, el valor axiológico a partir del cual se fundamenta la protección judicial frente al catálogo de derechos económicos, sociales y culturales proclamados [en la Carta Magna]. (...) El concepto de dignidad humana constituye el fundamento jurídico y filosófico de los avances que se han producido en Colombia en materia de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) (Bejarano et al, 2010, p. 141).

Lo cual, ha sido objeto de:

...críticas apuntan específicamente a la ineficacia del modelo de justiciabilidad de los DESC. Pese al activismo de la Corte, resulta claro que los profundos desequilibrios sociales que persisten en Colombia y la ausencia de una política social que garantice la materialización de estos derechos para todos los ciudadanos (independientemente de su clase social o lugar de residencia) no son remediables por la vía judicial (Bejarano et al, 2010, p. 144).

En este estadio de la investigación es menester concluir primariamente que las elecciones presidenciales llevadas a cabo tenían como base la plataforma de cambio constitucional, para lo cual, la finalidad de las Asambleas Constituyentes celebradas en los países de estudio obedecían a establecer nuevas pautas de relación entre el Estado, la economía política, cultural y generar en la sociedad un protagonismo importante del movimiento campesino e indígena por medio de transformaciones sociales, económicas y políticas impulsadas directamente por el pueblo. También, en la consagración de los derechos no sólo fundamentales sino los económicos, sociales y colectivos, protegiéndolos y garantizando su aplicación inmediata y preferente.

Si se comparan los tres procesos llevados a cabo en épocas diferentes, se pueden encontrar como semejanzas que contribuyeron con ampliar la participación democrática en la construcción de los proyectos de constitución con la decisión de realizarlo a través de asambleas constituyentes elegidas por el poder primario y al analizar el contexto en el que surgió la idea del cambio constitucional, se estableció la necesidad de ampliar la carta de derechos y libertades, así como la creación de mecanismos de protección de los mismos. Todo esto conlleva a determinar que se centra en el Estado, poder ejecutivo, la obligación de garantizar la protección y debida aplicación de las políticas públicas por medio de la creación de una arquitectura institucional tendientes a dar cumplimiento a los derechos catalogados como fundamentales en las Constituciones, lo que no necesariamente certifica que en debida forma se ejecuten a favor de los ciudadanos, sino que en muchos casos deben acudir a instancias judiciales para su efectivo goce y disfrute, tal como se verá en los próximos capítulos.

Desglosando a cada estado en particular, se puede decir que las razones por las cuales se decidió acudir a la creación de un texto constitucional, tendía a que

...en Colombia, en 1991, se buscó de manera intencional un mayor y mejor equilibrio entre los poderes, al reducir las prerrogativas presidenciales y aumentar las facultades tanto del Congreso como de las Cortes, a la par que se profundizó el proceso de descentralización iniciado años atrás. En otros casos (Venezuela 1999, Ecuador 1998 y 2008), la tendencia fue exactamente la contraria: allí los procesos constituyentes aumentaron los poderes presidenciales, crearon Congresos unicamerales con menor capacidad para ejercer el control político sobre el Ejecutivo, mantuvieron poderes judiciales dependientes del poder presidencial y revirtieron la tendencia anterior a la descentralización, transformaciones todas que afectan en forma negativa el equilibrio de poderes, a favor del Ejecutivo y en detrimento de las demás ramas del poder. La Constitución boliviana de 2009 se sitúa a medio camino en este espectro, pues si bien fortaleció el poder presidencial (al aprobar, por ejemplo, la reelección presidencial), mantuvo de manera simultánea un Congreso bicameral con fuerte capacidad de control sobre el Ejecutivo, a la par que fortaleció el poder judicial y profundizó la descentralización. (Bejarano y Segura, 2013, p. 42)

En efecto, después de haber analizado los antecedentes de los procesos constituyentes llevados a cabo en los países materia de estudio, se puede concluir que un rasgo común al establecer la necesidad de crear una Asamblea Constituyente para instaurar una nueva Constitución en Ecuador, Bolivia y Colombia, fue la necesidad de garantizar la protección de los derechos con sus respectivas garantías tendientes a salvaguardar a los individuos que habitan los respectivos territorios, innovando en la protección de las libertades y demás. Un aspecto en el que coinciden los tres procesos constituyentes antes descritos, tiene que ver con el paso de un Estado de derecho, a la integración en las cartas políticas, el aspecto social que debe enmarcar la realización y ejecución de cada Estado. Por tanto, se innova con la consagración de la cláusula de Estado Social de Derecho para los países de Colombia y Bolivia y para el caso de Ecuador, se determinó como Estado Constitucional, que no desmerece sino que se enmarca dentro de los postulados de las otras consagraciones.

Habiendo descrito los procesos políticos y sociales que antecedieron las constituyentes en los países de estudio y al haber encontrado varias similitudes y diferencias en los acontecimientos, para efectos del presente trabajo, es menester entrar a definir conceptualmente qué se entiende por política pública, toda vez que es tema de investigación, determinar cuál es el estado de los

derechos a la salud y a la educación, por medio de la evaluación de las políticas públicas formuladas, implementadas y ejecutadas en Ecuador, Bolivia y Colombia.

1.2 Marco conceptual de Políticas Públicas. Orígenes, definiciones y elementos esenciales en materia de educación y salud.

Para dar respuesta al problema jurídico propuesto en el presente trabajo de investigación, el cual se circunscribe en determinar cuál es el estado de los derechos fundamentales a la educación y a la salud en Ecuador, Bolivia y Colombia como elemento esencial de los estados sociales de derecho, por medio de la evaluación de las políticas públicas formuladas e implementadas por los Gobiernos de cada estado para cumplir con los postulados constitucionales de cada derecho, se hace necesario, que en este aparte no solo se defina que es una política pública sino que se describa y analice de donde se origina el concepto y la aplicabilidad en cada país. De acuerdo al análisis que realiza Roth (2017), sobre lo estudiado por Foucault (2006:355ss), en un primer momento, se pueden remontar los orígenes de la política pública moderna.

...con el *traité de pólíce* de Delamare publicado en Francia en 1705 y, sobretudo, a la *Polizeiwissenschaft* (ciencia de policía), o ciencias camerales prusianas, desarrolladas durante la segunda parte del siglo XVIII. Von Justi fue uno de sus principales representantes. En su obra “*Grundsätze der Policy-Wissenschaft*” (1756), propuso principios de acción para “velar por los individuos que viven en sociedad” y “consolidar la vida cívica” pero con la finalidad de obtener un “reforzamiento del poderío del Estado” (Lascousmes y Le Galés, 2004, p. 17)

Ahora bien, en un segundo momento, en los años setenta, surge preocupación por las políticas públicas durante la guerra fría:

...cuando Estados Unidos comprometió un alto gasto militar – sobre todo en investigaciones nucleares y en materia espacial-. Esta constituía la respuesta natural a la tensión creciente entre aquellos países aliados alrededor del Pacto de Varsovia, amigos de la Unión Soviética y las

naciones que hacían parte de la OTAN, liderados por Estados Unidos.” (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 15)

En vista de esto, por el gasto público de Estados Unidos en la guerra fría, se comenzó a cuestionar sobre cuál era la forma más indicada de hacer uso de los recursos del Estado, generándose así el concepto de rendición de cuentas, el cual se considera como la piedra angular de las políticas públicas.

Seguidamente, en los años ochenta, el análisis de la acción de las autoridades públicas se desarrolla, con la entrada en juego de varias teorías del Estado. Es así que las políticas públicas, que habían nacido como una ayuda a la acción gubernamental, pasan a ser consideradas como una variable dependiente de la ideología, de los partidos políticos y de los recursos. Y posteriormente, a comienzos de la década de los noventa, se cambió el concepto de concebir las políticas públicas como un resultado del sistema político, por cuanto, tal premisa entendía a la política pública como un producto, partiendo de la premisa de que las políticas públicas eran las que definían a la política y de que estas constituyen un medio para observar los cambios que se producen en el sistema (Defensoría del Pueblo, 2010).

Estas concepciones son en general, es decir, no se centran a lo que ha acontecido en América Latina. Para el efecto, autores como Roth, Muller y Zimmerman, destacan como temas centrales sobre políticas públicas, a partir de la segunda posguerra del siglo XX, los siguientes (Defensoría del Pueblo, 2010):

- En los sesenta, se elaboran estudios sobre la implementación de las decisiones y las dificultades del modelo de Estado de Bienestar, en materia de resultados
- En los setenta, se cuestiona la capacidad real de los Estados para formular políticas públicas autónomas.
- En los ochenta, surgen problemáticas respecto de la definición de las agendas gubernamentales y en la configuración de actores que influyen en las políticas públicas. “... En América Latina se adoptó un modelo neoliberal como base para la formulación de políticas centradas en la liberalización de los mercados y la reducción del Estado, teniendo en

cuenta la acumulación de una gran deuda social y privilegiando el ajuste económico para el pago de las acreencias externas.”

- En los noventa, se destacan estudios relacionados con la eficiencia de la gestión pública y el análisis sobre el tipo de intervención del Estado. (p. 16)

En ese orden de ideas, es menester identificar los antecedentes de las políticas públicas en Colombia, el cual comienza en los años noventa, con la adopción de políticas de apertura en materia económica, de privatizaciones de los servicios públicos, de avances en la descentralización municipal y de grandes transformaciones institucionales, llevadas a cabo con la expedición de la Constitución Política de 1991. Dicho modelo llegó treinta años después de lo que se comenzó a estudiar en Estados Unidos, debido principalmente a la aplicación del modelo neoliberal con la nueva carta política.

Al mirar el análisis de las políticas públicas, se debe abordar el estudio de la acción pública desde varios aspectos como son la definición de la agenda gubernamental, los modos de decisión, la acción de las instituciones, el papel de las elites, los análisis de gobernanza, la cuantificación de resultados, la aplicación de indicadores de gestión, entre otros (Defensoría, 2011). Todo esto enmarcado en la época de violencia que aquejaba el país en la década del noventa, donde surgió el tema en particular, por cuanto, se ve la necesidad de aplicar políticas enfocadas hacia la generación de garantías en materia económica, social y de seguridad para quienes deseaban invertir en el país.

En ese orden de ideas, se debe proceder a definir el concepto de las políticas públicas, para lo cual, existen por lo menos tres acepciones que se encuentran cobijadas por la misma palabra y que el idioma inglés si distingue. Primero, la política concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, polity en inglés. Segundo, la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder, politics en inglés. Y finalmente, policy en inglés, que traducido al español equivaldría a *política pública*, entendiendo a la política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, es decir, tanto la producción normativa de las instituciones públicas a través de planes, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, fallos jurídicos, etc., como las actividades políticas y administrativas oficiales realizadas por

actores políticos, sociales y autoridades públicas, por medio de discursos, textos, nombramientos, etc., para la elaboración, decisión, implementación y evaluación de esta producción, así como sus efectos en la sociedad y en la actividad política (Roth, 2017, p. 35)

En pocas palabras, se puede entender como política pública, las diversas reacciones de carácter sucesivo del Estado – a través de un determinado gobierno- , frente a circunstancias específicas – sociales, económicas, administrativas- que se pueden considerar como generadoras de problema o conflicto, con el fin de llegar a una resolución pronta y manejable. De acuerdo a las definiciones anteriores, Roth (2017) considera que hay cuatro elementos centrales que permiten identificar la existencia de una política pública, los cuales, se complementan con el estudio realizado por la Defensoría del pueblo de Colombia, sobre la evaluación de la política pública en materia de salud: 1- implicación del Gobierno o de una autoridad pública y de los distintos actores de la sociedad; 2- percepción de problemas o expresiones de insatisfacciones; 3- definiciones de objetivos y 4- un proceso emprendido para identificar la existencia de la política. Por consiguiente, es dable establecer que para que exista una política pública, las instituciones estatales, gubernamentales o de carácter público (oficial), deben arrogarse la labor –total o parcial- de lograr conseguir objetivos, apreciados como deseables o necesarios, a través de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático o insatisfactorio.

Asimismo, se entiende que la política pública contiene una dimensión temporal, por cuanto, el escenario que la origina se ubica en un momento determinado; tiene una dimensión espacial, en tanto se gestan de acuerdo a las situaciones propias de los diferentes espacios que la ocasionaron; y por último, comprende procederes de carácter económico, político y cultural específico para cada caso en particular. Aquí se evidencia que es responsabilidad del Estado, apuntar a suprimir de forma definitiva, el entorno incierto e inseguro que se generó, lo cual, muchas veces solo puede hacerse manejable temporalmente, para que se entre “...en un rango de tolerancia social.” (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 20). Existen factores que impiden que se pueda erradicar de fondo la problemática presentada, esto es, limitaciones institucionales, falta

de información, o de tipo económico, ocasionando conflictos políticos que caen en problemas de desintegración social y confluir en dificultades de gobernabilidad (Defensoría del Pueblo, 2010).

Ahora bien, existen etapas en el proceso de las políticas públicas. En primera instancia, el Estado – a través del gobierno de turno- debe identificar los principales problemas que aquejan a la sociedad, sean de carácter social, económico, político, administrativo, judicial o cultural. Seguidamente, debe formular las soluciones para los problemas identificados, teniendo en cuenta los obstáculos que se presenten a la planificación, su evolución misma, con el fin de reducir la incertidumbre e incoherencia que tengan los miembros de la sociedad. En este momento, es imperante la participación de instancias sociales, pues son ellos quienes conocen de primera mano la situación que los aqueja. En tercer lugar, se deben implementar las decisiones producto del análisis y la formulación realizada, a través de planes, programas, proyectos que busquen erradicar la problemática generada. Y por último, ¿debe evaluarse el grado de eficacia o eficiencia de los resultados de las políticas públicas formuladas e implementadas, con el objetivo de determinar si la política implementada es o ha sido exitosa o no?, ¿en qué medida se lograron los objetivos propuestos por una ley? y ¿cuáles han sido sus consecuencias y sus costos? (Roth, 2017), entre otros.

Con la proclamación de catálogos de derechos fundamentales en las constituciones de Colombia, Ecuador y Bolivia, se genera para los estados – gobiernos de turno- la imperiosidad de formular e implementar políticas públicas tendientes a satisfacer la debida y correcta aplicación de esos derechos consagrados. De igual manera, se genera la necesidad de evaluar si las políticas implementadas han sido exitosas o no, si han cumplido con el objetivo por el cual se formularon o si por el contrario, ha sido imposible para el estado garantizar su aplicación.

Para la correcta formulación de las políticas públicas en materia educativa, los Estados deben ceñirse a las obligaciones que le impone el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General 13 de la ONU (1999), la cual se enmarca en el “Derecho a la educación”, esta, en su párrafo 46, establece que el derecho a la educación

...como todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer.

De forma seguida, en el párrafo 47 (Defensoría del Pueblo, 2010) describe cada una de las obligaciones mencionadas, y se entiende por cada una lo siguiente:

- i. Obligaciones de respetar. El Estado debe evitar medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho. Las obligaciones de este tipo, a diferencia de las de proteger y cumplir, son las que menos están condicionadas a la disponibilidad de recursos.
- ii. Obligaciones de proteger. Este tipo de obligaciones se concretan en la protección de la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del derecho. También se refieren a prevenir la violación del derecho por terceras partes.
- iii. Obligaciones de cumplir. Exigen al Estado la adopción de medidas positivas y apropiadas de diferente índole: administrativas, legales, judiciales, que permiten el disfrute del derecho y pueden ser obligaciones de dos tipos: facilitar y proveer.
 1. Obligaciones de facilitar. El Estado deberá facilitar al individuo o comunidad el pleno disfrute del derecho.
 2. Obligaciones de proveer. El Estado deberá adoptar medidas de política pública para asegurar la realización del derecho así como su materialización prestando especial atención a los grupos poblacionales más vulnerables. (p. 37)

Para el caso de estudio, se analizará la obligación de proveer antes descrita, por cuanto enmarca el objetivo del presente trabajo de investigación, respecto al derecho a la educación.

Y respecto del derecho a la salud

las Observaciones Generales No. 14 y No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de educación física

y mental, ofrecen el contenido normativo básico del derecho a la salud, que permiten precisar y desarrollar el contenido de las obligaciones en torno a los cuales debe desplegarse la política pública en materia de salud y los objetivos generales y específicos hacia los cuales debe dirigirse prioritariamente la acción del Estado. (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 27)

De acuerdo a lo que se establecen en las Observaciones citadas con anterioridad, la política pública en materia de salud debe articularse en torno a dar cumplimiento a cuatro elementos esenciales, que son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. A través de ellos, es posible evaluar y medir el nivel de cumplimiento de las metas u objetivos implementados para la realización de ese derecho, respecto a la obligación que tiene el Estado.

La Defensoría del Pueblo Colombiana, por medio de una investigación que realizó tendiente a evaluar la política pública de salud en el año 2010, define cada uno de esos elementos así:

Disponibilidad. El Estado debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud y de centros de salud. Deberá incluir en su diseño y puesta en marcha los diversos factores determinantes de la salud: agua potable, condiciones sanitarias adecuadas, centros de atención en salud como clínicas y hospitales, personal especializado y bien remunerado —según las condiciones del país— y los medicamentos determinados en el programa de acción sobre medicamentos esenciales de la OMS. En lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, asegurar que el abastecimiento del líquido sea continuo y suficiente para los usos domésticos y en cantidades que respondan a las directrices fijadas por la OMS.

Accesibilidad. La accesibilidad consiste en asegurar que los establecimientos, servicios y programas médicos, así como las instalaciones y servicios de agua potable y saneamiento básico, estén al alcance de todos, sin discriminación alguna. Ello supone la satisfacción de cuatro dimensiones superpuestas:

No discriminación: todos los sectores de la población deben poder acceder a los establecimientos, bienes y servicios de salud, así como a las instalaciones y servicios de agua y saneamiento básico, sin que puedan establecerse restricciones o limitaciones discriminatorias.

Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben estar al alcance geográfico y físico de todos los sectores de la población. Los establecimientos deben adecuarse

para facilitar el acceso de las personas con discapacidad. Los servicios de saneamiento básico y las instalaciones de agua potable deben ubicarse a distancias geográficas razonables y en lugares seguros. Cada hogar, institución de trabajo, educativa y de salud debe contar con un suministro de agua suficiente y salubre.

Accesibilidad económica (asequibilidad): la equidad debe ser el principio que determine el monto a pagar por los servicios de atención en salud y por los servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la misma. El Estado debe propender porque el costo de los servicios de salud y de agua potable en los hogares más pobres no impida el acceso a los bienes y servicios de salud.

Acceso a la información: comprende los derechos de solicitar, recibir y difundir información e ideas relacionadas con la salud y sus factores básicos determinantes. En todo caso, debe respetarse y garantizarse el derecho de las personas a mantener bajo reserva los datos respecto de su propia salud.

Aceptabilidad.

La aceptabilidad del derecho a la salud involucra una dimensión de respeto por las particularidades individuales y colectivas que rodean y determinan las posibilidades de su ejercicio. La aceptabilidad comprende libertades y condiciones que están cultural, ética, histórica y socialmente determinadas. Los establecimientos, bienes y servicios en salud deben respetar las normas que prescribe la ética médica y deben ser respetuosos de las diferencias culturales. Todos los servicios e instalaciones deben ser culturalmente adecuados y tener en cuenta las necesidades relativas al género, al ciclo vital y a la intimidad, lo cual supone que el agua debe tratarse como un bien público social y cultural.

Calidad.

La calidad involucra el conjunto de condiciones que permiten a las personas y a las comunidades, disponer y acceder a servicios asistenciales y determinantes de la salud apropiados desde el punto de vista científico y técnico. La calidad del derecho a la salud está ligada a consideraciones de efectividad, oportunidad, eficiencia y eficacia. Para alcanzar una salud de calidad debe asegurarse el desarrollo sostenible del ambiente y de los recursos naturales renovables y no renovables. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico. También requieren contar con personal médico capacitado, medicamentos y equipos hospitalarios científicamente aprobados y en buen estado, condiciones sanitarias adecuadas y agua de buena calidad. (p. 27)

En conclusión:

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el Relator Especial para el Derecho a la Salud del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la política pública en materia de salud debe apuntar a la realización de dos objetivos generales: la reducción de la pobreza y la erradicación de las prácticas y medidas discriminatorias. Los Estados deben velar porque el acceso a los programas y servicios de salud, y a los factores determinantes del mismo, se realice en condiciones de igualdad, esto es, sin restricciones o diferenciaciones, y mediante una asignación adecuada de recursos. (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 29)

Otro aspecto relevante a tener en cuenta, para determinar si las políticas públicas implementadas han tenido un eco suficiente que genere una evaluación positiva en Ecuador, Bolivia y Colombia, son los ocho objetivos mejor conocidos como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, su sigla (ODM), establecidos por la cumbre de las Naciones Unidas llevada a cabo en septiembre de 2000, donde se firmó la Declaración del Milenio por la Asamblea General de la ONU. El propósito de tales objetivos era tener un mundo más pacífico, más próspero y más justo al año 2015, en especial para los más vulnerables y en particular, para los niños a los que pertenece el futuro. Los ocho objetivos del Milenio son: Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal; Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5: Mejorar la salud materna; Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Para el presente trabajo, se tendrán en cuenta los objetivos relacionados con la enseñanza primaria universal, mortalidad infantil y salud materna, los cuales se relacionan íntimamente con las generalidades de los derechos a la salud y a la educación.

El año 2015 fue el límite de tiempo para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. En tal razón, el 25 de septiembre de ese mismo año, líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, cuyas metas deben alcanzarse en

los 15 años siguientes a su promulgación. Tales objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e incluyen nuevas temáticas referentes al cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras. En total, son diecisiete (17) objetivos y para el presente trabajo de investigación, se tomarán como referencia los que se relacionan con la salud y la educación, es decir, el objetivo No. 3 “Salud y bienestar”, tendiente a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y tiene como finalidad lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos. En este objetivo se incluyen indicadores tenidos en cuenta en los objetivos del Milenio No 4, 5 y 6, que aunque se generaron avances en su cumplimiento o erradicación, aún quedan pendientes al respecto. Y el objetivo No. 4, destinado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Algunas de las metas en que se enmarca el cumplimiento de este objetivo son: la enseñanza primaria y secundaria ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria, acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, asegurar que los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados.

Para dar respuesta al objetivo del presente trabajo, se describirán y analizarán las políticas públicas en materia de educación y salud, formuladas e implementadas en los países de estudio – Ecuador, Bolivia y Colombia- con el fin de determinar la eficacia de las mismas tendientes a

determinar el cumplimiento o no de los derechos, a través de la evaluación que se realizará de los indicadores de los objetivos del milenio (2014 y 2015) y lo que va de los objetivos de desarrollo sostenible (2016, 2017) de Naciones Unidas contra las estadísticas de organismos nacionales e internacionales especializados en cada derecho en particular. En el capítulo que se acaba de desarrollar, se tocaron temas como los antecedentes sociales y políticos que se suscitaron en la década de los noventa y principios de los dos mil, por cuanto, a través de ellos fue que se determinó la necesidad del cambio constitucional, donde se innovó y se amplió la carta de derechos fundamentales, teniendo en cuenta que ya no eran estados de pleno derecho, sino que pasaban al ámbito de ser sociales y de derecho, dualidad, que generaba la necesidad de consagrar un catálogo amplio y generoso de derechos sociales para que estuvieran plasmados en un texto que les diera el mayor rango de cumplimiento. Circunstancias que eran menester describir y estudiar, por cuanto son las bases de haber plasmado como fundamentales los derechos a la educación y a la salud en los países de análisis.

En este estadio del trabajo, se hace necesario tratar el tema relacionado con el tratamiento constitucional que cada país analizado realiza a los derechos a la educación y la salud así como las diferentes políticas públicas que han sido implementadas por los gobiernos de turno para dar cabal cumplimiento a tales derechos, para posteriormente, en el capítulo III realizar un ejercicio próximo de evaluación de que tan eficaces han sido las medidas adoptadas.

2. Disposiciones Constitucionales y Políticas Públicas en materia de educación y salud en Ecuador, Bolivia y Colombia.

Aproximadamente desde el año de 1978, comienza la denominada “Tercera ola” de democratización en América Latina, donde surgen cambios o reformas institucionales, políticas, económicas, sociales y culturales, cuya consecuencia fue que en el ámbito de ciencia política, se hable del “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. En algunos países (tales como Colombia, Ecuador y Bolivia, entre otros), se produjo la necesidad de cambio en materia constitucional, por cuanto se vio la necesidad de ampliar las cartas de derechos consagradas, ampliarlas, determinar

las acciones de protección de los derechos, así como la estructura orgánica de dichos países, con el fin de fortalecer las democracias existentes.

Al observar las Constituciones producto de las asambleas constituyentes, se puede establecer que la idea principal de efectuar las reformas era fortificar los constructos democráticos existentes, los cuales evidenciaban problemas de legitimidad; lo anterior con base en el ascenso de movimientos populares nuevos que representaban la necesidad de una transformación en los países de estudio (De Sousa, 2010). Por tanto, para el análisis del presente trabajo, se comienza por determinar que el texto resultante del proceso ecuatoriano llevado a cabo en 2007-2008, se caracteriza principalmente por la innovación en el catálogo de derechos y por la definición del Estado como Estado constitucional y el proceso boliviano de 2006-2009, es seguramente uno de los ejemplos más rotundos de transformación institucional que se ha experimentado en los últimos tiempos, por cuanto avanza hacia el Estado plurinacional, la simbiosis entre los valores poscoloniales y los indígenas, y crea el primer Tribunal Constitucional elegido directamente por los ciudadanos del país.

A su vez, el proceso constituyente Colombiano a principios de la década de los noventa, fue el fruto de reivindicaciones sociales anteriores, el cual "...contó con las principales características del nuevo constitucionalismo en cuanto a la legitimidad de origen: respondió a una propuesta social y política, precedida de movilizaciones que demostraban el factor necesidad, y se articuló en una asamblea constituyente, plenamente democrática." (Viciano y Martínez, 2010. p. 23) Los nuevos textos constitucionales adoptados plantean soluciones respecto a la superación de la pobreza y la desigualdad en el plano socioeconómico y pretenden ejercer un control a los abusos presidenciales en el campo político, lo cual se materializa con los personajes caudillistas que han llegado al poder en Ecuador y Bolivia, al consagrarse el nuevo texto constitucional; diferente situación acontece en el caso de Colombia, pues al momento de llevarse a cabo la Asamblea Nacional Constituyente cuyo fin era proclamar una constitución que tenía como objetivo suplir la situación de emergencia que aquejaba el país, resultaba una medida necesaria para que las causas de perturbación no continuaran agravándose y deteriorando el acontecer diario colombiano, del cual, los más afectados, eran los habitantes del territorio.

Al haber contextualizado en el capítulo anterior el desarrollo de los antecedentes tanto políticos como institucionales de los países que son objeto de estudio en el presente trabajo, donde se determinaron los motivos por los cuales se originaron las asambleas constituyentes, siendo algunos de ellos la necesidad de involucrar a estamentos de la sociedad dentro de las cartas políticas que rigen sus destinos, así como garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, es menester entrar a estudiar en el presente capítulo, la forma en que cada constitución dispone y regula los derechos a la educación y la salud, así como las políticas públicas que cada país estudiado ha implementado en aras de garantizar la efectiva protección de los derechos reseñados.

2.1 La Salud y la Educación en las Constituciones de Ecuador, Bolivia y Colombia.

Al momento de instaurar las Asambleas Constituyentes en los países de Colombia, Ecuador y Bolivia, sea por los cambios necesarios que debían afrontar el gobierno Colombiano en razón a la violencia que vivía la Nación o por la victoria de candidatos de origen popular y de izquierda en Ecuador y Bolivia, cuyas propuestas de gobierno implicaban un cambio constitucional que fuera acorde con los postulados de sus ideologías, se acordó por los Constituyentes darle prioridad a la determinación de los derechos, deberes, garantías y en consecuencia principios fundamentales con el fin de salvaguardar y garantizar su correcta y debida aplicación en todos los ámbitos tanto del Estado como de los particulares.

En ese orden de ideas y para efectos de este trabajo, se determina que los derechos fundamentales son, inherentes al ser humano en su calidad de habitante de un territorio, por consiguiente, es el Estado quien debe encargarse de velar por su protección. De igual forma, tales derechos tienen consagración constitucional y tal carta de navegación, es quien regula las acciones para su protección en caso de violación o transgresión. Por tanto, en las líneas que siguen, se procederá a determinar la consagración constitucional de los derechos a la salud y a la educación en cada país de estudio.

2.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

A su turno, la Constitución Política de Bolivia, establece en su Artículo 35 dicta:

El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios públicos. II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

En los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, establece los lineamientos respecto al Derecho a la Salud y a la Seguridad Social, desde la óptica de cumplimiento y garantía por parte del Estado. Y el Artículo 18, establece que todas las personas tienen derecho a la salud y en consecuencia, el Estado garantizará la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

En relación con el derecho a la educación, el Artículo 17 dispone que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. En el Artículo 77, establece que la educación constituye una función suprema del Estado, el cual tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Y en los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, se establece no sólo la obligatoriedad por parte del Estado de garantizar su cumplimiento, sino que reza todas las características del sistema educativo boliviano cuyo propósito principal es erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población.

En relación con la parte reglamentaria de los anteriores derechos, en el 2006, el Ministerio de Salud de Bolivia rediseño la política sanitaria, haciendo que el Estado sea el garante del derecho a la salud del pueblo. Se crea el modelo para la Atención Primaria en Salud llamado Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), donde es prioridad la promoción de la salud para evitar llegar a la enfermedad. Y, para el derecho a la educación, se tiene que

En el marco de la construcción del Estado Plurinacional, el 20 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley de educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, normativa que reconoce a la educación como derecho fundamental de todos los bolivianos. Desde la promulgación de la Ley el Ministerio de Educación ha impulsado una Revolución Educativa que consiste en la transformación de las estructuras coloniales que fueron el origen de la situación de exclusión de los sectores populares e indígena originario campesinos del país. La Revolución Educativa se centra en la implementación del nuevo Sistema Educativo Plurinacional (SEP), cuyos antecedentes, operativización y estructuración dependieron de un proceso participativo que recoge la experiencia y saberes de los pueblos indígena originario campesinos. (Ministerio de Educación, 2014, p. 1)

En virtud de lo anterior, se establece la responsabilidad exclusiva del Estado como entidad que protege el derecho mediante la aplicación y generación de políticas públicas, por ejemplo, garantiza el acceso al seguro universal de salud, contra el ejercicio de los servicios públicos y privados, así como la participación de la población organizada en la toma de decisiones y gestión del sistema público en salud. Ahora es turno de determinar lo que en el Constitucionalismo Ecuatoriano se ha establecido respecto a los derechos a la educación y salud, todo enmarcado en su política de “sumak kawsay”.

2.1.2 Constitución política de la República de Ecuador.

En el marco de la expedición del texto constitucional, el discurso programático del entonces presidente Rafael Correa Delgado, se enmarcaba en el postulado del sumak kawsay.

El “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”, es una categoría simbólica que denota en la cosmovisión de numerosos pueblos ancestrales, un equilibrio entre las comunidades y la naturaleza. Desde un punto de vista filosófico, el “Buen Vivir” se entiende como una meta que no se halla totalmente vinculada a lo económico. Esta concepción implica que la economía cobra una dimensión diferente al crecimiento económico y a la acumulación capitalista. El “sumak kawsay” o Buen Vivir irrumpe y cuestiona la lógica capitalista y su individualismo inherente. [comillas en texto] (Guevara, 2011, p. 8)

“El preámbulo de la Constitución del 2008 inicia señalando que el pueblo ecuatoriano decide construir una forma de convivencia en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir o *sumak kawsay*” (Portero, 2008, p. 124), los cuales, se ven reflejados en las políticas del plan del buen vivir antes reseñadas, que entraran a determinar el contenido de la Carta Política como se analizará a continuación.

...el Estado constitucional se materializó en el artículo 1 del mismo cuerpo normativo: Art. 1.- El Ecuador es un *Estado constitucional de derechos y justicia*, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. . [cursivas en texto fuente] (Ávila, 2016, p. 44)

El Artículo 32 de la Constitución de la República de Ecuador, reza:

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

Lo contextualizado en la Carta Magna define que ese derecho a la salud no puede ser garantizado, sino se garantizan (valga la redundancia) otros derechos, es decir, la salvaguarda del derecho a la salud lleva consigo la necesidad de cumplir con factores determinantes ajenos al sector salud, lo que genera cierto tipo de problemática para su total y efectivo desempeño.

Respecto al derecho a la educación, la Constitución Política consagra en sus Artículos 26, 27 y 28, lo referente a tal derecho, de lo cual se extrae que es un derecho de las personas a lo largo de su vida y por consiguiente, un deber ineludible e inexcusable del Estado. En ese orden de ideas, reza también que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Dispone que la educación sea indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Al haber descrito el texto constitucional Boliviano y comparándolo con el producto de la Asamblea Constituyente Ecuatoriana, se establecen similitudes respecto a los tres puntos reseñados, por cuanto se protegen los derechos sin distinción alguna, tienen la misma jerarquía y se protegen a través del aparato judicial.

2.1.3. Constitución Política de la República de Colombia.

El texto constitucional colombiano de 1991 supone el punto de inflexión que marca el inicio y establece las bases para el desarrollo en América Latina de una forma constitucional propia durante las dos últimas décadas. La Constitución colombiana de 1991 constituye, por lo tanto, el punto de inicio del nuevo constitucionalismo en el continente. (Noguera-Fernández y Criado, 2011)

En cuanto a aspectos generales de la carta de derechos, a diferencia de la Constitución colombiana de 1886, la cual tenía una corta declaración de derechos, la Constitución de 1991 introduce una larga carta de derechos. Esta no solo reconoce muchos derechos que no estaban constitucionalizados anteriormente, especialmente derechos sociales, económicos y culturales, y derechos colectivos, sino que, además, otorga a cada uno de ellos un mayor desarrollo en su contenido, así como de sus indicadores y del papel del Estado para el logro de su satisfacción. Esto explica que la carta de derechos colombiana sea mucho más larga que la de la mayoría de constituciones en el constitucionalismo comparado. (Noguera-Fernández y Criado, 2011, p. 29)

En la Constitución de 1991, la salud está consagrada en el Artículo 49, que reza:

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

Posteriormente, en cabeza del ejecutivo, se profirió la Ley 1751 de 2015 cuyo objeto consagrado en el artículo 1, es garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. En el Artículo 2 de la misma disposición, estipula que: “...su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado”.

Respecto al derecho a la educación, en Colombia la Constitución Política consagra en el Artículo 67 que:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura...

Dicho derecho se compone de pautas otorgadas por la Constitución en relación con el cumplimiento del mismo que se encuentra en cabeza del Estado.

2.2 Políticas públicas implementadas para garantizar los derechos a la educación y a la salud en Ecuador, Bolivia y Colombia

El fin tanto del Estado Social de Derecho consagrado en las Constituciones de Colombia y Bolivia como del Estado Constitucional de Derechos y Justicia establecido en la Carta Política de Ecuador, es buscar la eficacia, eficiencia y efectividad de los derechos fundamentales, no sólo a través de la acción del Estado (relación entre las autoridades y la persona individualmente considerada), sino a partir de la solidaridad social (comunidades debidamente organizadas que buscan su cumplimiento cierto y real). El alcance de tales cláusulas (Estado Social de Derecho -ESD- y Estado Constitucional de Derechos -ECD-) se fundan en los principios fundamentales de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la igualdad, la soberanía popular y la separación de poderes. La característica principal de tales modelos de estados consagrados es la adherencia

y por consiguiente el respeto a los derechos humanos, los cuales, han sido debidamente estipulados en los textos constitucionales y los de consagración internacional y han sido ratificados por medio de tratados internacionales por los respectivos países.

Por tanto, el Estado Social de Derecho se considera como la redefinición del Estado de Derecho, por cuanto no sólo se fundamenta en la igual dignidad de las personas que lo componen y que se rige por un conjunto de normas jurídicas que emanan de la voluntad de esas personas, sino que tienen en cuenta las nuevas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de los países que los consagran, por cuanto en ellos prima el factor social, es decir, la solidaridad que se erige como garantía de la igualdad ante la ley y la defensa real de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Los principios que garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales y hacen posible alcanzar el modelo social adoptado, es decir, los mecanismos a través de los cuales se protegen los derechos de algún tipo de vulneración específica por parte del Estado como garante de los mismos.

“Las constituciones de la región incorporan el conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, que se encuentran por fuera del texto constitucional, pero que se integran como parte de éste con idéntico valor de supremacía” (Hernández, 1999, p. 30) a través de la figura del bloque de constitucionalidad el derecho internacional de los derechos humanos, en especial, a través del tratamiento especial y privilegiado a los tratados de derechos humanos. Ahora bien, es turno de comenzar a estudiar cada país con sus respectivas políticas públicas, respecto a los derechos estudiados (educación y salud), para así determinar su cumplimiento con relación al fin del Estado Social de Derecho o el Estado Constitucional de Derechos.

2.2.1 Sistemas de Protección Social en Bolivia. Bonos Sociales y principales programas en Salud y Educación.

La carta de derechos contenida en la Constitución Boliviana de 2009, efectúa un desarrollo completo de los derechos humanos, complementados con los derechos especiales a favor de grupos determinados (niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y otros).

Para la debida protección de los derechos en Bolivia, el actual gobierno como principal instrumento de protección social, desde el año 2006, constituyó la transferencia directa de recursos a través de los denominados “Bonos Sociales”, siendo los más importantes:

- Renta Universal de Vejez o Renta Dignidad, instaurado a partir del 2008 y cuyo propósito es garantizar una vejez digna en condiciones de igualdad por parte del Estado, por medio de

...un programa de pensión no contributiva universal o de transferencias monetarias no condicionadas para el adulto mayor que forma parte del régimen de Seguridad Social no Contributivo. La Renta Dignidad es una pensión vitalicia no contributiva que busca proteger el ingreso de la población adulta mayor. (Red Interamericana de Protección Social -RIPSO-, s.f.)

- Bono Juana Azurduy (2009). diseñado exclusivamente para incentivar la utilización de servicios preventivos de salud de mujeres embarazadas y niños menores de dos años.” (Bueso-Merriam, Galindo y Gómez-Peña, 2015, p. 108) orientado principalmente con el fin de disminuir los índices de mortalidad materna e infantil. Consiste en la transferencia monetaria de cincuenta (50) Bs, por la asistencia a cada control prenatal y ciento veinte (120) Bs, por la atención del parto asistido por personal especializado en el área de salud adicional a un control postnatal, esto para las mujeres en estado de gestación y para los niños y niñas menores de dos (2) años, consiste en una transferencia de ciento veinte cinco (125) Bs, por asistencia a cada control de crecimiento y desarrollo bimensual hasta que cumpla los dos (2) años.

- Bono Juancito Pinto (2006). Los objetivos del programa son incrementar la matrícula [Sic] escolar y reducir la deserción, así como disminuir la transmisión inter-generacional de la pobreza.” (Marco, 2012, p. 7) y consiste en la transferencia monetaria directa de doscientos (200) Bs anuales a los niños y niñas que cumplan con la asistencia regular a clases, comprendida entre primero (1) de primaria al sexto (6) de secundaria.

Con tales programas, el gobierno de Evo Morales Aima, lo que pretende es dar un empuje al cumplimiento de los derechos establecidos en la Carta Constitucional de 2009, al implementar específicamente programas con ayuda de organismos internacionales para la prevención de la vulneración de los derechos, tales como la salud, la educación y la protección de la vejez. Por tanto, se materializa una protección de los derechos fundamentales en el Estado Boliviano por parte del gobierno de turno, así como por parte del Tribunal Constitucional.

La Ley de Educación No. 70 de 20 de diciembre de 2010, “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, implica cambios para el sistema educativo boliviano. En el discurso político se considera que este instrumento legal lograría una “Revolución en la Educación”. El presidente Evo Morales señaló que dicha norma promoverá la revolución educativa, institucional, técnica, productiva, ética y tecnológica en Bolivia. Dicha “Revolución Educativa”, marca la consolidación de la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, lo que a su vez constituye el punto de partida de su efectiva aplicación en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP). (Ministerio de Educación, 2015). De acuerdo a esta Ley, la educación inicial se redefine como “Educación en familia comunitaria”, abarcando el grupo de edad 0-5 años y comprendería dos etapas: educación en familia (0-3 años) y educación en familia comunitaria (4-5 años de edad).

Ahora bien, en materia de Educación se destacan los siguientes programas, recopilados por Fernanda Wanderley (2018):

- Profesionalización de Maestros Interinos (PPMI): destinado a profesionalizar maestros y maestras interinos de Educación Regular y Educación Alternativa Especial del Servicio

de Educación Pública. Divididos en dos fases: la primera (2006-2011) y la segunda (2012-2015).

- Formación Complementaria para Maestros y Maestras en Ejercicio (PROFOCOM) (2012, 2013 y 2014): cuyo objetivo es robustecer la formación integral y holística con base en el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo.
- Instalación de Telecentros Educativos Comunitarios (2006): los cuales brindan acceso y uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).
- Programa Nacional de Alfabetización (PNA) (2006-2008): tendiente a revertir gradual y controladamente el analfabetismo absoluto y funcional de la población Boliviana.
- Programa Nacional de Post Alfabetización (PNP) (2009): orientado a proporcionar educación primaria a los recién alfabetizados y a todas las personas mayores de 15 años que abandonaron sus estudios o no tienen posibilidades de acceso a la educación.
- Infraestructura y Equipamiento Educativo (1999): destinado a mejorar y generar condiciones de infraestructura y equipamiento educativo en todos los niveles y ámbitos del Sistema Educativo Plurinacional.
- Una computadora por docente. Dotación de equipos electrónicos a los docentes.
- Transformación Curricular (2013): destinado a transformar la práctica educativa en el aula, la evaluación, la organización de los materiales educativos y las tecnologías en todo el sistema educativo plurinacional.
- Gratuidad del trámite de obtención del Diploma de Bachiller (2009) estableciéndose que los estudiantes promovidos del Ciclo Secundario, de todas las unidades educativas públicas, privadas y de convenio del país, están exentos de pago por dicho concepto.

El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en el año 2015, realiza un estudio denominado “Memoria Institucional 2015”, donde agrupa los logros alcanzados en la ejecución de la Revolución Educativa, en tres ejes, los cuales son: Eje Equidad y Oportunidad; Eje Educación de Calidad y Eje Educación Productiva. En el Eje Equidad y Oportunidad, los beneficiarios del Bono “Juancito Pinto” ejecutado por el Gobierno Boliviano desde el año de 2006, el monto del Bono es de Bs 200 (25 dólares) por estudiante, que son entregados a sus destinatarios una vez al año, en el mes de diciembre, por personal de las Fuerzas Armadas, bajo

la dirección del Ministerio de Educación., superaron los 2,2 millones de estudiantes que recibieron este beneficio – para el 2015-, una cifra récord. Pasó lo mismo con las y los bachilleres que recibieron su Diploma de Bachiller gratuito: más de 152 mil en todo el país. Mientras que los programas que hicieron que Bolivia sea “un territorio libre de analfabetismo”, lograron reducir la tasa de analfabetismo al histórico 2,9%. (Ministerio de Educación, 2015, p. 15).

Referente a la cobertura del programa del Bono Juancito Pinto, desde sus inicios en el año 2006 hasta el año 2015, se extrae el siguiente cuadro donde se visualiza el porcentaje de número de beneficiarios por departamento.

**Estudiantes beneficiarios Bono “Juancito Pinto”
por departamento 2006-2015**

DEPARTAMENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BENI	57.069	70.560	86.673	85.543	85.362	83.460	87.893	92.997	106.927	111.256
CHUQUISACA	78.721	94.210	114.656	112.992	108.933	104.836	110.228	114.616	129.560	129.708
COCHABAMBA	194.925	239.476	302.756	306.947	307.630	305.586	332.550	356.544	412.016	419.458
LA PAZ	273.577	332.347	425.725	421.130	413.266	405.350	444.337	480.404	563.525	571.090
ORURO	47.063	57.527	74.223	74.120	73.616	73.212	80.078	88.320	104.688	107.669
PANDO	9.313	11.924	15.321	16.990	16.077	16.348	17.520	18.802	22.284	24.117
POTOSÍ	102.280	125.774	154.611	151.931	148.041	143.276	153.324	161.532	186.312	186.210
SANTA CRUZ	270.255	328.782	423.268	422.388	417.647	414.718	442.336	485.484	560.060	574.133
TARIJA	51.764	63.405	80.427	78.881	77.386	75.729	82.026	88.926	104.441	105.266
TOTAL	1.084.967	1.324.005	1.677.660	1.670.922	1.647.958	1.622.515	1.750.292	1.887.625	2.189.813	2.228.907

Imagen 1. Fuente: Ministerio de Educación (2015, p. 20)

Otro programa de la revolución educativa, es el Programa Nacional De Alfabetización Y Post-Alfabetización, que desde la llegada al poder del presidente Evo Morales se propuso como tarea combatir el analfabetismo y lograr que Bolivia sea declarada como “Territorio Libre de Analfabetismo”. En el año 2008 a través del Programa “Yo sí puedo” y después continuar con el “Yo sí puedo seguir” hasta alcanzar el 2,9%, el 2015, como la tasa de analfabetismo más baja de la historia del país. (Ministerio de Educación, 2015) Con el objetivo de que más bolivianos puedan acceder a la educación superior, el gobierno nacional, por medio de La Ley 3991 de

2009, dispone la gratuidad del trámite de obtención del Diploma de Bachiller, estableciéndose que los estudiantes promovidos del Ciclo Secundario, de todas las unidades educativas públicas, privadas y de convenio del país, están exentos de pago por dicho concepto. Durante el periodo 2009-2015, se entregaron 945.423 Diplomas de Bachiller. (Ministerio de Educación, 2015)

En materia de salud, como ya se mencionó brevemente, el gobierno de Evo Morales por medio del Decreto Supremo No. 066 de 2009, creo el *Bono “Juana Azurduy”*, el cual es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al cumplimiento de 4 controles prenatales, parto institucional y control post parto, y para niños y niñas menores de dos años, condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. En ambos casos no deben contar con seguro social de salud a corto plazo (Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, s.f.) Dicho bono tiene por objeto contribuir a disminuir la mortalidad materno-infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años en todo el país. Los beneficiarios de este programa son Mujeres embarazadas y Niños y niñas menores de un año al momento de inscribirse, hasta sus 2 años.

De acuerdo a lo estipulado por el Gobierno Boliviano, los beneficios del bono consisten en:

BENEFICIOS DEL BONO		
1° CONTROL	DEL 1° MES AL 3° MES	50 Bs.
2° CONTROL	DEL 4° MES AL 5° MES	50 Bs.
3° CONTROL	DEL 6° MES AL 7° MES	50 Bs.
4° CONTROL	DEL 8° MES AL 9° MES	50 Bs.
PARTO INSTITUCIONAL Y CONTROL POST PARTO		120 Bs.
DESDE SU NACIMIENTO	12 CONTROLES INTEGRALES	125 Bs.
HASTA SUS DOS AÑOS	DE SALUD BIMENSUALES	
33 MESES EN TOTAL		1820 Bs.

Imagen 3. Fuente: Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (s.f.).

Igual que en materia educativa, se traen a colación los principales programas implementados y ejecutados en Bolivia, compilados por Fernanda Wanderley, así:

- Desnutrición cero (2007): orientado a mejorar la alimentación y el cuidado integral de los niños y niñas menores de cinco (5) años y mujeres embarazadas en periodo de lactancia.
- Subsidio Universal Prenatal (2015): destinado a contribuir con el mejoramiento del estado nutricional de las madres gestantes y consiste en la entrega de cuatro paquetes de productos alimenticios, equivalentes cada uno a un monto de trescientos (300) Bs, entregados mensualmente a partir del quinto mes de embarazo a mujeres no registradas en algún ente gestor de Seguro Social a corto plazo e inscritas en el Bono Juana Azurduy.
- Prestación de Servicios de Salud Integral (2014): consiste en asistencia médica gratuita y está dirigido a la población menor de cinco (5) años y mayor de sesenta (60) años; personas en situación de discapacidad y mujeres en edad fértil que no tengan seguro social de corto plazo respecto de atenciones de salud sexual y reproductiva.
- Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) (2003): otorga prestaciones de salud con carácter universal, integral y gratuito, a las mujeres embarazadas desde el inicio del periodo de gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto y a los niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco (5) años de edad.
- Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) (2007-2013): consiste en prestaciones de servicio de salud en todos los niveles de atención del Sistema de Salud, a ciudadanos mayores de sesenta (60) años y que no cuenten con seguro de salud.
- Programa de Salud familiar comunitaria e intercultural (SAFCI) (2011). Se entiende por ese programa, una política de salud del Estado Plurinacional de Bolivia, que se constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer salud. Complementa y articula recíprocamente al personal de salud y médicos tradicionales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos con la persona, familia, comunidad, madre tierra y cosmos. Esta complementación y articulación se da en base a sus organizaciones en la Gestión Participativa – Control Social y la Atención Integral Intercultural de la Salud.

La aplicación de la estrategia y componentes de la SAFCI, está liderada por la Dirección General de Promoción de Salud, sus unidades, programas y proyectos.

Fuente: Copa y Carcamo (2013, p. 3)

En ese orden de ideas, se procederá a identificar cada una de las unidades, con sus estrategias y sus respectivos resultados, por medio del análisis de la evaluación realizada por el Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2013.

1. La Unidad De Nutrición. Cuyo objetivo es contribuir a la mejora del estado de salud, alimentación y nutrición de la población todo el ciclo de la vida a través de la implementación de prácticas alimentario nutricionales saludables. El indicador que sirve para conocer la mejora del estado nutricional de la población es: “la prevalencia de desnutrición crónica (talla baja) en el menor de 5 años”

Estrategia 1. Lactancia Materna. Objetivo. Fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna para reducir la morbi- mortalidad materna e infantil.

Resultados. Acreditación de 12 Hospitales Materno Infantiles como Amigos de la Madre y la Niñez (IHAMN).

Estrategia 2. Alimento complementario Nutribebé. Objetivo. Complementar la lactancia materna prolongada y la alimentación complementaria en niñas y niños menores de 2 años para prevenir la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes.

Resultados. 7 de cada 10 municipios compra y distribuye el alimento complementario Nutribebé.

Estrategia 3. La suplementación con micronutrientes. Objetivo. Aportar suplementos con micronutrientes a mujeres embarazadas, madres que dan de lactar y niñas y niños menores de 5 años para prevenir la deficiencia de micronutrientes.

Resultados. Distribución nacional de suplementos de hierro (chispitas nutricionales, vitamina A y ferasol). Acceso universal y gratuito, de niñas y niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia a suplementos con micronutrientes.

Estrategia 4. La fortificación de alimentos y control de calidad de alimentos fortificados

Objetivo. Prevenir a largo plazo la deficiencia de micronutrientes en toda la población a través de la fortificación de alimentos de consumo masivo.

Resultados. Legislación y Reglamentación de la Harina de trigo, mezclas de harina y derivados fortificados presentados y difundidos. Reglamento técnico de la sal yodada aprobada. Publicación en prensa de marcas de sal que cumplen la normativa de fortificación a Nivel Nacional. Operativos de control, verificación y decomiso de productos de sal que infringen la norma de yodación.

Estrategia 5. Las unidades de nutrición integral (UNI). Objetivo. Promover la aplicación de prácticas saludables de alimentación y nutrición a través de la implementación de estrategias alimentario nutricional, para personas, familias y comunidades de municipios vulnerables a la inseguridad alimentaria.

Resultados. 118 Unidades de Nutrición Integral (UNI) funcionando a nivel nacional en municipios priorizados por el Programa Desnutrición Cero y ciudades capitales.

Estrategia 6. Alimentación y nutrición en el ciclo de la vida. Objetivo. Promocionar una alimentación adecuada y óptima en todo el ciclo de la vida, para mejorar el estado nutricional de la población en general y prevenir la malnutrición.

Resultados. Guías alimentarias para toda la población según edad y sexo que aportan en mejorar los hábitos alimentarios.

Estrategia 7. Componente clínico nutricional. Objetivo. Fortalecer el funcionamiento de los Servicios de Alimentación y Nutrición en Establecimientos de Salud de segundo y tercer nivel.

Resultados. Norma Nacional validada para los Departamentos y/o Unidades de Nutrición y Dietética de Hospitales de 2º y 3er nivel de atención.

2. La Unidad De Promoción De La Salud. El objetivo de ésta, se ciñe en contribuir en la generación de condiciones favorables para el abordaje de las determinantes sociales de la salud en corresponsabilidad con la comunidad, reorientar al servicio de salud hacia el enfoque de atención con buen trato, equidad de género e interculturalidad en el ejercicio de los derechos a la salud y desarrollar en las personas y las familias hábitos en el cuidado de su propia salud.

Área 1. La educación para la vida. Objetivo. Impulsar el intercambio de sentires, conocimientos

y prácticas en salud, a través de la construcción de elementos metodológicos de reorientación de los servicios de salud.

Resultados. Documentos normativos en educación en salud para la vida difundidos e implementados a nivel nacional. Estudio cuali-cuantitativo de factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles en cuatro municipios con muestras representativas de tres departamentos realizado.

Género en Salud. Objetivo. Desarrollar e incorporar en las acciones del sector salud el enfoque de género, a fin de contribuir en la reducción de desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres. Resultados. Capacitación y fortalecimiento en la Normativa de Educación para la Vida destinado al personal de salud, realizado en 7 departamentos. Compromisos para generar una RED de apoyo técnico a los municipios en las ciudades de Cochabamba y La Paz, para incorporar la temática de género en la planificación local a partir de los SEDES realizado.

Centinela de la Salud. Objetivo. Preparar a jóvenes del Servicio Militar y Premilitar en promoción de la salud y en temas de prevención de la enfermedad, para ejercer el cuidado de su salud, la de su familia y de su comunidad. Resultados. Anualmente se forman aproximadamente 700 facilitadores militares y se capacitan 53.000 jóvenes de 18 a 22 años de edad. En 21 años de vigencia cerca de un millón de jóvenes recibieron formación en promoción de la salud. El Programa está inserto en la currícula de formación de la Universidad Militar y en el Plan de Instrucción del Servicio Militar. 120 Médicos de Sanidad Operativa incorporados como asesores del programa.

Área 2. Salud mental. Objetivo. Contribuir desde la Salud Mental al desarrollo de hábitos de vida saludables en las personas, familias y comunidades, de tal manera de lograr una eficaz prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias, así como a la rehabilitación y reinserción familiar, comunitaria y laboral. Resultados. Elaboración y difusión nacional de la normativa de salud mental. Prevención del consumo de drogas. Objetivo. Proporciona el marco jurídico normativo y desarrolla medidas costo-eficaces, con enfoque intercultural, con el objetivo de reducir de forma continua, sostenida y sustancial el consumo de drogas lícitas e ilícitas en Bolivia.

Buen Trato para la prevención de violencias. Objetivo. Capacita y genera cambios de actitudes y prácticas en el RRHH para brindar buen trato en el nivel institucional y en el servicio hacia las personas familias y comunidades para la prevención de las violencias, intergenérica, intergeneracional, intercultural y medio ambiental. Resultados. Revisión, adecuación y socialización del Lineamiento de Buen Trato en los Servicios Departamentales de Salud.

Área 3. Salud ambiental. Objetivo. Coadyuvar la preservación y protección del medio ambiente y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. Resultados. En coordinación interinstitucional, se capacita a técnicos de los SEDES, de Redes de Salud, de los Gobiernos Municipales y representantes de Organizaciones sociales, con el propósito de construir una plataforma local/regional que garantice el abastecimiento de agua para consumo humano y la vigilancia de su calidad.

3. La Unidad De Salud Comunitaria Y Movilización Social. Finalidad. Contribuir en la calidad de los servicios de salud y en la transformación de las Determinantes Sociales de la Salud. Objetivo. Normar, orientar y acompañar la implementación de procesos de Gestión Participativa en todos los niveles de gestión de la salud, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector salud, población organizada y autoridades políticas. Resultados. Socialización con SEDES, Gobiernos municipales, Organizaciones Sociales, y comercios de las estrategias de “Ambientes públicos 100% libres del humo del tabaco”.

Área 1. Salud Comunitaria y Gestión Participativa. Objetivo. Consolidar la Gestión Participativa en Salud en la Unidades Territoriales Autónomas (UTAS) del Estado Plurinacional de Bolivia. Resultados. Competencias del Personal de salud, Estructura Social de Salud y Gobiernos Autónomos Municipales respecto a la elaboración e implementación de Planes Municipales de Salud fortalecidas. 24 mesas municipales de salud desarrolladas en cuatro ciudades de Bolivia 16 municipios que cuentan con planes municipales de salud

Área 2. Coordinación con Estructura Social de Salud y Organizaciones Sociales. Objetivo. Fortalecer las competencias de las organizaciones sociales de carácter territorial para su actuación en la Estructura Social en Salud, desarrollando actividades de asistencia técnica y fortalecimiento de la ESS y organizaciones sociales. Resultados. 65% de Consejos Sociales Departamentales de Salud conformados y funcionando a nivel nacional en el marco de la política SAFCI. Cinco Consejos sociales Departamentales de salud conformados y 2 Consejos Sociales Departamentales de Salud en procesos de conformación a nivel nacional.

4. La Residencia Médica En Salud Familiar Comunitaria Intercultural (RM SAFCI). Objetivo. Generar y aplicar nuevos conocimientos que modifiquen las determinantes de la salud a través de la formación de especialistas en Salud Familiar Comunitaria Intercultural, con enfoque integral, gestores de la salud y con conciencia social; a partir de saberes y conocimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, en complementariedad con los conocimientos de la ciencia y la tecnología médica; desarrollando la investigación científica.

Área 1. Atención integral intercultural en salud. Objetivo. Integrarse e interrelacionarse con la conducta social, familiar, cultural, ciclos de vida, madre tierra, para la atención integral, holística domiciliaria, comunitaria intercultural, aplicando conocimientos en relación a la promoción y prevención de la salud y atención y rehabilitación de la enfermedad. Resultados. 214 médicos especialistas SAFCI egresados, 162 médicos residentes en proceso de formación. 27.274 familias atendidas en la gestión 2010, 3.6941 familias atendidas en el 2011 y 25212 familias atendidas en el 2012. 796 comunidades atendidas en el 2010, 1105 comunidades atendidas en 2011 y 888 comunidades atendidas el 2012.

Área 2. Gestión participativa y control social. Objetivo. Promover la organización de la estructura social en salud, para la acción sobre las determinantes con proyectos sociales y su gestión ante las instituciones correspondientes. Resultados. 138 proyectos gestionados el 2010, 29 proyectos el 2011 y 47 proyectos el 2012. 218 comunidades atendidas, 29472 prestaciones realizadas, 347 días de intervención, 62 médicos residentes SAFCI movilizados, en acciones de Intersectorialidad con ADEMAF realizados.

5. El Proyecto De Implementación De La Política SAFCI (IP SAFCI). Objetivo. Implementar la Salud Familiar Comunitaria Intercultural a nivel local, municipal, indígena originario campesino y departamental, para de contribuir en la eliminación de la exclusión social en salud en los 9 departamentos del País. (Copa y Carcamo, 2013, p. 3)

Fuente: (Copa y Carcamo, 2013, p. 10)

Área 1. Equipos Móviles SAFCI: 44 equipos en 44 municipios cumpliendo funciones interdisciplinarias de salud en el marco de la Política SAFCI a nivel nacional.

Área 2. Especialistas SAFCI: 155 especialistas SAFCI en 116 municipios prestando servicio a comunidades en el marco de la Política SAFCI.

Área 2. Especialistas ASSO. Su ámbito son los establecimientos de salud de Segundo Nivel e incluso de Primer Nivel que cuenten con condiciones adecuadas. 332 especialistas ASSO desarrollando servicio comunitario en 84 municipios del país. (Copa y Carcamo, 2013, p. 10)

Como tarea pendiente que tiene el ministerio rector de la salud en Bolivia, está la de proferir el Seguro Universal de Salud, que posiblemente comenzaría a funcionar en enero de 2019, y se considera que sería “... un paso fundamental para eliminar la exclusión social” y consistiría en que los bolivianos de 0 a 25 años podrán contar con un seguro de salud y así se pretende garantizar una Bolivia sana y productiva para vivir bien.

Al respecto, se puede establecer que en Bolivia, se han implementado políticas públicas tendientes a dar cumplimiento a la obligación legal que consagra la constitución respecto a los derechos a la educación y a la salud, que de acuerdo a los análisis que han realizado los Ministerios de cada rama, se evidencia un avance en el desarrollo de las mismas, siendo el mayor involucrado el Estado, puesto que ha invertido grandes sumas de dinero en ampliar la cobertura tanto de los servicios de salud como de oferta educativa en el país. En ese orden de ideas y para realizar un comparativo con las políticas de gobierno de Bolivia donde se ve claramente un avance en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es el turno de analizar algunos de los progresos de Ecuador al respecto.

2.2.2 Los Planes Nacionales del Buen Vivir en Ecuador. Directrices para lograr la Revolución Ciudadana.

En primera medida, es necesario establecer el objetivo principal del gobierno del “Buen Vivir” en Ecuador, por cuanto a raíz de éste fue que se generó el cambio constitucional y se amplió la implementación de políticas públicas tendientes a satisfacer los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Se entiende por “Buen Vivir”, como “...la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población,

es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado por la administración pública por falta de políticas públicas claras y realizables.” (Tapia, 2016, p. 12)

La actual Constitución Ecuatoriana tiene orientaciones éticas y principios que marcan la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. Los desafíos de cambio pueden sintetizarse en:

Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. Reconocer al ser humano como gregario que desea vivir en sociedad. Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de convivencia. Garantizar progresivamente los derechos universales y la protección de las capacidades humanas. Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza. Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa; Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores. Reconstruir lo público. Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa; y; consolidar un estado democrático, pluralista y laico. (...) Con estos fundamentos, el Plan aterriza en lo concreto y propone una lógica de planificación a partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, los mismos que (...) se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, (...) y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional. En consecuencia, los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir son: Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadana. Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo 4: Garantizar los derechos e la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. (República del Ecuador. Consejo Nacional de Planificación, 2009, p. 11)

En el capítulo segundo de la Constitución de Montecristi de 2008, se establece lo relacionado con las “Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana” y en el artículo 85, regula la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos, cuya finalidad es garantizar los derechos reconocidos por la Carta Política. En el numeral 2 reza que:

Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.

Por tanto, el estado en calidad de garante de la protección de los derechos consagrados constitucionalmente, debe generar las políticas públicas necesarias para evitar la vulneración de los derechos, teniendo en cuenta todos los aspectos involucrados para tal fin, es decir, aspectos económicos, políticos, sociales, administrativos.

Ahora bien, para analizar el papel del Estado dentro del reconocimiento de los derechos en la Carta Política, el entonces presidente

Rafael Correa ha sostenido que uno de sus principales objetivos gubernamentales es revertir las consecuencias sociales y económicas derivadas del modelo económico neoliberal imperante en el continente durante las dos últimas décadas y que ha provocado, entre otros efectos, la privatización de servicios básicos como la salud, la educación o la gestión del agua potable. El gobierno ecuatoriano ha prohibido a los organismos del Estado contratar personal con empresas de intermediación laboral que explotan a los trabajadores y ha comenzado a distribuir medicamentos de manera gratuita. Otra política desarrollada por el gobierno es calificarlo como “verde”, por su defensa del medio ambiente, retornando a la Comisión Ballenera Internacional para impedir la caza de estos mamíferos, al igual que vedar la extracción de maderas preciosas. (Echeverry y Duque 2015, p. 348)

En el plan de gobierno de Movimiento Alianza País –partido político por el cual ganó las elecciones el presidente Rafael Correa Delgado, se priorizó la universalización de la salud y la

educación, lo cual implica no solo el acceso, sino también la gratuidad de los servicios. En el capítulo anterior se enunciaron someramente las revoluciones tenidas en cuenta en el primer mandato del presidente Rafael Correa en Ecuador, es decir el periodo comprendido entre el año 2006 y el 2009, trayecto en el cual se aprobó la realización de la Asamblea Constituyente y fruto de ella es la Constitución de Ecuador del 2009. Para el tercer mandato, las propuestas de gobierno se enmarcaban de la misma manera en unas revoluciones ciudadanas, las cuales son: revolución constitucional y democrática; revolución social, revolución ambiental. Para el consecuente desarrollo de tales políticas de gobierno:

Desde el 2007 hasta mayo 2015, en Ecuador se han aprobado más de 190 leyes para transformar las relaciones de poder e impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Esa cantidad de leyes están distribuidas de la siguiente manera: 27 por ciento en modelos de desarrollo, 24 por ciento en reorganización del poder y reconocimiento de la participación ciudadana, 18 por ciento en derechos del Buen Vivir, otro 18 por ciento para la recuperación de las facultades del Estado y nueva organización territorial, un 12 por ciento en Estado y un 1 por ciento en otros intereses de acuerdo al último informe de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (TeleSur, 2016)

De igual manera, para descentralizar las funciones del gobierno central y así poder cumplir con no sólo los fines del Estado sino con la consagración de los derechos en la Constitución de 2008, en Ecuador existen 22 ministerios, los cuales son órganos directos del Presidente de la República que reunidos conjuntamente con éste y el Vicepresidente Ejecutivo, integran el Gobierno de Ecuador. Los Ministerios que componen el ejecutivo ecuatoriano son: Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio del Ambiente, Comercio Exterior, Cultura y Patrimonio, Defensa Nacional, Deporte, Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación, Electricidad y Energía Renovable, Finanzas, Inclusión Económica y Social, Industrias y Productividad, Interior, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Minería, Hidrocarburos, Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Trabajo, Salud Pública, Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Transporte y Obras Públicas, Turismo, (República del Ecuador, s.f.)

En materia de disposiciones internacionales acogidas por los países de análisis, se tiene lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual dedica dos artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y 14. El artículo 13, es el artículo de alcance más amplio y más exhaustivo sobre el derecho a la educación de toda la litigación internacional sobre los derechos humanos. A continuación se enuncia un planteamiento tenido en cuenta, correspondiente al marco analítico general seguido respecto a los derechos a una vivienda y una alimentación adecuadas y a la labor de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. En su informe preliminar a la Comisión de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación menciona "cuatro características fundamentales que deben tener las escuelas primarias: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad". En ese orden de ideas, es pertinente citar lo que se ha estudiado al respecto de la determinación del núcleo esencial del derecho a la educación en Ecuador teniendo en cuenta las cuatro características anteriormente citadas.

Disponibilidad.- la disponibilidad podemos definirla como: Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.; Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación: La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: a) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos. b) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia). c) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos, se pide a los Estados que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes. Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y

comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Al considerar la correcta aplicación de estas "características interrelacionadas y fundamentales", se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores intereses de los alumnos". (Muñoz, 2012, p. 8)

Ahora bien, respecto al derecho a la salud, se entiende que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada (Ase y Buriyovich, 2009). A través de la formulación y la implementación de políticas públicas tendientes a dar cumplimiento a ese derecho. Para la determinación de los elementos esenciales e interrelacionados de ese derecho, se trae a colación lo siguiente:

Calidad.- Los establecimientos, servicios, equipamiento e insumos de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena calidad; el personal debe estar capacitado; y debe contar con condiciones sanitarias adecuadas. Es parte de la calidad de los servicios de salud, el trato respetuoso, adecuado y oportuno a las personas que demandan atención, un número suficiente de establecimientos de salud, recursos humanos (considerando médicos, técnicos y personal de salud capacitados) y programas, que incluyan los factores determinantes básicos de la salud (Tapia, 2016, p. 29)

Accesibilidad: Significa que los establecimientos, bienes y servicios de salud se encuentren accesibles a todos, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables y marginados de la población. Lo anterior implica: a) accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, así mismo los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable deben ser de acceso intradomiciliario o encontrarse a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales; b) accesibilidad económica (asequibilidad): los pagos por servicios de atención de la salud en servicios relacionados con los factores determinantes básicos de salud deberán basarse en el principio de la equidad y ser proporcionales a los ingresos financieros de los hogares; accesibilidad informativa: comprende el derecho del paciente a recibir y solicitar toda la

información necesaria sobre su situación y el tratamiento que recibirá. Involucra también el derecho a recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Sin embargo el acceso a la información no debe menoscabar el derecho a la confidencialidad de los datos personales. (Tapia, 2016, p. 30)

Continuo.- este principio conlleva dos situaciones: a) el permanente estado de salud estado integral de la persona, con la finalidad de que desarrolle sus potencialidades; y b) el acceso a los servicios de salud que conlleven su prestación de forma ininterrumpida, constante y permanente, sin que sea admisible su interrupción sin la debida justificación. (Tapia, 2016, p. 29)

Para desarrollar el contenido de las políticas públicas en materia de salud en Ecuador, se comenzará estableciendo que

A partir del año 2008 Ecuador reconoce en su Constitución el derecho a la salud con una visión sistémica, vinculándolo con el ejercicio de otros derechos. La Carta Magna del 2008 establece al Estado como garante del derecho a la salud a través de la formulación de políticas, planes y programas orientados a brindar acceso a servicios de promoción y atención integral bajo los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. De este modo, el mandato constitucional determina la necesidad de iniciar el proceso de reforma y define el ámbito en el cual se conduciría dicho proceso para lograr que el Estado cumpla con las nuevas obligaciones establecidas en la Constitución. Ello requirió en primer lugar de la construcción de un nuevo modelo de atención ya no centrado en la enfermedad o en la prestación de servicios curativos, sino en las personas, sus familias, sus comunidades y sus necesidades de salud, con una perspectiva de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. El **Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS)**. Se constituyó en un eje orientador de la reforma del sector y en un pilar de la reorganización institucional del sistema público de salud, aun cuando su implementación en el nivel local ha resultado más compleja de lo esperado y a la fecha no se ha completado. Fiel al mandato constitucional, el Ministerio de Salud Pública (MSP) instauró la gratuidad de los servicios de salud para todos los usuarios de su red de prestación. El enorme incremento de la demanda por servicios generado por la gratuidad y la situación de abandono en la que se encontraba la infraestructura pública de salud desde hacía más de 40 años, planteó la urgente necesidad de modificar los criterios de despliegue territorial de los establecimientos de

salud y de mejorar la infraestructura sanitaria disponible. Con este fin se implementó una metodología de planificación territorial basada en la cantidad de población existente en cada unidad geográfica y en la distancia ideal a la cual deberían situarse los centros de salud para permitir un acceso adecuado y expedito. (Espinosa, 2017, p. 1) (negrilla fuera de texto)

Al establecer la reforma por la que paso el derecho a la salud en Ecuador, se puede deducir que no fue una “reforma” al mandato constitucional como tal, sino a la aplicabilidad del mismo en el entorno nacional, pues el Ministerio del ramo, con la ejecución de las políticas establecidas para dar cabal cumplimiento al derecho, percibió que se debía ajustar tanto el proceso como el procedimiento que se estaba llevando a cabo.

Otro aspecto relevante dentro del cumplimiento de lo preceptuado por la norma constitucional respecto del derecho a la salud, tiene que ver con la implementación de la RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD, la cual, es parte del proyecto nacional que busca transformar el sector salud fortaleciendo lo público con miras a lograr la universalidad de la salud y la gratuidad de los servicios en el punto de recepción del servicio. Esta la integran el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Instituto Superior de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Los objetivos principales por los cuales se creó esta red, se ciñen en construir el sistema Nacional de Salud, tendiente a garantizar el acceso universal de los ecuatorianos a los servicios públicos de salud, estructurados en una red pública y con atenciones de calidad, eficiencia y sin costo para el usuario y normar los procedimientos administrativos para la coordinación de pagos y tarifas, uso y aplicación del Tarifario Nacional de Prestaciones, el cual rige la compra de servicios entre los prestadores públicos y entre el sistema público y el privado.

Esta red permite eliminar barreras de acceso al integrar los servicios de salud de todos estos prestadores para que los ciudadanos puedan acudir a cualquiera de ellos sin importar si no están afiliados o no cuentan con los recursos económicos, de esta manera se garantiza el acceso universal de los ecuatorianos a la salud gratuita tal como lo dispone la Constitución ecuatoriana. (Andes, 2017)

Para la aplicación de las políticas públicas en materia de salud, dícese de proyectos, programas o campañas, en Ecuador existe la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud, creada por el ejecutivo, cuyo propósito principal es

Garantizar la calidad, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de salud que brinda el Ministerio de Salud Pública, en el marco de los derechos de las personas, con el propósito de lograr la excelencia en los servicios; conforme a las políticas sectoriales, modelos de calidad, normativas y lineamientos estratégicos establecidos. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, s.f.)

La atención que se presta a la población ecuatoriana para dar cabal cumplimiento a la política pública de garantía de prestación de servicios de salud, la dividen en tres niveles de atención. El primer nivel de atención es la puerta de entrada obligatoria al sistema, por su contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la población, este nivel debe resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la salud enfermedad de la comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo y comunidad, enfatizando en la promoción y prevención. Estas actividades serán intra y extramurales y están compuestos por los Puestos de Salud y los Centros de Salud. El segundo nivel de atención comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización y está compuesto por los Hospitales Básico y Hospitales Generales. Y el tercer nivel de atención corresponde a los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados y está compuesto por los Hospitales Especializados y Hospitales de Especialidades.

Para ilustrar las cantidades de atenciones prestadas desde el año 2006 hasta el 2016, a continuación se toma de referencia la medición efectuada por la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información en Salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública de la República de Ecuador, donde estadísticamente se consolida el grado de atención en los diferentes niveles de la población de dicho país.

Tabla 1. Producción MSP por nivel consolidado de atención 2006- 2016

NIVELES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PRIMER NIVEL	10'521.407	13'589.546	17'062.652	20'515.220	23'765.991	28'588.288	29'370.124	29'378.694	29'548.513	32'979.822	36'220.144
SEGUNDO Y TERCER NIVEL	5'677.744	6'786.819	8'415.651	10'450.193	11'326.128	11'486.039	11'189.766	9'894.311	9'659.806	9'519.518	9'809.828
TOTAL PRODUCCIÓN MSP	16'199.151	20'376.365	25'478.303	30'965.413	34'492.059	35'074.327	40'559.890	39'273.005	39'208.319	42'499.340	45'029.972

Imagen 4. Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador (s.f., p. 2)

Por tanto, se vislumbra que la cantidad de atenciones que se prestan en servicios de salud en Ecuador siempre aumentan de acuerdo al número de habitantes que tiene, es decir, a toda la población ecuatoriana se le garantiza la prestación de servicios en materia de salud en los niveles de atención que tiene destinado el Ministerio del ramo, de acuerdo a las políticas públicas instauradas por el gobierno nacional de turno. Para tal cumplimiento se tienen los siguientes programas organizados por parte de dicho ministerio así:

- Programa de Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDI)
- Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI
- Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS
- Encuesta nacional de salud y nutrición – ENSANUT
- Atención integral por ciclos de vida
- Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo
- Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador
- Disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos – DAIA
- Programa Nacional de Sangre. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, s.f.)

Tales programas enmarcan toda la población ecuatoriana, es decir, desde la primera infancia hasta cubrir las personas de la tercera edad, cubriendo todo tipo de deficiencias en su salud.

La parte operativa de los programas mencionados, se enmarca en las siguientes campañas ejecutadas en toda la circunscripción nacional, así:

- Campaña desnutrición cero
- Ecuador sin muertes maternas
- Etiquetado de alimentos: En el año 2014, se construyó, negoció y promulgó el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el consumo humano, experiencia exitosa e innovadora en el contexto de la promoción de la alimentación saludable tendiente a mejorar la calidad de vida de los Ecuatorianos.
- Ecuador saludable, Voy por ti: Este programa es fruto de la gran inversión realizada en materia de recursos humanos tendiente a cubrir las falencias de los profesionales de la salud en Ecuador. Orientado a promover el retorno de dichos profesionales para cubrir el déficit a corto plazo; creación de la carrera técnico de Atención Primaria en Salud y el financiamiento de más de 1500 becas para su formación; reconocimiento del médico familiar como especialista con un incremento de salario; entrega de más de 3600 becas de especialización y la contratación de más de 5000 profesionales de la salud entre el 2012 y 2015. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2016).
- Chao humo, Ecuador libre de humo
- Medidas de prevención para contrarrestar enfermedades por la época invernal
- Respira Ecuador, libre de tuberculosis
- Concientización de uso de recetas, medicamentos genéricos y prohibición de visita médica.

El Plan Nacional del Buen Vivir, marco político y social del gobierno de Rafael Correa durante sus periodos de gobierno, se consideró como tema principal el reposicionamiento del sector social y la salud como ejes fundamentales del desarrollo y bienestar a través de la recuperación de lo público, lo que precisó una reforma estructural al Ministerio de Salud Pública, como bien se mencionó en párrafos anteriores, tendiente a articular el sistema público de salud, para lo cual, se diseñó y se implementó el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), cuyo fin es garantizar el derecho a la salud para toda la población, con un enfoque comunitario,

familiar, pluricultural y de género, basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS), que busca acercar los servicios integrales de salud a los hogares y la comunidad, fortaleciendo el primer nivel como puerta de entrada obligatoria a la red integral de servicios de salud en todas sus componentes entre ellos infraestructura, equipamiento y tecnología para lo cual se ha determinado reformas al financiamiento de la salud en el país. (Ministerio de Salud Pública)

Las actuales políticas de salud de los países de Suramérica, destacan la Atención Primaria de Salud como una estrategia para la garantía de la atención integral y la equidad en salud. Ese modelo tiene como componentes comunes: el enfoque integral, familiar y comunitario con equipos multiprofesionales, que actúan en poblaciones y territorios definidos, entre los que se destaca Ecuador, donde la interculturalidad ocupa un lugar primordial respecto a la asimilación de saberes ancestrales y prácticas de salud de los pueblos autóctonos.

La estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención, se centró en cuatro ejes, que son: 1. Construcción y mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de los servicios de salud. 2. Mejorar la capacidad resolutive del Talento Humano. 3. Implementación de un sistema informático único de información (Sistema informático para la gestión integral de salud – SIGIS). Y 4. Definir el modelo de gestión de los establecimientos de salud (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, s.f.).

Para que se materialice el derecho a la educación en Ecuador, el aprendizaje se divide en etapas: parvulario (desarrollo de motricidad gruesa y motricidad fina), primer nivel (educación básica), segundo nivel (bachillerato), tercer nivel (profesional); cuarto nivel (maestrías, y PHD) (Tapia, 2016), es decir, es obligación del Estado brindar los conocimientos a sus súbditos al menos hasta el tercer nivel a través de un sistema educativo oficialmente establecido en cumplimiento de las políticas públicas formuladas.

Con el fin de fortalecer el Primer Nivel como parte del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), se creó el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad, el cual inicialmente fue estructurado para financiar obras de

construcción y mantenimiento de la infraestructura existente de los Centros de Salud así como para la adquisición de equipamiento y mobiliario de dichas unidades. El tiempo de ejecución del Proyecto correspondía entre el año 2012 al año 2016. Como indicadores de resultados, el Ministerio de Salud Pública evaluó que: 381 establecimientos de salud de primer nivel fueron remodelados y readecuados hasta el 2016; 851 establecimientos de salud de primer nivel se construyeron hasta el 2016; 1.232 establecimientos de salud de primer nivel fueron dotados con equipamiento biomédico, informático y mobiliario a nivel nacional hasta el año 2016. Y en 151 establecimientos de salud se implementaron sistemas informáticos para la gestión integral de salud (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, s.f.). Adicional a ello, se construyeron, repararon y pusieron en marcha 47 hospitales y 74 centros de salud de primer nivel, con una inversión total de US\$16208 millones entre el 2007 y el 2016. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2016).

Otro proyecto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador es el Tamizaje Metabólico Neonatal, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del metabolismo. El proyecto comenzó el 02 de diciembre de 2011 y desde ese año ha obtenido los siguientes resultados: En el 2011 fueron tamizados 10.340 niños en menos de un mes, de los cuales se detectaron 6 casos positivos (hiperplasia suprarrenal 1; hipotiroidismo 3, galactosemia 1 y fenilcetonuria 1). En el 2012 se tamizaron a 166.000 niños, detectando 41 casos positivos (hiperplasia suprarrenal 6 hipotiroidismo 32, galactosemia 2, fenilcetonuria 1). Para el 2013, se superó nuevamente las metas establecidas, ya que se realizó la prueba de Tamizaje Metabólico Neonatal a 225.436 niños, previniendo discapacidad intelectual en 114 niños (hiperplasia suprarrenal 26, hipotiroidismo 76, galactosemia 4, fenilcetonuria 8). En total, 161 niños presentaron casos positivos durante estos tres años. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador)

En el 2013, el Gobierno Ecuatoriano incluyó un punto en la agenda del 132° Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y presentó una propuesta de resolución ante en pleno respecto a temas de inclusión social, equidad y bienestar de las personas en condición de discapacidad. Por tanto, en mayo del mismo año, la 66ª Asamblea Mundial de la Salud, aprobó la Resolución WHA66.9 referente a la discapacidad. Para dar cumplimiento a tal Resolución, el

5 y 6 de noviembre del precitado año, en la capital ecuatoriana, se llevó a cabo la Consulta Regional en las Américas sobre el Plan de Acción 2014-2021 sobre discapacidades de la Organización Mundial de la Salud, ratificándose dicho plan en el seno de la 67ª Asamblea Mundial de la Salud. El objetivo de ese plan es impulsar el accionar de la OMS y los gobiernos para mejorar la calidad de vida de mil millones de personas en condición de discapacidad de todo el mundo.

En materia de educación, Ecuador ha tenido un avance significativo como ya se enunció en párrafos anteriores, debido a diversas circunstancias que han acrecentado su ejercicio como son:

1. **Eficiencia y eficacia en Políticas Públicas:** las decisiones acertadas en políticas económicas, sociales y productivas han creado un ambiente en el Ecuador que permitieron dar un salto cualitativo importante en la educación del país.
2. **Crecimiento económico consistente y equitativo:** la Cepal ya anunció en este año que Ecuador es uno de los países que más ha crecido en los últimos años y lo ha hecho equitativamente, es decir, que Ecuador es el país en América Latina que más está reduciendo la desigualdad y estamos caminando a construir una sociedad equitativa, lo que posibilita ampliar la cobertura en educación.
3. **Reducción de la pobreza:** mientras más disminuye la pobreza, mejora la calidad de vida porque se satisfacen las necesidades básicas. Teniendo estudiantes mejor alimentados su capacidad mejorará en las aulas y su permanencia en ellas también.
4. **Cierre de brechas de acceso a la educación:** la eliminación del supuesto “aporte voluntario” de 25 dólares permitió que muchos niños y niñas pudieran acceder al sistema educativo, así como el mejoramiento del programa de alimentación escolar, textos escolares y la creación del programa “Hilando el desarrollo” que provee a los estudiantes de uniformes escolares.
5. **Cambio de paradigma:** antes de 2007 no teníamos un sistema educativo como tal pues estaba secuestrado. El Ministerio de Educación ha asumido la rectoría del sistema y garantiza el derecho a la educación de los ecuatorianos, así como su permanencia en él.
6. **Voluntad política de transformación:** en los últimos 6 años el presupuesto asignado a Educación se ha triplicado. En 2014, el valor sobrepasa los 3.000 millones de dólares.

7. Revalorización y capacitación docente: en los últimos 6 años, cerca de 500.000 docentes fueron capacitados con el programa Sí Profe, que ahora se ha perfeccionado y se denomina “Siempre es momento de aprender”.

8. Creación de estándares de aprendizaje y actualización y fortalecimiento curricular: en 2010 se realizó la actualización del currículo y en 2011 se crearon los estándares de calidad que buscan establecer los logros esperados tanto en estudiantes, docentes, directivos, así como en gestión e infraestructura escolar. (Ministerio de Educación de Ecuador, s.f.)

Tales avances fueron enunciados por el Ministerio de Educación en el marco del resultado del Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLece) de la Unesco. Mediante la Consulta Popular de 2006 se ratificó en las urnas la voluntad del pueblo ecuatoriano que aprobó los postulados y objetivos del Plan Decenal de Educación. El Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) buscaba ser un instrumento estratégico de gestión y una guía que da perspectiva a la educación para que, sin importar las autoridades ministeriales que se encuentren ejerciendo sus cargos, las políticas sean profundizadas. Las políticas son las siguientes:

1. Aumento de 0.5% anual en la participación del Sector Educativo en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6%, para inversión en el sector.
2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el acceso de nuestros niños y niñas al mundo globalizado. Su objetivo principal es brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, respetando las características de pluriculturalidad y multilingüismo de los individuos, siendo una de sus principales líneas de acción promover una educación que refuerce los rasgos culturales y étnicos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
3. Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de habilidades para el acceso y permanencia en la educación básica. El objetivo principal de esta política es brindar educación a niños y niñas menores a 5 años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad cultural y lingüística, siendo una de sus principales líneas de acción la implementación de la educación infantil, familiar, comunitaria e intercultural bilingüe.
4. Lograr la cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el Bachillerato, a fin de desarrollar en los jóvenes competencias para la vida y el trabajo. Su objetivo es formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y equitativo para que continúen de manera exitosa la

instrucción superior. Dentro de sus principales líneas de acción se encuentra la construcción, implementación e interculturalización del nuevo modelo educativo, con clara articulación con el sistema intercultural bilingüe.

5. Erradicación del analfabetismo y dar educación continua para adultos, para garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y mundial. Su principal objetivo es permitir el acceso, al menos a la educación básica, para quienes tienen algún tipo de rezago educativo, garantizando la educación en lengua nativa para los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

6. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y colegios.

7. Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. Como objetivo principal identifica garantizar a quienes culminan los ciclos educativos la capacidad adecuada para contar con competencias para su desarrollo e inclusión social, reconociendo como una de sus líneas de acción la implementación de un sistema de rendición de cuentas a todos los actores sociales de la educación intercultural bilingüe.

8. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la capacitación permanente. Su objetivo principal radica en mejorar la oferta educativa a través de docentes capacitados, así como mejorar la calidad de vida de los docentes y la percepción de la comunidad frente a su rol, identificándose dentro de sus principales líneas de acción la revisión, actualización e interculturalización del currículo de formación inicial y la formación y capacitación del personal intercultural bilingüe. (UNICEF, s.f.)

En ese orden de ideas, se evidencia que en Ecuador, desde la expedición de la Carta Política de 2009, el derecho a la educación consagrado constitucionalmente en el artículo 3 como deber primordial del Estado, así como en el artículo 26⁸, 27⁹ y 28¹⁰ como derechos del buen vivir,

⁸ Artículo 26:

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

⁹ Artículo 27:

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

tienen primordial aplicación en el gobierno de turno, determinándose así su avance de cumplimiento. En igual sentido, en el informe denominado: *Revisión nacional 2015 de la Educación para Todos: Ecuador* (UNESCO, s.f.), se analizan los avances en materia de educación así:

...en noviembre de 2006 los ciudadanos ecuatorianos aprobaron mediante votación universal el **Plan Decenal de Educación 2006- 2015** y sus ocho políticas, las mismas que son de carácter cuantitativo y cualitativo. Las primeras cuatro políticas están orientadas a universalizar los servicios educativos: la primera política, plantea la universalización de la Educación Inicial; la segunda, la universalización de los diez años de Educación General Básica; la tercera, el alcanzar un 75% de matrícula neta en Bachillerato; y la cuarta, erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación de adultos. Tres políticas plantean mejoras cualitativas del sistema educativo ecuatoriano: la política quinta, establece el mejoramiento de la infraestructura escolar y su equipamiento; la sexta, el mejoramiento de la calidad y equidad educativa, así como la implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas; y la política séptima, la revalorización de la profesión docente, la mejora de la formación inicial continua y de las condiciones de trabajo y vida de los maestros. Finalmente, la octava política que establece un compromiso financiero para el cumplimiento del mismo, mediante el incremento del presupuesto del sector educativo en el PIB hasta alcanzar un 6%. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2015, p. 1)

Ahora bien, para el año 2017, el Ministerio de Educación de Ecuador (MinEduc) basó su accionar en cuatro ejes: Calidad: entendida como los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación contextualizados, actualizados y articulados en todos los niveles, modalidades y tipos de oferta, basados en estándares que garanticen el desarrollo integral de la población con equidad, pertinencia e igualdad de oportunidades, Cobertura: Acceso, permanencia, disminución del rezago y culminación de los estudios en todos sus niveles, modalidades y tipos de oferta,

¹⁰ Artículo 28:

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Derechos: Garantía de derechos de todos quienes conforman la comunidad educativa con énfasis en niños, niñas y adolescentes, y atención preventiva de fenómenos psicosociales, y Gestión: Procesos organizativos y condiciones físicas que contribuyen al cumplimiento de la misión de calidad educativa. De dichos ejes, se desprenden 6 objetivos estratégicos institucionales, contextualizados así:

Eje	Objetivo Estratégico Institucional
Calidad	1. Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.
	2. Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes al mundo laboral y la educación superior.
	3. Mejorar la calidad del servicio docente.
Cobertura	4. Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.
Derechos	5. Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la sociedad por los derechos en el proceso educativo.
Gestión	6. Fortalecer las capacidades institucionales.

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador (2018, p. 10)

Para el cumplimiento de cada objetivo estratégico planteado, se formulan programas tendientes a desarrollarlos. Es así como para el Objetivo Estratégico 1: Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión, se realizan los siguientes programas y se evalúan de acuerdo al informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación Ecuatoriano para el año 2017:

- **Bachillerato internacional.**- El objetivo es desarrollar en los estudiantes habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales, ofrecerles un título de Bachiller que sea reconocido por cualquier universidad del mundo. Hasta 2015, tenía 209 instituciones educativas con BI y otras 291 estaban en proceso de acreditación. Se implementaron en nueve (9) zonas administrativas, con 101 distritos y 171 circuitos educativos de las 24 provincias, que permiten, entre otros aspectos continuar con la implementación del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional, BI a nivel nacional. En el período 2017 el Programa del Diploma de BI tuvo una población estudiantil de 7.822 estudiantes entre el primer y segundo año, a nivel nacional. El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación y la Organización de Bachillerato Internacional de Ginebra, Suiza, suscribieron un Memorando de Acuerdos Mutuos y Entendimiento, el 9 de febrero de 2006 según el cual se procede a ejecutar el proyecto de “Inserción de Bachillerato

Internacional en colegios fiscales del Ecuador”. El mencionado documento es el referente legal para el cumplimiento de compromisos académicos, procedimentales, de infraestructura física y tecnológica y financieros del ministerio de educación y los colegios. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2017)

- Ser Estudiante en la Infancia-SEIN.-: En el período lectivo 2017-2018, participaron 544 instituciones educativas, régimen Costa, y 567 instituciones educativas, régimen Sierra.
- Redes de aprendizaje/ círculos de calidad: Se han conformado, a nivel nacional, 978 redes de aprendizaje, cada una cuenta con un máximo de 30 docentes, de todos los sostenimientos.
- Fortalecimiento de las competencias pedagógicas de las y los docentes de Educación Inicial.-
- Educación Especializada e Inclusiva. - Se incrementó la calidad de servicio educativo en todos los niveles, ofertas y modalidades con enfoque de inclusión, entre las acciones realizadas se destacan: - Fortalecimiento del Modelo Nacional de Gestión y Atención para las Instituciones Educativas Especializadas en articulación con la academia y FE y Alegría. - Fortalecimiento y validación del Modelo Nacional Educativo Bilingüe Bicultural para personas Sordas en articulación con la Federación Nacional de Sordos del Ecuador – FENASEC y la Academia. - Desarrollo de los procedimientos inclusivos de la evaluación de los estándares de calidad educativa. - Emisión de Acuerdo Interministerial No. 2 y socialización del Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para los 11 Centros de Adolescentes Infractores.
- Bachillerato.
- Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa.-
- “Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena” Desde el año 2012 se ejecuta dicha estrategia, la cual se encuentra alineada al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, con el Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad”; en el que se incluye como tema fundamental: \Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 años". También, el Objetivo 3 señala: “Mejorar la calidad de vida de la

población"; donde se contempla: "Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral de salud".

- Currículo de Educación Inicial. En el año 2014, mediante el acuerdo Ministerial 0042-1, por su parte, el Ministerio de Educación, oficializa la aplicación y el cumplimiento obligatorio del currículo, el cual es flexible y debe ser contextualizado en función de las características y necesidades específicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014)
- En el año 2016, diversifica las modalidades de educación inicial y dentro de los Servicios de Atención Familiar para la Primera Infancia, incluye la Modalidad de Educación Inicial con Familias, consciente de que el desarrollo integral de la primera infancia es política prioritaria dentro de la planeación del país. Servicio de atención familiar para la primera infancia modalidad de educación inicial con familias.(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)
- Política de Bono de Desarrollo Humano. Tiene por objetivo garantizar a las familias con niños entre 5 y 18 años el acceso a un mínimo de recursos económicos para el sostenimiento de la crianza, en particular, para sostener y acompañar las trayectorias escolares de niños y adolescentes, garantizar condiciones de salud y alimentación. Consiste en una transferencia monetaria condicionada mensual de USD 50,00 conceptualizada para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la situación económica del núcleo familiar. Se encuentra dirigida al representante de las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y se encuentra condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades por parte de las familias en: salud, educación, vivienda, erradicación del trabajo infantil y acompañamiento familiar.
- Estrategia "Siempre es Momento para Aprender": Programas de Reinserción y Nivelación Escolar. Tiene por objetivo garantizar el derecho a la educación básica, en particular, fortalecer el lazo de los niños y adolescentes con el sistema educativo. Para lograrlo, ofrece educación primaria y educación media en modalidad flexible (trayectos escolares más breves) a adolescentes y jóvenes de hasta 21 años matriculados en el sistema educativo regular con rezago escolar severo.

- Programa de Alfabetización en Educación para Jóvenes y Adultos. Ofrece alfabetización, educación primaria y educación media en tres modalidades: Yo Sí Puedo¹¹, Manuela Sáenz¹² y Dolores Cacuango¹³. Se ofrecen además cursos de capacitación laboral, educación ciudadana, salud y nutrición y capacitación a docentes. Se priorizan las zonas rurales y zonas urbano marginales. El objetivo es universalizar el derecho a la educación y ampliar las oportunidades de acceder a un trabajo decente, en particular, restituir el derecho a la alfabetización y a la educación de los adolescentes y jóvenes analfabetos o con escolaridad inconclusa y fortalecer sus capacidades laborales y su desarrollo integral. Asimismo, se propone fortalecer las capacidades estatales para proveer este servicio educativo.
- Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Equidad y Calidad. El objetivo es aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación priorizando las acciones y recursos en lugares con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas y poca oferta educativa. Para lograrlo amplía la oferta física (infraestructura y equipamiento) y enfatiza el desarrollo profesional docente.

Para el Objetivo Estratégico 2: Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes al mundo laboral y la educación superior, se han implementado las siguientes actividades: Se cuenta con 50 convenios vigentes para Bachillerato Técnico Productivo; beneficiando a 780 estudiantes de las zonas 1, 2, 3, 4, 6 y 9. Entre las principales empresas para la formación DUAL de BTP están: Ministerio del Ambiente, Sedemi, Asociación de Ganaderos del Cantón Quijos, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico, ArmarGroup Cia. Ltda., entre otras. Suscripción del convenio de cooperación entre el MinEduc y

¹¹ Se aplica en 13 provincias de mayor incidencia de analfabetismo. Metodología contextualizada a la realidad sociocultural del país. Esta metodología está normada por el Convenio firmado entre el Ministerio de Educación de Ecuador y el Ministerio de Educación de Cuba y cuenta con el asesoramiento de expertos cubanos.

¹² Se aplica en 11 provincias con características de alta dispersión geográfica. Los contenidos del módulo incluye enfoque de derechos y en el aprendizaje del entorno de las comunidades y sus dinámicas sociales y culturales. La metodología Manuela Sáenz atiende además de manera intencionada a poblaciones en condición de analfabetismo con capacidades especiales, a personas privadas de la libertad y poblaciones de los cordones fronterizos.

¹³ Diseñado para alfabetizar a personas en lenguas maternas de pueblos y nacionalidades indígenas. Se aplica en 19 provincias con población de lenguas indígenas y 6 nacionalidades. Se utiliza el módulo Nuka Yachana Kamu. El contenido se orienta a fortalecer la identidad para la interculturalidad, a través de una metodología reflexivo-crítica que recoge la experiencia y cosmovisión indígena para generar procesos de enseñanza-aprendizaje para jóvenes y adultos, incluido el acercamiento lingüístico a la lengua hispana (dominio básico).

la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB) del Reino Unido de Bélgica, se ejecuta convenios específicos con este organismo de cooperación y otros socios estratégicos bajo el concepto de Proyectos de Relación Centros educativos y Comunidad en beneficio de unidades educativas de Z4 con oferta de Figuras Profesionales en Agropecuaria, Metalmecánica, y Electricidad. Otro programa llevado a cabo tiene que ver con el aumento del número de becas otorgadas para formación y/o especialización de profesionales en las mejores universidades del mundo, en áreas del conocimiento prioritarias para el desarrollo nacional. Entre 2007 y 2016 se entregaron 19 58644 becas y en consecuencia regresaron a Ecuador 4 818 becarios, de los cuales el 98% está trabajando en diferentes entidades públicas y privadas, para garantizar la aplicación de los conocimientos y experiencias.

Para el Objetivo Estratégico 3: Mejorar la calidad del servicio docente, se ejecutó el Plan para la reducción de la carga administrativa de los docentes, donde los acuerdos y logros alcanzados en este sentido benefician alrededor de 162.269 docentes y a 3.852 directivos a nivel nacional, sin contar con el beneficio directo que esta racionalización de actividades trae a los 4.578.330 estudiantes en cuanto a la mejora pedagógica y a su aprendizaje.

Para el Objetivo Estratégico 4: Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles tres niveles: educación inicial, educación básica y bachillerato. Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión: El número de estudiantes matriculados en Educación Inicial (3 y 4 años) se incrementó en 8 veces en 11 períodos lectivos (2007-2008 al 2017-2018), ante lo cual el Ministerio de Educación brindó cobertura al 100% (251.292) de niños y niñas que solicitaron un cupo en el período lectivo 2017-2018. La tasa neta ajustada de asistencia a Bachillerato alcanzó un 71,88% en 2017, es decir, 18,57 puntos porcentuales más que en el 2007 y 2,95 puntos porcentuales más que en el 2015. El número de personas alfabetizadas en el período 2011 - 2017 fue de 414.811, un acumulado de 4 veces al del 2011. Adicionalmente, en el 2017 se alfabetizó a 2.577 personas y se atendió con oferta de post-alfabetización a 32.962 estudiantes, 24.242 en la oferta de educación básica superior, y 23.353 estudiantes atendidos en el nivel de bachillerato. En el período lectivo 2017-2018 el número de estudiantes matriculados en Educación Intercultural Bilingüe (148.728) fue 0,15 veces más que en el período lectivo 2007-2008, es decir, 20.120 estudiantes más ingresaron a esta modalidad educativa. En el 2017 se atendió a 33.258 estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad en todos los niveles del sistema educativo dentro del Sistema Nacional de Educación.

Para el Objetivo Estratégico 5: Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la sociedad por los derechos en el proceso educativo. Se planteó la intervención y adecuación de la infraestructura para cumplir con los objetivos del “Plan de Intervención para generar espacios seguros”, que garantizan que la Institución vele por los derechos de la comunidad educativa, fomentando el deporte y promover la ecología en las IE. La sistematización de información remitida por las Coordinaciones Zonales sobre la implementación del Plan con la intervención en 836 IE. En materia de infraestructura educativa, dentro del Plan Decenal de Educación, se trata igualmente sobre las Unidades Educativas del Milenio, las cuales consisten en la construcción de construcción de bibliotecas, laboratorios, espacios para practicar deporte y actividades culturales y aulas con ambientes temáticos de acuerdo con la malla curricular, que incorpora recursos pedagógico en áreas rurales con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Hasta abril de 2017, Ecuador disponía de 189 Unidades Educativas en funcionamiento, de las cuales 78 son Unidades Educativas del Milenio. Además, 370 Unidades Educativas se encuentran en construcción.

Para el Objetivo Estratégico 6: Fortalecer las capacidades institucionales. En el 2017 fueron asignados al Ministerio de Educación USD 3.332 millones, de los cuales se ejecutó USD 3.213,9 millones. La ejecución presupuestaria fue del 97%. (Ministerio de Educación-Rendición de cuentas, Ecuador, 2018, p. 8)

2.2.3 Colombia: camino a la paz, equidad y educación.

Siguiendo con la metodología planteada, es el turno de describir las políticas públicas que en materia de salubridad y educación se han implementado y ejecutado en Colombia. De acuerdo a la regeneración constitucional generado en los albores de la década de los noventa,

La Constitución de 1991 trajo, sin lugar a dudas, grandes cambios para las instituciones y la sociedad colombiana. La transición de un Estado centralista, homogeneizante y confesional, caracterizado por configurar una serie de limitaciones para el ejercicio de las libertades ciudadanas, y por una alta concentración del poder en la rama ejecutiva, hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, implicó una gran transformación de instituciones y de mentalidades.

Aspectos como la consagración de un catálogo amplio y abierto de derechos humanos y la creación de mecanismos jurídicos para su exigibilidad e instituciones públicas encargadas de su defensa y promoción, significaron un cambio trascendental frente al tratamiento dado por la

Constitución de 1886 a estas garantías ciudadanas, por lo menos desde los planos constitucional y legal. (Observatorio de territorios étnicos y campesinos, 2012)

Los ciudadanos colombianos cuentan con hoy en día con

...un compendio de normas en el cual pueden identificar los derechos de los cuales son titulares, las obligaciones del Estado para garantizar los mismos y los mecanismos para exigirlos. Sin embargo, hay promesas incumplidas porque hoy, a pesar de lo ordenado por la Constitución de 1991, la garantía universal y de calidad de derechos como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo es todavía una meta lejana. Y lo es, en buena medida, porque el modelo económico, también adoptado por la misma Constitución, favorece la idea de que estos bienes sociales pueden tener una repartición equitativa a través de los mercados. (Observatorio de territorios étnicos y campesinos, 2012)

Esto, por cuanto las políticas neoliberales establecidas durante los noventa y principios de los dos mil, impulsaron la privatización de las economías y los servicios básicos que debían prestar los Estados.

Ahora bien, en materia de salud, con la Ley 1122 de 2007 se determinó que la salud pública en Colombia, está constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo.

Con el fin de desarrollar integralmente las políticas y programas tendientes a darle eficacia al derecho, se elaboró el Plan Decenal de Salud Pública PDSP. 2012-2021, el cual era producto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y buscaba la reducción de la inequidad en salud, planteando los siguientes objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. Uno de los mayores desafíos del Plan, era afianzar el concepto de

salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, con el fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida.

El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla a través de 8 dimensiones prioritarias y 2 transversales, cada dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y sectoriales que incorpora un conjunto de acciones (estrategias comunes y específicas). Las dimensiones prioritarias son: Dimensión Salud Ambiental. Componentes a. Hábitat saludable. b. Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales. Dimensión Convivencia Social y Salud Mental. Componentes: a. Promover la salud mental y la convivencia. b. Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia. Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional. Componentes: a. Disponibilidad y acceso a los alimentos. b. Consumo y aprovechamiento biológico. c. Inocuidad y calidad de los alimentos. Dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos. Componentes: a. Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género. b. Prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. Componentes: a. Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas. b. Enfermedades inmunoprevenibles. c. Condiciones y situaciones endo-epidémicas. Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres. Componentes: a. Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres. b. Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres. Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. a. Modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos. b. Atención integral en salud de las enfermedades no transmisibles. Dimensión Salud y Ámbito Laboral. Componentes: a. La seguridad y salud en el trabajo. b. La atención de situaciones prevalentes de origen laboral.

Las dimensiones transversales son: Dimensión gestión diferencial de las poblaciones vulnerables. Componentes: a. Niños, niñas y adolescentes. b. Grupos étnicos. c. Personas en situación de discapacidad. d. Adulto mayor. e. Personas víctimas del conflicto armado. Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud. Componente: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la: *regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, vigilancia epidemiológica y*

sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud.

El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano rector del sistema de salud colombiano, enmarca en cinco programas el cumplimiento a las metas e indicadores para su gestión, los cuales son: 1. Unificación y universalización del régimen subsidiado, 2. Prestación de servicios de salud de calidad, 3. Vacunación- Programa Ampliado de Inmunización, 4. Protección Salud Pública, Promoción y Prevención, 5. Sostenibilidad Financiera.

En las líneas que antecedieron, lo que se pretendió fue exponer tanto el órgano rector en materia de salud en Colombia, así como las políticas institucionales planteadas por los gobiernos de turno, para direccionar el actuar de los prestadores de los servicios así como de quienes ejercen la potestad salubre en el país.

Respecto a la educación, el artículo 67 de la Carta Política, lo consagró. También se garantiza el derecho a la educación para los niños (Artículo 44 de la Constitución). Reglamentariamente se ha desarrollado a través de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).

Para el órgano de cierre en materia constitucional en Colombia – Corte Constitucional-, se entiende que el derecho a la educación

...consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación con cuatro características interrelacionadas cuales son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, elementos que se predicen de todos los niveles de educación y que el Estado debe respetar (abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones). El Estado está obligado, entre otras cosas, a (i) abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas, a (ii) crear y/o financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todas aquellas personas que demandan su ingreso al sistema educativo y a (iii) invertir en recursos humanos (docentes y personal

administrativo) y físicos (infraestructura y materiales educativos, entre otros) para la prestación del servicio. (Sentencia T-306/11)

Lo situación antes descrita, la mayoría de las veces no se cumple, por cuanto el Estado no tener injerencia sobre las condiciones sociales de las personas, es decir, al considerarse como pensamiento de las clases menos favorecidas que la educación no es un derecho que otorgue favorabilidades a su vida, sino como pérdida de dinero y de tiempo.

En 2011, a nivel educativo, se decretó la gratuidad en la prestación del servicio educativo, desde transición hasta el grado once. Esta política social se tomó para que la falta de recursos económicos dejara de ser una barrera que les impidiera a los padres llevar a sus hijos al colegio. En la actualidad, más de 8 millones de niños y jóvenes estudian gratis y el sistema educativo en preescolar, básica y media alcanza una tasa de cobertura del 97%. Esta cifra fue citada por el Ministerio de Educación Nacional en la introducción que realizó al plan decenal de educación 2016-2026 ‘El camino hacia la calidad y la equidad’. A nivel de educación Superior también han existido avances en materia de gratuidad. Mientras en el año 2010, solo tres de cada diez jóvenes ingresaban, en 2016 lo hicieron cinco de cada diez jóvenes. Hoy en día, alrededor del 60% de los nuevos estudiantes que acceden a la Educación Superior provienen de hogares con menores ingresos, incrementando los profesionales del país.

Como se estudió anteriormente, es necesario que el Plan Nacional Decenal de Educación sea construido por el Ministerio de Educación Nacional como órgano rector en la materia, en coordinación con las entidades territoriales y con participación tanto de la sociedad civil, el sector privado como los diferentes actores relacionados con la ejecución de políticas y programas en materia educativa. Para la elaboración del Plan Decenal de Educación 2016-2026 ‘El camino hacia la calidad y la equidad’, se realizó una introspección del sector, tendiente a identificar los principales desafíos del sistema educativo y propiciar el empoderamiento de los colombianos para la transformación de la realidad del país. Para el efecto, se exponen los principales avances y retos de la educación, a partir de cinco categorías: 1. Acceso y Cobertura, 2. Permanencia, 3. Calidad, 4. Pertinencia, y 5. Financiación.

Para todas las categorías que se tratan en el Plan Decenal, se analizan los niveles de educación. A continuación se extrae del Plan Decenal los logros obtenidos con el plan 2006-2016 y lo que se espera con la nueva política.

1. Acceso y Cobertura. La cobertura bruta y neta en preescolar, básica y media se han mantenido estables con una tendencia a la baja (la cobertura bruta pasó de 100,51% en 2006 a 97,2% en 2016 y la cobertura neta de 89,42% a 85,4% en 2016), principalmente, debido a la disminución de la población en edad escolar y los procesos de depuración de los registros de información desde el nivel territorial, se encuentran avances importantes en el acceso de la población joven a los niveles de educación secundaria y media. El nivel de educación media (grados décimo y once) presenta el mayor logro en el decenio con un aumento de 10,61 puntos porcentuales (p.p.) al pasar de 68,87% en 2006 a 79,48% en 2016 en la cobertura bruta. Por su parte, el nivel de secundaria presenta un aumento de 7,37 p.p. con un comportamiento regular en esta década educativa, al pasar de una tasa de 93,01% en 2006 al 100,38% en 2016. La cobertura neta exhibe una trayectoria similar a la descrita anteriormente, en la que los niveles de media y secundaria tienen avances en el decenio de 6,77 y 6,27 p.p., respectivamente. En educación superior uno de los grandes retos ha sido el aumento de la cobertura para lograr que más bachilleres accedan a este nivel educativo. Entre 2006 y 2016, la cobertura creció en 21,5 p.p., pasando del 30,4% en 2006 al 51,52% en 2016. Esto se traduce en más de un millón de cupos nuevos.
2. Permanencia. El Gobierno Nacional ha desarrollado diferentes estrategias para garantizar la continuidad de los estudiantes matriculados en el sistema educativo. Es así como la tasa de deserción intra - anual del sector oficial ha disminuido en todos los niveles educativos. Para el nivel de primaria se obtuvo la mayor disminución de la deserción en el decenio, al pasar de una tasa de 6,15% en 2006 a 3,02% en 2016. La tasa total de la deserción nacional, también cedió pasando de un 5,84% en 2006 a una tasa de 3,72% en 2016. Uno de los mayores retos en educación superior es continuar disminuyendo la tasa de deserción, que sigue siendo alta y pone en evidencia la dificultad que tienen los jóvenes para permanecer en el sistema, así como para conseguir su graduación. Durante el decenio, se logró disminuir la tasa de deserción en educación superior en 2,5 p.p., pasando de 11,5% en 2006 a 9,0 en 2016, con una tendencia decreciente a partir del 2010.
3. Calidad. Al inicio del decenio, en términos de calidad en la atención integral a la primera infancia se dieron los primeros lineamientos hacia la formación de agentes educativos y se avanzó en la construcción y publicación de los referentes técnicos para la cualificación del

talento humano. Lo anterior permitió, durante el periodo 2006-2016, capacitar a más de 188.0007 agentes educativos y maestros en atención integral. El impacto de las estrategias implementadas se ha visto reflejado en los resultados de las pruebas nacionales. En el año 2012, según las pruebas Saber 3°, 5° y 9°, el porcentaje de estudiantes en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en lenguaje correspondía a 42% y en el 2016 se ubicó en 46%, mientras que en matemáticas, para el año 2012 el porcentaje correspondía el 31% y en el año 2016 se ubicó en 35%. Si bien los resultados en las pruebas nacionales presentan mejoras, aún se encuentran brechas importantes entre zonas urbanas y rurales y grupos socioeconómicos. Respecto al nivel superior, los procesos de acreditación emprendidos han permitido que, con corte al 31 de diciembre de 2016, Colombia cuente con 896 programas de pregrado acreditados, de los cuales el 55% corresponden a programas de IES privadas y el 45% a IES públicas. En el caso de los posgrados se cuenta con 126 programas acreditados, los cuales se concentran de forma mayoritaria en las IES públicas con el 77%, mientras que los programas de posgrado de las IES privadas representan el 23%. Cabe señalar también que, al 31 de diciembre de 2016, 41 IES contaban con acreditaciones en alta calidad, de las cuales el 47% son públicas, mientras el 53% corresponde a IES privadas.

4. **Pertinencia.** Durante el período 2008-2016 se aumentó en 72 puntos porcentuales la matrícula de estudiantes con discapacidad al pasar de 106.302 estudiantes en 2008 a 183.203 en 2016, alcanzando una inserción de 76.901 nuevos estudiantes al sistema escolar. El Ministerio de Educación, a través de la oferta de programas académicos pertinentes a las necesidades socioeconómicas de las regiones, ha fomentado la implementación de estrategias para fortalecer tanto la oferta como la demanda del servicio de educación superior en el territorio.
5. **Financiación.** En Colombia, el Gasto Público en Educación como porcentaje del PIB ha permanecido constante desde el año 2002. Sin embargo, en los últimos ocho (8) años este se ha ubicado por encima del 4,5% como porcentaje del PIB, equivalente a un aumento de 0,5 puntos porcentuales de participación respecto al 2002. Analizando estas cifras en términos reales, se evidencia la magnitud del crecimiento de los recursos. Es así como, mientras en el 2010 se destinaron \$26,6 billones al gasto público en educación, en 2016 esta cifra llegó a \$38,7 billones. Es decir, cerca de \$12,1 billones adicionales. (Ministerio de Educación de Colombia, 2017, p. 24)

En el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 ‘El camino hacia la calidad y la equidad’, se consignan las acciones concretas que el país debe desarrollar para mejorar la calidad de la educación, en torno a cinco principios orientadores:

1. Contribuir con la construcción de la paz, la cultura ciudadana y el sentimiento de Nación. 2. Impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la educación. 3. Reducir los altos niveles de inequidad y las brechas regionales. 4. Ampliar los temas educativos en todos los ámbitos del Gobierno y la sociedad. 5. Entender la educación como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. El Plan describe los 10 desafíos que el país debe abordar en sus políticas públicas para lograr que se siga avanzando hacia una educación de calidad y que supere brechas de inequidad: 1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 2. La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. 3. El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 4. La construcción de una política pública para la formación de educadores. 5. Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. 6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 7. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género. 8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. 9. La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del Gobierno, en todos sus niveles administrativos. 10. Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2017, p. 17)

Ahora bien, para el desarrollo de tales derechos (Salud y Educación), en el año 2007, el Gobierno Nacional Colombiano por medio del programa Mas Familias en Acción, pretendió abarcar “...la totalidad de los grandes y medianos centros urbanos del país, donde las condiciones de acceso a los servicios de salud y educación de la población vulnerable son diferentes a las de los demás municipios...” (Cecchini y Vargas, 2014, p. 25) Continuando con su ejercicio de programa:

En 2011 se rediseñaron los criterios de focalización, los montos de las transferencias por zonas geográficas y grado educativo, y las reglas de salida; en ese año el nombre del programa fue cambiado a Más Familias en Acción. (...) Este programa también se destaca por la inclusión de las familias desplazadas a causa de la violencia interna. (Cecchini y Vargas, 2014, p. 25)

Los componentes del programa se enmarcan en:

- Bono de nutrición, dirigido a todos los niños menores de 7 años, con la condición de que cumplan con el 100% de asistencia a los controles médicos de crecimiento y desarrollo; asimismo, las madres y otros miembros del hogar deben concurrir a sesiones informativas.
- Bono de educación, dirigido a todos los menores de 5 a 18 años, con la condición de que cumplan con al menos el 80% de la asistencia escolar; las madres y otros miembros del hogar deben concurrir a sesiones informativas. (Cecchini y Vargas, 2014, p. 25)

Dicho “...programa presenta una **cobertura relativamente estable entre 2010 y 2013**, alcanzando actualmente a 2.681.552 familias, compuestas por 11,5 millones de personas (un 23,8% de la población del país...” (Cecchini y Vargas, 2014, p. 26)

Otro programa llevado a cabo por parte del Ministerio de Salud de Colombia, es el denominado “Estrategia de Atención Segura de las Mujeres durante un Evento Obstétrico”, el cual impulsa una Maternidad segura y la prevención del aborto inseguro. La razón para la creación de dicha estrategia consiste en que para lograr un óptimo desarrollo humano, es fundamental mejorar la salud sexual y la salud reproductiva de las poblaciones, en tanto que esto determina la calidad de vida de las personas. Las acciones que comprende la estrategia son:

- Difunde los derechos humanos sexuales y reproductivos a través de diferentes estrategias de información, educación y comunicación
- Garantiza a través del Plan Obligatorio de Salud, una amplia gama de métodos modernos de anticoncepción.
- Define los lineamientos técnicos para la atención segura de las mujeres durante el embarazo el parto y el puerperio.

- Garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho amparado a partir de la Sentencia C-355 de 2006 proferida por la Corte Constitucional Colombiana.
- Desarrolla el modelo de vigilancia de la morbilidad materna extrema, como una herramienta de mejoramiento continuo de la calidad de la atención obstétrica, con el fin de alcanzar una maternidad segura en las mujeres que así lo deciden.
- Dispone en el marco del aseguramiento y la prestación de servicios de salud, el soporte normativo suficiente, para garantizar la atención integral de las mujeres durante la gestación.
- Propende por la identificación y eliminación de barreras de acceso a la salud reproductiva y a la salud sexual de las mujeres en Colombia.
- Construye el Modelo de Vigilancia de Morbilidad Neonatal Extrema (VMNE), en el marco del modelo de vigilancia de la morbilidad materna extrema, concebida como herramientas para el mejoramiento continuo de la calidad.

En materia de protección de la niñez, entendida como los primeros 6 años de vida y ante la imposibilidad de subsanar las falencias durante esta etapa de la vida con intervenciones posteriores, se evidenció la necesidad de establecer una política pública focalizada hacia los niños y las niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad, denominada por el Gobierno Colombiano (Ministerio de Protección Social y Educación) como política pública nacional de primera infancia “Colombia por la primera infancia” establecida mediante Documento Conpes Social 109 de 03 de diciembre de 2007. Sus líneas estratégicas se enmarcan en:

- la Educación Inicial: Esta línea de acción da cuenta del diseño, construcción y posicionamiento de los lineamientos técnicos y orientaciones para la educación inicial. Este conjunto de criterios conceptuales, metodológicos y técnicos se relacionan con: El Referente Técnico en Educación inicial, las Orientaciones Pedagógicas y el lineamiento de Cualificación del Talento Humano que trabaja con Primera Infancia.
- Fortalecimiento de la Educación Inicial: busca posicionar y establecer los mecanismos y procesos requeridos para que las Entidades territoriales certificadas incorporen y

gestionen el desarrollo y posicionamiento de la Educación inicial, fortaleciendo la labor del sector educativo.

- Gestión de la calidad para las modalidades de educación inicial: Esta línea estratégica define unos criterios y estándares para la prestación de servicios en diferentes escenarios, con el propósito de garantizar la calidad de las atenciones dirigidas a las niñas y niños. Como soporte fundamental de este propósito, se contempla el diseño e implementación de procesos de inspección, vigilancia y control en las entidades territoriales, en el marco de las competencias institucionales que le corresponden a cada sector del Estado
- Cualificación de Talento humano: Esta línea estratégica se encuentra orientada a generar procesos de actualización permanente en temáticas que aportan a la comprensión del sentido y alcance de la educación inicial, dirigido a los responsables del proceso de Atención Integral a la Primera Infancia.

Tendiente a erradicar la analfabetización en el país, el Ministerio de Educación tiene implementado el programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos, cuyo objetivo es lograr que los jóvenes mayores de 15 años y adultos iletrados reciban un proceso de formación en competencias básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales, y competencias ciudadanas, integrando de manera flexible las áreas del conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo Lectivo Especial Integrado de educación de adultos, correspondiente al grado tercero de la educación básica primaria. A la par, por la situación social del país, desde el 2005 hasta la fecha, el Ministerio de Educación Nacional ha incorporado didácticas sicosociales articuladas a los procesos cognitivos de educación de adultos, orientadas a población vulnerable y en situación de desplazamiento.

Para proveer nivel superior de educación a personas de vulnerabilidad, el pasado Gobierno implementó el programa “Ser Pilo Paga”, con el fin de facilitar el acceso a instituciones universitarias de calidad a los estudiantes de menos recursos con excelentes resultados en las pruebas Saber. Las condiciones para acceder al programa se circunscriben en un puntaje superior a 318 en la prueba Saber; además, debe estar registrado en el Sisbén y allí estar clasificado con las siguientes puntuaciones: menos de 5.721 puntos si vive en las 14 principales

ciudades del país, 5.632 si está en los demás centros urbanos, o menos de 4.075 puntos si es habitante de zonas rurales. Si muchos estudiantes inscritos en el Sisbén obtienen puntajes superiores a 318 en la prueba Saber, se privilegiará a los que tenga menor puntuación en el Sisbén. Este programa ha sido objeto de múltiples críticas por diversos sectores de la población, por cuanto argumentan que la mayoría de los recursos destinados para pagar las matrículas de los beneficiarios, ingresaron a las arcas de las instituciones privadas, desestimando a la educación pública del país.

Similar a la política de Ecuador “Vuelvo por ti”, en Colombia, a partir de la expedición de la Ley 1565 de 2012 -o Ley Retorno-, se pretende brindar un acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país. Además, crea incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero concernientes al retorno de los connacionales. Los tipos retorno son los siguientes: Solidario: Este tipo de retorno lo realizan los colombianos víctimas del conflicto armado y las personas en condiciones de pobreza extrema. Humanitario o por causas especiales: Este tipo de retorno aplica a los connacionales que por alguna situación de fuerza mayor o causas especiales (que pongan en riesgo su integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares, así como el abandono o muerte de familiares en el exterior). Retorno Laboral: Este tipo de retorno permite el acceso a orientación ocupacional y capacitación para mejorar las competencias laborales, para esto el Ministerio de trabajo creo el servicio de Empleo, el cual es un Sistema que recopila y comparte la información de los buscadores de empleo, así como las vacantes. Dentro de los servicios básicos que reciben los migrantes que retorna está el análisis de perfiles, aptitudes, conocimientos, cualificación profesional, y orientación e información laboral. Retorno Productivo: Este tipo de retorno, permite el desarrollo y asesoría de emprendimiento en proyectos productivos, así como la orientación sobre las posibles fuentes de financiación a las cuales pueden aplicar de acuerdo a su perfil. Pero existen múltiples diferencias respecto a la política pública ecuatoriana de retorno, por cuanto, ella está encaminada a que regresen al país, profesionales en el área de la salud, es decir, médicos y técnicos, que tengan la disposición de replicar los conocimientos adquiridos en el área de sanidad (hospitales y clínicas), con unos beneficios económicos. La política colombiana va dirigida a todas los connacionales que deseen retornar al país, independiente de su tipo de

educación (básica, media, secundaria, técnica, tecnológica, profesional), con ciertos beneficios. Por tanto, la política Ecuatoriana podría replicarse en Colombia, al estimarse que aproximadamente en el año 2014 cerca de 45.000 estudiantes salieron de Colombia a estudiar a otros países y ya profesionales, se estima que 4.642 doctores residen mayoritariamente en Estados Unidos y otros países del hemisferio norte.

En ese orden de ideas, se puede evidenciar que a pesar de que los países de estudio han pretendido dar cabal cumplimiento a los derechos consagrados en las nuevas constituciones adoptadas y los gobiernos que han sucedido a tales cambios constitucionales han acogido programas de intervención estatal para su acatamiento, existen múltiples factores que impiden que tales programas se desarrollen a cabalidad. Por ejemplo en Colombia, a través de la acción de protección constitucional denominada Acción de Tutela, se intentan proteger los derechos que han sido vulnerados en materia de salud como caso específico, al no prestar los debidos servicios necesarios para garantizar el ejercicio correcto del derecho por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), pues la norma que las regula, no cubre ni ciertos procedimientos ni la entrega efectiva de medicamentos de alto costo para enfermedades que no se encuentran enmarcadas dentro del Plan Obligatorio de Salud.

En Colombia, los gobiernos nacionales se han interesado particularmente por el desarrollo de la evaluación de las políticas, siendo liderado este tema por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en aplicación de la nueva Constitución Política de 1991, a través de Sinergia (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados) y de su Departamento de Evaluación (DEPP). (Roth, 2017, p. 67). Para el caso del derecho a la salud, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con 12 programas desarrollados a través de 84 indicadores. Y el Ministerio de Educación Nacional, tiene 13 programas instaurados con 75 indicadores.

Al respecto, el informe del Foro Económico Mundial (Perspectivas de la Agenda Mundial 2014) (Fondo Monetario Internacional -FMI-, 2014). identifica grandes desafíos en América Latina, los cuales se enmarcan en: 1) Incrementar el crecimiento económico y 2) Mejorar la calidad de la educación, con lo cual, pretenden los Estado construir un verdadero estado social de

derecho en el caso de Colombia y Bolivia o un estado constitucional para el caso de Ecuador, que garantice la dignidad humana como principio fundamental de aquel, preserve las libertades individuales y grupales como lo establecen las diversas Constituciones, y reconozca la primacía de los derechos fundamentales, económicos, culturales y colectivos.

Al haber determinado cuales han sido los programas que los distintos gobiernos han ejecutado para el cumplimiento de los derechos a la salud y a la educación en los países de estudio, se puede concluir con las políticas instauradas y desarrolladas, lo que se pretende es cumplir con los fines esenciales proclamados constitucionalmente en los Estados, al ser garantes de los derechos y las libertades fundamentales. Así mismo, se evidencia que con tales programas, se procura construir un verdadero estado social de derecho o en el caso de Ecuador, un Estado Constitucional de Derecho, donde se garantizan la vida y la dignidad humana por encima de cualquier otro derecho, al reconocer sin discriminación alguna, pues todos son objeto de protección por parte del Estado, la primacía tanto de los derechos fundamentales como de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos. El carácter esencial del Estado Social de Derecho, es decir, la protección social, se ve reflejada en todas las Constituciones estudiadas, al brindarle prioridad al concepto social, es decir, al interés colectivo que le asiste y en especial, con las necesidades de la sociedad y de la familia.

3. Evaluación de los programas de acción pública y mecanismos de protección de los derechos a la educación y salud.

El estado está conformado para y por la sociedad. En razón a ello, debe garantizar que la relación existente entre sus órganos y la comunidad, sea eficaz y eficiente para cumplir con los objetivos que cada modelo de estado consagra dentro de su actuar. Dentro de ellos, se encuentran enmarcados los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y demás que estén establecidos en no sólo en los programas de gobierno, sino consagrados constitucionalmente como fines esenciales del estado, en extrema relación con el cumplimiento por parte del Estado de las garantías para la protección de los derechos.

Ahora bien, el problema jurídico planteado para el presente trabajo, se circunscribe en definir cuál es el estado de los derechos fundamentales en Ecuador, Bolivia y Colombia como elemento esencial de los estados sociales de derecho y sus consecuencias en la democracia, por tanto, es menester determinar la eficacia de las políticas públicas y de los mecanismos de protección que se han implementado desde la aprobación de las Cartas Constitucionales en dichos países con miras a garantizar el cumplimiento de los derechos de carácter de fundamental consagrados. Para lo anterior, en las líneas que siguen, se comenzará por realizar un ejercicio próximo de evaluación de las políticas públicas que se han implementado en los países de estudio con miras a garantizar la protección de los derechos a la salud y a la educación por parte del Estado, así como los mecanismos de defensa en materia judicial con que cuentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos cuando son vulnerados.

3.1 Eficacia de las políticas públicas tendientes a determinar el cumplimiento de los derechos. Metodología de Evaluación Utilizada.

En primera medida es necesario determinar que la actividad próxima de evaluación que se realizará en las líneas que prosiguen, no solo alimenta el debate democrático y político, sino que permite entrar a mirar el grado de cumplimiento de los derechos. La evaluación que se realizará de los determinantes antes descritos, se enmarcará en recolectar, verificar e interpretar la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas y programas públicos establecidos por los gobiernos de análisis. (Majone, 1997, p. 214). Para esto, se realizó una búsqueda electrónica sistemática en diferentes fuentes bibliográficas de informes, estadísticas nacionales e internacionales relacionadas con los programas ejecutados en materia de salud y educación. De acuerdo a la metodología establecida para la evaluación de las políticas públicas (Roth, 2017), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos relevantes:

1. Momento: Evaluación *ex post*, retrospectiva o *a posteriori*. Por cuanto es la que se realiza posteriormente a la ejecución de la acción. Se trata de analizar los efectos de un programa o de una política pública luego de efectuada su implementación.

2. Finalidad y objeto: Evaluación *recapitulativa* (*summative evaluation*). La finalidad de la evaluación es informar al público en general o a actores externos sobre un programa en particular para que se formen una opinión sobre su valor intrínseco.
3. Modos de evaluación: de resultados. Se concentra en los productos o consecuencias de una actividad en particular.
4. Niveles: de satisfacción. Consiste en que la razón de ser de la acción pública no está necesariamente en cumplir con objetivos, fijados a través de un proceso institucional de decisión, sino en resolver los problemas fundamentales de una población.

Para entrar a evaluar la eficacia de las políticas públicas formuladas, implementadas y ejecutadas por parte de los órganos ejecutivos en los países de estudio, tendientes a cumplir con los postulados constitucionales de la salud y la educación, los cuales constituyen pilares en la construcción de un estado social de derecho, en el presente subcapítulo, se procede a realizar la medición respectiva, teniendo como base varios determinantes, tales como:

1. La Observación General No. 13 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, proporcionan interpretaciones y clarificación del Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales referente al derecho a la educación, para lo cual, establece como características fundamentales del mismo, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.
2. Las Observaciones Generales No. 14 y 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ofrecen el contenido normativo básico del derecho a la salud y determina cuatro elementos esenciales sobre los cuales debe desarrollarse tal derecho, los cuales son la disponibilidad, la accesibilidad (cuatro dimensiones hacen parte de este elemento, a saber: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica, acceso a la información), la aceptabilidad y la calidad.
3. A comienzos del nuevo milenio (año 2000), los líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas para dar forma a una visión amplia con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión, que fue traducida en ocho Objetivos de Desarrollo

del Milenio (ODM), los cuales se enmarcan en: Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal, Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, Objetivo 5: Mejorar la salud materna, Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. De los anteriores, para los efectos del presente trabajo, solo se analizara su cumplimiento, los que se enmarquen en los derechos a la salud y a la educación, es decir, el Objetivo No. 2, 4, 5 y 6.

4. Finalizando el año 2015, específicamente el 25 de septiembre, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse al año 2030. Para el presente trabajo, se tendrán en cuenta el objetivo No. 3 “Salud y bienestar”, tendiente a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y tiene como finalidad lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos. Y el objetivo No. 4, destinado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

De acuerdo a la clasificación de las características fundamentales propuestas por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, analizadas en el capítulo anterior, en las líneas que siguen y con relación a las políticas identificadas en cada país, con su porcentaje de avance, se observará si se cumplen o no.

De acuerdo a las características fundamentales preceptuadas por la Observaciones General No. 13, respecto al derecho de educación, a continuación se realiza un comparativo de las disposiciones (constitucionales, reglamentarias y políticas públicas) de cada uno de los países estudiados para dar cumplimiento a tales características.

Indicadores para medir el grado de realización del derecho a la Educación	Ecuador	Bolivia	Colombia
Disponibilidad	<p>El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior (...) (art. 344).</p> <p>El Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades, estabilidad, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, y actualización, una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y escalafón, establecerá un sistema nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente (art. 349).</p>	<p>La Resolución Ministerial No. 001/10 del 11 de enero de 2010, incluye normas generales para la planificación, organización, ejecución y evaluación de la gestión educativa 2010 en los niveles inicial, primaria y secundaria del subsistema de educación regular.</p> <p>La Ley 1565 de Reforma Educativa del 7 de Julio de 1994 estableció el carácter democrático de la educación, por cuanto toda la sociedad participa en su planificación, organización, ejecución y evaluación. Dispuso, asimismo, la incorporación del enfoque intercultural y la modalidad bilingüe en la educación respondiendo a la heterogeneidad socio-cultural del país.</p>	<p>Con respecto a la disponibilidad o la asequibilidad del servicio, la sentencia T-1259 de 2008 la explicó como “(...) la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre otras cosas, el deber de abstenerse de impedir a los particulares fundar colegios, escuelas o cualquier tipo de centro educativo y la necesidad de asegurar la inversión en infraestructura para la prestación de este servicio(...)”</p>
Accesibilidad	<p>La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive (art. 28).</p> <p>Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se</p>	<p>Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.</p> <p>Artículo 81.</p> <p>I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.</p> <p>II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.</p> <p>III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller, con carácter gratuito e inmediato.</p> <p>Artículo 82.</p> <p>I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las</p>	<p>Los artículos 41 y 42 del Código de Infancia y Adolescencia, contemplan las obligaciones del Estado y de las Instituciones Educativas frente al derecho a la educación de los menores. Entre estas, se señala en los numerales 1 y 2 del Artículo 42 las siguientes: Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia y brindar una educación pertinente y de calidad. A partir del año 2012, las instituciones educativas públicas prestan el servicio de forma gratuita hasta el nivel de secundaria.</p> <p>-A partir del año 2014, el Gobierno Nacional implementó el programa “Ser Pilo Paga”, con el que se</p>

	<p>proporcionarán, sin costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos.</p>	<p>ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley. III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.</p>	<p>incentiva a los estudiantes con menores recursos a mantener un buen desempeño académico con el fin de acceder a Instituciones de Educación Superior de Alta Calidad. Créditos 100% condonables en el momento de finalización del proceso académico, financiamiento del valor total de la matrícula y un subsidio de sostenimiento. -Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. De Cero a Siempre.</p>
Aceptabilidad	<p>La Constitución política de Ecuador establece en su artículo 26 que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad.</p> <p>De acuerdo al literal de dd del art. 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, “La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL). Los estándares serán al menos de dos tipos: curriculares, referidos al rendimiento académico estudiantil y alineados con el currículo nacional obligatorio; profesionales, referidos al desempeño de las y los docentes y del personal</p>	<p>La concepción de la calidad de la educación, así como su evaluación y acreditación, deben estar en sintonía con las nuevas políticas educativas, para responder a la construcción y consolidación del nuevo Estado Plurinacional a través del Observatorio Plurinacional De La Calidad Educativa del cual deriva el Sistema plurinacional De seguimiento, medición, Evaluación y acreditación De la calidad educativa</p> <p>Art.78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad.</p> <p>Art. 89. El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo el sistema educativo estará a cargo de una institución pública, técnica especializada, independiente del Ministerio del ramo. Su composición y</p>	<p>el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) Evaluación de los ciclos educativos — Básica Primaria, Básica Secundaria y Media—.</p> <p>En las pruebas PISA, Colombia fue uno de los tres únicos países que mejoró en todas las áreas evaluadas en el 2015, en comparación con los resultados del año 2012: lectura (22 puntos), ciencias (17 puntos) y matemáticas (14 puntos). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció a Colombia como el sexto sistema educativo que más rápido está mejorando, entre los 72 que presentaron esta prueba.</p> <p>PISA es una evaluación estandarizada en la que Colombia se mide, con diversas economías y países del mundo, en las habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años para</p>

	<p>directivo de los establecimientos educativos”.</p> <p>Mediante Acuerdo Ministerial 482, del 28 de noviembre del 2012, el Ministerio de Educación propone los siguientes tipos de estándares.</p> <p>Estándares de Aprendizaje Estándares de Gestión Escolar Estándares de Desempeño Profesional Directivo Estándares de Desempeño Profesional Docente Estándares de Infraestructura Escolar</p>	<p>funcionamiento será determinado por la ley.</p> <p>En el ámbito específico de la educación, el Sistema Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación se sustenta en la Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, que en su Art. 5, numeral 18, establece: “Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema Educativo Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, medición, evaluación y acreditación con participación social. En el marco de la soberanía e identidad plurinacional, plantear a nivel internacional indicadores, parámetros de evaluación y acreditación de la calidad educativa que respondan a la diversidad sociocultural y lingüística del país”.</p>	<p>resolver problemas cotidianos. Esta prueba evalúa tres áreas principales: lectura, matemáticas y ciencias. En el 2018, el énfasis será en lectura.</p>
Adaptabilidad	<p>Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades. El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y</p>	<p>Artículo 77.</p> <p>I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.</p> <p>Artículo 85.</p> <p>El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una organización y desarrollo curricular especial.</p>	<p>La Constitución Política de Colombia. en el inciso 5 del Artículo 67: (...) garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (...)</p>

	circunscripciones. Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.		
--	---	--	--

Cuadro No. 2. Elaboración propia.

Del cuadro anterior se puede deducir que constitucionalmente se han dispuesto normas tendientes a asegurar que los Estados cumplan con cada una de las características preceptuadas por la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Seguidamente, los Estados analizados han emitido disposiciones cuyo fin es reglamentar lo que la carta magna les exhorta cumplir al respecto y por último, se evidencia la formulación e implementación de políticas, planes y programas específicos para tales fines.

Ahora bien, centrándose exclusivamente en el cumplimiento de cada una de las características reseñadas con anterioridad, tendientes a proteger el derecho a la educación en todos sus ámbitos (acceso, permanencia, cobertura, etc), se procederá a analizar cada característica con unos indicadores específicos con el objetivo de determinar su capacidad para producir el efecto deseado, es decir, su eficacia en cada uno de los países analizados.

1. Derecho a la disponibilidad. Obligación de asequibilidad. Según lo que se plantea respecto a este derecho, a todo usuario del servicio educativo público, independiente del nivel en que se encuentre, debe garantizársele la adecuada prestación del servicio, es decir, docentes suficientes e idóneos, plantas físicas donde recibir las clases, programas de enseñanzas debidamente establecidos, servicios de biblioteca, equipos informáticos.
2. Derecho al acceso/ Obligación de accesibilidad. En este aspecto, se tiene en cuenta que el derecho a la educación trae consigo que se pueda acceder a él, siendo obligación por parte del Estado, subrogarse los costos y generar la gratuidad del servicio. Esta implica no solo el no pago de matrícula o mensualidad, sino que se tenga durante la jornada,

acceso a alimentación, transporte cuando la necesidad por localización geográfica lo imponga. En este caso, se refleja el avance en la oferta pública por parte de los tres estados estudiados, al consagrar todos la gratuidad del servicio educativo en los niveles que se presta. Con esta obligación, se pretende proteger el acceso a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna. En este aspecto, los tres países han avanzado en garantía de acceso a personas en situación de discapacidad (física, mental), en afrodescendientes, en tribus indígenas, por cuanto las Constituciones consagran que el derecho a la educación es de carácter fundamental independiente de la condición social, económica, cultural o física.

3. Derecho a la calidad/ Obligación de aceptabilidad. La prestación de servicio educativo está sujeta a estándares de calidad. El estado debe garantizar durante todos los niveles de educación, que el servicio que se preste sea óptimo, adecuado y que genere conocimiento. Los tres países, velan por que los docentes estén en continuo aprendizaje, ofreciéndoles oportunidades de capacitación permanente de acuerdo a sus competencias. El Estado debe regular y supervisar, las instrucciones que imparten los docentes, la orientación psicológica que debe ser siempre de carácter permanente, por cuanto no sólo se debe acudir a ella en casos meramente educativos, sino en aquellos momentos en que los estudiantes lo necesiten, disciplina en las instituciones educativas que garantice la no vulneración de sus derechos. Esta obligación se desprende del derecho a la calidad y por ende, se concluye que los países de estudio, de manera constante y permanente, velan por que el personal docente incluyendo su parte administrativa, se capaciten, obtengan nuevos conocimientos y así, se implementen técnicas nuevas de aprendizaje, de ayuda psicológica o manejo de las pautas de comportamiento de los estudiantes.
4. Derecho a la permanencia/Obligación de adaptabilidad. Se debe garantizar que los beneficiarios de los programas educativos, permanezcan y continúen durante todos los niveles. En este aspecto, los estados han ampliado los beneficios dentro del plantel educativo, es decir, el acceso a alimentación, a transporte, a medios informáticos, a servicio de biblioteca, que muchas veces por cuenta de no tener económicamente la posibilidad de transportarse, se retiran del servicio educativo. Los tres países han avanzado en el manejo del tema, procurando darles más beneficios a los estudiantes para

que no se haya deserción. Cuando se adapta a un entorno, se genera automáticamente su permanencia en el mismo. Se deben respetar las diferencias, el multiculturalismo. Situación que es de manejo prioritario en los países de estudio, por cuanto, se garantiza la prestación del servicio a todos los habitantes del territorio, independiente de su condición social, racial, económica, cultural.

Para efectuar la medición de las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores correspondientes al año 2017:

- Población total
- Cantidad de maestros/docentes
- Cantidad de estudiantes matriculados (primaria/secundaria/bachillerato)

Las relaciones que se realizaron para dar paso a la demostración, fueron:

- Relación de estudiantes matriculados/maestros(docentes)
- Relación de estudiantes matriculados/población total
- Relación de maestros(docentes)/población total (cantidad de maestros por habitante)

Estos indicadores lo que pretendían era demostrar que las relaciones propuestas se enmarcaban dentro de las obligaciones descritas en líneas anteriores, es decir, determinar si los países estudiados posibilitaban tanto el acceso, la cobertura, como la permanencia en el sector educativo:

2017	Población Total	Cantidad de Maestros/ Docentes	Población Estudiantil Matriculada	Estudiantes Matriculad os / Maestros (Docentes)	Estudiantes Matriculad os / Población Total	Población Total /Maestros (Docentes)
Colombia	49.292.000	448.182	10.020.294	22,36	20,33	109,98

Ecuador	16.624.858	208.885	5.341.928	25,57	32,13	79,59
Bolivia	11.145.770	127.609	3.785.921	29,67	33,96	87,34

Cuadro No. 3. Elaboración propia. Fuentes: BOLIVIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN – SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (SIE) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Colombia. DANE, Educación Formal (EDUC). https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_17.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_16.pdf. Ecuador: Fuente: Registros administrativos, periodo escolar 2016-2017, docentes en unidades educativas escolarizadas, regulares por género. <https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/noticias/1122-ministerio-de-educacion-refleja-indicadores-positivos-en-equidad-de-genero>

Para analizar los resultados de la primera relación efectuada, es decir, estudiantes matriculados/maestros (docentes), se evidenció que en Colombia están matriculados 22,36 estudiantes por maestro, en Ecuador 25,57 estudiantes matriculados por maestro y en Bolivia 29,67 estudiantes por maestro. En tal virtud, se puede deducir que en la medida en que el número de estudiantes matriculados atendidos por cada maestro/docente sea menor, se favorecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes, siendo un factor determinante –no único- para la permanencia en el sector educativo. A este factor se le deben sumar aspectos tales como la alimentación durante la jornada escolar, del cual se ha comprobado que es una de los aspectos que contribuye, no sólo a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también a mejorar sus desempeños escolares, ya que mejora la capacidad de atención de los estudiantes y por ende sus procesos de aprendizaje, además, el transporte que se requiere para llegar a las sedes y poder acceder al servicio educativo, la gratuidad del servicio, entre otras.

Colombia cuenta con el PAE, es decir, el Programa de Alimentación Escolar, el cual brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional vinculados a instituciones educativas de carácter estatal. Su objetivo fundamental es contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad. Para el año 2016, el número de estudiantes matriculados en instituciones oficiales alcanzó una cifra cercana a los 8 millones de estudiantes, mientras que los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar se aproximaron a los 4,9 millones, por lo tanto a nivel general la cobertura fue alrededor del 61%

(Contraloría, 2016), Una de las razones por las cuales el programa no es ejecutable en su totalidad, obedece a la complejidad del programa, para esa vigencia se extendió a lo largo de 1.103 municipios, a través de más de 13 mil instituciones educativas urbanas y rurales y es responsabilidad de cada Secretaría de Educación contratar y vigilar su cumplimiento.

En Ecuador el órgano que tiene a su cargo el manejo del Programa de Alimentación Escolar, es el Ministerio de Educación y en promedio, para el año 2017, tuvieron 3'600.402 beneficiarios en dicho programa y para el 2016, 2.986.373 beneficiarios (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016) y el total de Estudiantes matriculados en el Sistema Nacional de Educación para ese año fue de 3.784.545, por tanto, se obtuvo una cobertura del 63,71% para el 2016 y 67,40% para el 2017, concluyendo que la cobertura no fue total.

Y en Bolivia, existe el Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar, siendo un servicio que beneficia a las y los estudiantes de manera muy heterogénea, en diversos aspectos como mejorar la cobertura, estimular la permanencia, evitar la deserción y mejorar el rendimiento académico. Respecto a un indicador de cobertura para los años 2016 y 2017, no fue posible encontrar los datos respectivos, por cuanto la implementación del nuevo plan comenzó en el 2016 y aún no se han consolidado resultados. Concluyendo que al respecto, fue mayor la cobertura en el programa de alimentación escolar en Ecuador que en Colombia, aclarando claro ésta, para el año 2016.

Respecto al transporte escolar, se tiene que en Colombia, dentro de los proyectos de cobertura educativa, se implementó la medida que por medio de las Secretarías de Educación Municipales o Departamentales, se realicen las contrataciones del transporte escolar. En Bolivia, el 20 de diciembre del 2010, se promulgó la Ley N° 070 de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, que en su artículo 80 (Nivel Autonómico), numeral 3 Autonomías Indígena Originaria Campesinas. Inciso e) señala: Garantizar recursos económicos para la atención de alimentación complementaria y en los casos justificados del transporte escolar, dando cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado, que en su Artículo 82,I. preceptúa que “El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades

económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley”. Ahora bien, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el marco del desarrollo integral para vivir bien, se constituye en el marco estratégico del tercer periodo del gobierno de la Revolución Democrática Cultural de Bolivia y para los efectos de analizar la existencia de alguna política, plan o programa tendiente a implementar un sistema de transporte escolar, se verificó en su integridad y no se estipula como tal. Pero, para dentro del Plan 24/7 del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, tienen como meta para el 2020, la implementación de un Sistema de Transporte Escolar seguro, moderno, digno y respetuoso.

Igual que en Bolivia, en Ecuador tampoco se tiene una política, programa o plan destinado al transporte de los estudiantes. Se revisó como fuente bibliográfica el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-“Toda una Vida”, el cual, constituye el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) del actual gobierno, y no se contempla la posibilidad de implementar tal programa. Por tanto, en este aspecto, Colombia aventaja a Ecuador y Bolivia respecto a la implementación y puesta en marcha del programa de transporte escolar, donde pretende que el acceso y la permanencia en el servicio educativo sean para todos los habitantes del territorio nacional en condición de estudio.

Ahora bien, para la segunda relación planteada, es decir, estudiantes matriculados/población total, el cual se enmarca dentro del ámbito de cobertura educativa, se establece que Colombia solo atiende el 20,33% de su población total en el servicio educativo de nivel primaria y secundaria; Ecuador, atiende el 32,13% y Bolivia, atiende el 33,96%. Por tanto, se concluye que Bolivia era el país que atendía en materia educativa, al mayor porcentaje en primaria y secundaria en relación con su población total y Colombia, el de menor porcentaje de atención.

Y para la tercera relación propuesta, es relevante el factor del total de habitantes de cada uno de los países analizados/cantidad de docentes para la vigencia 2017, por cuanto se evidencia que en Colombia había un maestro por cada 109.98 habitantes, en Ecuador, uno por cada 79,59

habitantes y en Bolivia, un maestro por cada 87,34 habitantes. De esto, se concluye que Ecuador era el país –que para ese año- ostentaba la mejor relación Población Total- Maestros, es decir, tenía mayor número de maestros con relación a la población total del país.

Para el año 2016, se realizó la siguiente medición, teniendo en cuenta que no se encontraron datos respecto a la cantidad de maestros/docentes que habían en Ecuador para la fecha, por tanto, se efectuó la relación estudiantes matriculados / población total, así:

2016	Población Total	Población Estudiantil Matriculada	Estudiantes Matriculados / Población Total
Colombia	48.748.000	10.047.618	20,61%
Ecuador	16.529.000	4.687.528	28,36%
Bolivia	10.887.882	2.526.501	23,20%

Cuadro No. 4. Elaboración propia. Fuente: Fuente: Bolivia MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (SIE). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA . A partir de 2011, se adopta la estructura definida en la Ley N° 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez (Primaria de 1° a 6° y Secundaria de 1° a 6°) Colombia DANE, Educación Formal (EDUC). https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_17.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/presentacion_EDUC_2017.pdf. Ecuador: Fuente: Registros administrativos, periodo escolar 2016-2017, docentes en unidades educativas escolarizadas, regulares por género. <https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/noticias/1122-ministerio-de-educacion-refleja-indicadores-positivos-en-equidad-de-genero>

Del cuadro anterior, se extracta que Colombia atiende el 20,61% de su población total en el servicio educativo en primaria y secundaria. Ecuador atiende el 28,36% y Bolivia el 23,20% de la población total. Por tanto, Ecuador era el país que para el 2016, atendía el mayor porcentaje (28,36%) de los estudiantes matriculados en primaria y secundaria en relación con la población total. Colombia es el de menor porcentaje de atención.

Otro aspecto relevante que se debe medir para determinar la eficacia en el cumplimiento de las políticas públicas en materia educativa, se relaciona con el porcentaje del gasto público total que los gobiernos dirigen al sector educativo (instituciones, administración educativa y subsidios o transferencias para entidades privadas) para su sostenimiento, mantenimiento y ejecución. Este

indicador entra a hacer parte de todas las características que enmarcan al derecho, es decir, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, por cuanto, del porcentaje del producto interno bruto que le sea suministrado por parte del Estado, depende en cierta manera, su debida y correcta ejecución. Por tanto, a continuación se realizará un comparativo de los porcentajes que los Gobiernos de Ecuador, Bolivia y Colombia destinan de su actividad económica total, al sector educativo. Es importante mencionar que los datos correspondientes a los periodos 2016-2017 de Ecuador, no fueron encontrados en ninguna base de datos nacional o internacional (Ministerio de Finanzas, Banco Central de Ecuador, CEPALSTAT, SELA, etc).

% de Producto Interno Bruto en Educación	BOLIVIA	ECUADOR	COLOMBIA
Año 2012	-	4,2%	-
Año 2013	-	5%	-
Año 2014	7,3%	5,26%	4,7%
Año 2015	6,4%	5,0%	4,5%
Año 2016	6,44%		4,483%
Año 2017	7,6%		4,9%

Cuadro No. 5. Elaboración propia. Fuentes: <http://www.sela.org/es/estados-miembros>.
<http://interwp.cepal.org/cepalstat/PerfilesNacionales.html?idioma=spanish>

De acuerdo a la información antes detallada, se deduce que entre los tres países estudiados, el que realiza mayor inversión de su producto interno bruto en educación, es Bolivia. De acuerdo a un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Colombia es el país de Latinoamérica que menos invierte en educación. Bolivia, se encuentra en segundo lugar en la región, después de Cuba, en otorgar mayores recursos para la educación, determinando que la educación – además de la salud- son las prioridades de cumplimiento dentro de las políticas económicas estatales.¹⁴

¹⁴ www.eldeber.com.bo/economia/PGE-2018-asigna-68-para-salud-y-77-a-educacion-20171207-0042.html

Ahora bien, según informe de la OCDE, el gasto de Colombia en programas de educación técnica y vocacional corresponde al 0.34% del producto interno bruto, convirtiéndolo de acuerdo al análisis realizado por ese organismo internacional, en el mayor de la región (0.12%) y supera incluso al promedio de la OCDE (0.15%). Esto se explica en parte por el activo papel desempeñado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que ofrece a los estudiantes una enorme variedad de programas de educación técnica y vocacional. Sin embargo, a pesar de la importancia del SENA, la capacitación técnica y vocacional alternativa durante la educación secundaria no está altamente desarrollada, y pocos estudiantes de ese nivel están matriculados en programas de educación técnica y vocacional (7% frente a 14% en ALC y 26% en la OCDE).¹⁵

Siguiendo con el ejercicio de evaluación de las políticas públicas, es turno de analizar si los programas que los gobiernos han formulado, implementado y ejecutado en Ecuador, Bolivia y Colombia, enfocados en la infancia, niñez, adolescencia, que fueron descritos en el aparte 2.2 del presente trabajo, han repercutido en el ingreso y permanencia dentro sistema educativo en cada nivel académico. Dicha información se extracta de la base de datos de la UNESCO.

	Tasa Neta de Matricula en Educación Primaria	Tasa Neta de Matricula en Educación Secundaria
Bolivia – 2015	88,4%	77,5%
Ecuador 2015	91,2%	85,4%
Colombia - 2015	90,6%	78,2%

Cuadro No. 6. Elaboración propia.

	Tasa Neta de Matricula en Educación Primaria	Tasa Neta de Matricula en Educación Secundaria
Bolivia – 2016	89,8%	78,0%
Ecuador 2016	91,9%	87,1%

¹⁵ https://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_SP.pdf

Colombia - 2016	91,20%	78,7%
------------------------	--------	-------

Cuadro No. 7. Elaboración propia.

	Tasa Neta de Matricula en Educación Primaria	Tasa Neta de Matricula en Educación Secundaria
Bolivia – 2017	91,8%	77,6%
Ecuador 2017	91,3%	88,2%
Colombia - 2017	91,26%	78,8%

Cuadro No. 8. Elaboración propia. Fuente: <http://data.uis.unesco.org/#>

Como análisis de la anterior medición, se deduce que la tasa de matrícula en educación primaria para los años 2015 y 2016 fue mayor en Ecuador, le sigue Colombia y en tercer lugar esta Bolivia. Respecto a la educación secundaria, la tasa de matrícula neta siguió la misma dinámica que en básica primaria, por cuanto fue mayor en Ecuador, Colombia en segundo lugar y Ecuador en tercero. Para el año 2017, Bolivia tuvo un incremento en la tasa neta de matrícula en primaria y entre los tres países analizados, fue el que mayor porcentaje obtuvo, siguiéndole Ecuador y por ultimo Colombia. Y para la educación secundaria, se continuo con la dinámica de los años 2015 y 2016, por cuanto Ecuador superó en tasa, siguiéndole Colombia y por ultimo Bolivia.

Otro indicador importante por analizar tiene que ver con la tasa de deserción escolar, toda vez que ha sido una constante en materia de política publica por los tres países, los cuales han abogado no solo porque se acceda al servicio educativo, sino porque se permanezca en él, brindando programas y subsidios tendientes a que se continúe hasta culminar los niveles educativos. Es importante resaltar que dicha información fue buscada en numerosas bases de datos para los años 2015, 2016 y 2017 y solo fue posible encontrar lo que a continuación se describe.

2015	Tasa de deserción en primaria	Tasa de deserción en secundaria
Bolivia	4.05%	9.15%
Ecuador	Sin datos	Sin datos
Colombia	10.01%	5.30%

Cuadro No. 9 Elaboración propia. Fuente: <http://data.uis.unesco.org/#>

2016	Tasa de deserción en básica primaria	Tasa de deserción en secundaria
Bolivia	5.31%	11.20%
Ecuador	9.27%	1.25% *
Colombia	8.32%	6.14%

Cuadro No. 10. Elaboración Propia. *información estimada. Fuente: <http://data.uis.unesco.org/#>

2017	Tasa de deserción en secundaria
Bolivia	13.06%
Ecuador	1.42% *
Colombia	5.71%

Cuadro No. 11. Elaboración Propia. *información estimada. Fuente: <http://data.uis.unesco.org/#>

De lo anterior, se deduce que para el año 2015 la tasa de deserción escolar en el nivel de primaria fue mayor en Colombia que en Bolivia; y para la secundaria, fue mayor en Bolivia que en Colombia. Respecto a Ecuador, no se encontró información, por tanto, no se incluyó dentro del análisis respectivo. Para el año 2016, la deserción escolar en primaria fue mayor en Ecuador, seguido de Colombia y por ultimo Bolivia; y para secundaria, fue mayor en Bolivia que en Colombia. El dato de Ecuador fue un estimado que la UNESCO proporcionó al no haber datos concretos. Y para el año 2017, solo se encontró información respecto del nivel secundario y claramente se denota que la deserción fue mayor en Bolivia que en Colombia, por cuanto la información respecto a Ecuador igual que lo anterior, fue un estimado de la UNESCO. Por tanto, en términos promedios, la deserción escolar para los tres países analizados se encuentra entre un 5 y 10%. En conclusión, los países deben adecuar y proceder a ejecutar programas con

currículos flexibles destinados a las personas con escolaridad inconclusa, logrando reducir los niveles de deserción, asegurar la permanencia del estudiante en el sistema educativo y, consecuentemente, la erradicación del analfabetismo.

Respecto a mediciones internacionales, en el 2006, 57 países participaron en el PISA- Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, una iniciativa de la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- que proporciona una medida del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias, entre estudiantes de 15 años de edad, para una muestra de las escuelas nacionalmente representativa, incluidos Colombia y otros cinco países de América Latina. La evaluación del PISA se centra en la capacidad de los jóvenes para aplicar su conocimiento y habilidades a problemas y situaciones de la vida real, antes de evaluar cuánto conocimiento de los programas de estudio poseen. La participación de Colombia en el PISA de 2006 fue la primera en su historia, reflejando el compromiso del país con el mejoramiento de la calidad de su sistema educativo. (Banco Mundial, 2009). En 2013, la OCDE inició las conversaciones sobre el acceso de Colombia al Convenio de la OCDE. Como parte del proceso, Colombia ha realizado evaluaciones en profundidad de todas las áreas relevantes del trabajo de la Organización incluyendo una revisión integral del sistema educativo, desde la primera infancia hasta la educación terciaria. La evaluación destaca las numerosas fortalezas del sistema educativo de Colombia y realiza recomendaciones sobre cómo abordar los retos a los que se enfrenta. En estos aspectos destacados se resumen las principales conclusiones de la evaluación: 1 ofrecer a todos los niños un buen comienzo en el sistema educativo; 1 mejorar los resultados del aprendizaje en todas las escuelas; 1 expandir y modernizar la educación media; 1 crear un sistema de educación terciaria más articulado.(OCDE, 2016). En el 2014, Ecuador ingresó al sistema de evaluaciones del PISA, cuyas pruebas piloto se realizaron en 2016 y por su parte, Bolivia se apartó de las evaluaciones internacionales sobre calidad educativa y en consecuencia no se hacen mediciones propias de indicadores y estándares de calidad, por tanto, no se puede evaluar la calidad de los programas de enseñanza.

En América Latina y el Caribe, la cobertura y el acceso a la educación han alcanzado un progreso considerable y reconocido internacionalmente. Sin embargo, esto no es suficiente para

cumplir con tal derecho. Para que exista, se deben considerar tres elementos: el acceso a una escuela, el derecho a aprender y escuelas inclusivas, capaces de atender la gran diversidad que caracteriza a los estudiantes, y de aportar a todos lo necesario para un logro educativo adecuado. En este contexto, y con el propósito de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, la UNESCO trabaja coordinadamente con los países de la región. Entre diversas iniciativas regionales, las Naciones Unidas acogió al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), como una red de unidades nacionales de evaluación educativa de América Latina y el Caribe. En una primera instancia, en 1997, se convocaron exitosamente la participación de 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. A finales del 2002, los países que conforman el LLECE decidieron desarrollar el segundo estudio regional, SERCE, para capitalizar lo hecho y aprendido con el PERCE (del 98) y dar pasos relevantes, ampliando la cobertura del estudio a más países, grados y áreas, su aplicación se realizó en 2006 y en esa ocasión participaron 16 países y, por primera vez, una entidad subnacional. Los participantes fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y el estado mexicano de Nuevo León. Posteriormente, en los años 2014 y 2015, se efectúa la primera entrega de resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) del LLECE, aplicado en 2013, el cual, estaba enfocado en los resultados de las pruebas del TERCE comparados con los resultados de las pruebas del Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE), en donde participaron los siguientes países: Argentina - Brasil - Chile - Colombia - Costa Rica - Ecuador - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - República Dominicana - Uruguay - Nuevo León.

Por consiguiente, las evaluaciones del LLECE de la UNESCO y las pruebas PISA de la OCDE, son elementos evaluativos de enorme utilidad para guiar las decisiones nacionales de política educativa así como para orientar las reformas pedagógicas, institucionales y mejora de la calidad educativa. Con la participación de Colombia y Ecuador en ambas, se denota el interés de los gobiernos por mejorar su sistema educativo, la calidad del mismo, para así, lograr que mas y más habitantes de los territorios que los conforman, accedan, permanezcan y culminen

satisfactoriamente todos los niveles de aprendizaje y así, erradicar el analfabetismo que aun es constante y mejorar las futuras condiciones de vida. Bolivia no hace parte de tales evaluaciones y no es dable excusarse en que el porcentaje de personas analfabetas es 0, o que se cumplió con tal objetivo del Milenio. La medición constante es un factor relevante para determinar la calidad del mismo y debieran de aplicarse tales evaluaciones en ese país, donde la tasa de deserción en educación secundaria fue tan alta para los años 2015 (9.15%), 2016 (11.20%) y 2017 (13.06%).

Respecto al Objetivo del Desarrollo del Milenio No. 2, lograr la enseñanza primaria universal, cuya meta se circunscribe en “Asegurar que todos los niños y las niñas terminen un curso completo de enseñanza primaria.”, para determinar el porcentaje de avance o su total cumplimiento en los países de estudio, se procedió a determinar ciertos indicadores basados en la bibliografía existente sobre los objetivos del Milenio, el porcentaje de avance para la época de la evaluación, la meta propuesta cumplir al 2015 y su correspondiente porcentaje de avance o total cumplimiento. Esto con el fin de establecer si Ecuador, Bolivia o Colombia cumplieron con la meta propuesta o si por el contrario, quedaron desafíos pendientes que pasarían a cumplirse en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 “Educación de Calidad”, cuyo objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030.

Objetivo No. 2 “Lograr la enseñanza primaria universal”	Tasa neta de matrícula ajustada en la Enseñanza primaria (%)	Proporción de la población de 15 a 19 años con Educación primaria completa (%)	Proporción de la población de 20 a 24 años con educación secundaria completa (%)	Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres (%)
Colombia	110.20% (2013)	95.2 (2013)	69.0 (2013) Meta: 93%	98.7% Meta: 100%
Ecuador	98.8 % (2013)	97.1 (2013)	64.9 (2013)	99,1 (2014) Meta: 100%
Bolivia	97.3% Meta: 100%	94.1 (2011)	66.9	99,4

	Meta: 100%	(2011)	(2014)
--	---	--	--	--

Cuadro No. 12. Elaboración propia. Fuente: <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/perfilesNacionales.html?idioma=spanish>. Informe de Seguimiento de los Objetivos de desarrollo del Milenio. Departamento Nacional de Planeación 2013, Colombia 2014. Objetivos del Desarrollo del Milenio. Informe 2015. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Septiembre de 2015. Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, Octavo Informe de progreso 2015. Ministerio de Planificación del Desarrollo, Estado Plurinacional de Bolivia, Diciembre de 2015. Objetivos del Milenio, Balance Ecuador 2014, SENPLADES, Primera Edición, Quito, Ecuador, 2015.

La lectura que se le puede dar al anterior objetivo es la siguiente: Colombia y Ecuador alcanzaron años antes la meta fijada para el 2015 respecto de lograr la educación primaria universal (2013), Bolivia, a la fecha de la evaluación por parte de la CEPAL, se encontraba en camino a conseguirla. Respecto a la tasa de alfabetización, Bolivia un año antes de llegarse el plazo fijado para los ODM, cumplió con la meta fijada, alcanzando el porcentaje requerido.

Respecto a la tasa de analfabetización, se realizaron los siguientes cuadros comparativos, de los cuales se extractaran las conclusiones a que den lugar, así:

Número de personas analfabetas en la población de 15 a 24 años	2015	2016	2017
BOLIVIA	541.404	-	-
ECUADOR	632.533	632.533	Sin Datos
COLOMBIA	2.101.737	1.980.102	1.959.000

Cuadro No. 13 Elaboración propia. Fuente: <http://data.uis.unesco.org/#>

Número de personas analfabetas en la población de más de 65 años	2015	2016
BOLIVIA	226 156	-
ECUADOR	241 825	254 870
COLOMBIA	669 881	669 881

Cuadro No. 14. Elaboración propia. Fuente: <http://data.uis.unesco.org/#>

Respecto al indicador de Analfabetismo y de acuerdo a los datos mencionados en los cuadros anteriores, se deduce que Bolivia, desde el año 2016, no tiene personas analfabetas en su sociedad (personas entre los rangos de 15 a 24 años y mayores de 65 años), es decir que la política pública tendiente a erradicar el analfabetismo, fue exitosamente ejecutada, no siendo el caso para Ecuador y Colombia, por cuanto en las mediciones realizadas, claramente se evidencia que prosigue la tasa de analfabetismo y debe continuarse con la ejecución correcta y debida de la política pública tendiente a erradicarla. Es claro mencionar que sin voluntad política, es decir, sin inversión económica, social, cultural y administrativa, es imposible que se logre cumplir con el objetivo propuesto. Por tanto, se convierte en responsabilidad exclusiva y perentoria de los estados, impulsar la ejecución de programas dirigidos especialmente a las poblaciones más vulnerables que necesitan su presencia, no temporal sino definitiva.

Es el turno de analizar los cuatro elementos mínimos esenciales instaurados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que debe comprender toda política pública en materia de salud:

1. Disponibilidad: Los Estados deben contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud y de centros de salud. Los tres países estudiados, al respecto, han procurado por garantizar la prestación de los servicios de salud elementales y necesarios, a todos los habitantes de los territorios. Pero al tener en cuenta los factores que hacen parte de la prestación del servicio, es decir, que los establecimientos de salud cuenten con servicio de agua potable, condiciones sanitarias adecuadas, que existan centros de atención en salud de acuerdo a las necesidades poblacionales, que estos cuenten con personal adecuado e idóneo y se suministren los medicamentos apropiados, se encuentran falencias, por ejemplo en el caso de Colombia, por cuanto en muchas ocasiones los ciudadanos deben interponer el mecanismo de protección constitucional – Acción de tutela- tendiente a que se le suministren los medicamentos necesarios para sus patologías, toda vez que los prestadores de los servicios (Entidades o Instituciones Prestadoras de Salud-EPS-IPS), se niegan a entregarlos por los costos de los mismos, porque no se encuentran dentro de lo que cubre el Plan Obligatorio de Salud.
2. Accesibilidad: Este elemento consiste en asegurar que los establecimientos, servicios y programas médicos, así como las instalaciones y servicios de agua potable y saneamiento básico, estén al

alcance de todos, sin discriminación alguna. En este aspecto, se supone la satisfacción de cuatro dimensiones, como son:

- 2.1 No discriminación: Acceso a todos los sectores de la población. En este aspecto, todos los estados contemplan dentro de sus garantías constitucionales, el derecho a la igualdad, el cual se aplica en todas las esferas de las administraciones. Las políticas públicas en materia de salud cobijan a todas las personas que habitan el territorio de los Estados, sin discriminación de raza, sexo, origen étnico.
- 2.2 Accesibilidad física: Se tienen en cuenta dos aspectos. Primero que los establecimientos se encuentren al alcance geográfico y físico de la población y segundo, que cuenten con medios para que las personas con algún tipo de discapacidad física puedan acceder. Los gobiernos deben propender por que se preste el servicio de salud en todos los rincones del territorio que comprende.
- 2.3 Accesibilidad económica: El costo de los servicios de salud debe ser acorde con los ingresos de los hogares. En este aspecto, no se realizó un estudio, por cuanto, lo que se pretende analizar es más la disponibilidad de la prestación del servicio de salud, como obligación constitucional que está a cargo del Estado.
- 2.4 Acceso a la información: Este comprende los derechos de solicitar, recibir y difundir información e ideas relacionadas con la salud y sus factores básicos determinantes. Tampoco se adentró en el estudio de este.
3. Aceptabilidad: Los establecimientos, bienes y servicios en salud deben respetar las normas que prescribe la ética médica y deben ser respetuosos de las diferencias culturales. En la prestación del servicio se deben tener en cuenta las necesidades relativas al género de quien solicita la atención, sus condiciones físicas que determinan su ciclo vital, basándose en el respeto a su derecho a la intimidad siempre. Este aspecto es más subjetivo, por cuanto, se circunscribe en el aspecto interno y moral de quien presta el servicio, el cual debe ser garantizando la efectividad del derecho a la salud, sin menoscabo de situaciones sociales o culturales.
4. Calidad: Conjunto de condiciones que permiten a las personas y a las comunidades, disponer y acceder a servicios asistenciales, es decir, los establecimientos públicos que prestan los servicios de salud, deben contar con las condiciones apropiadas desde el punto de vista científico y médico. En Ecuador, por ejemplo, se cuenta con una política pública tendiente a que los profesionales de la rama de la medicina, regresen al país y se integren al personal médico de los establecimientos públicos, con una regulación salarial acorde a sus especialidades y capacidades. (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 27).

Como bien se relacionó en el aparte 2.2 Políticas públicas implementadas para garantizar los derechos a la educación y a la salud en Ecuador, Bolivia y Colombia, los planes, programas, proyectos o políticas que los diferentes países han formulado, implementado y ejecutado tendientes a cumplir con el mandato constitucional de los dos derechos estudiados, ahora es turno de determinar la eficacia de tales políticas en materia de salud, es decir, estableciendo ciertos indicadores comunes a los países de análisis, los cuales se concatenan con los Objetivos del Desarrollo del Milenio No. 4 y 5, toda vez que las políticas que han implementado los países tienden a erradicar la mortalidad tanto de la niñez, como la infantil y materna, entre otras. Y se entrará en las líneas que prosiguen, a evaluar si han sido efectivas las medidas adoptadas y los retos que aún siguen pendientes de cumplir.

Como primer indicador, se evaluará lo relacionado con lo preceptuado por el objetivo No. 4 del desarrollo del Milenio, denominado “reducir la mortalidad infantil”. Todos los países han pretendido erradicar con ese marcador tan alto de mortandad de la niñez y la infantil, implementando subsidios económicos para las familias que lleven a los niños de su núcleo a controles médicos periódicos, que los registren tanto en el sistema de salud como en el educativo, donde puede el Estado “tratar” de intervenir en caso de mal estado nutricional, subsidios para la aplicación de vacunas necesarias para el pleno desarrollo de la niñez, evitando enfermedades comunes, entre otras. En el aparte 2.2, se describieron las políticas que en materia de salud han implementado los países de Ecuador, Bolivia y Colombia, inclinadas a proteger a todos los miembros de la familia, como eje articulador de las sociedades y para determinar si han sido eficaces o no, se entrarán a comparar para este primer objetivo los siguientes indicadores:

Objetivo No. 4	Tasa de	Tasa de	Cobertura de	Cobertura de
“Reducir la mortalidad infantil”	mortalidad en menores de 5 años (niñez) (x 1000 nacidos vivos)	mortalidad en menores de 1 año (infantil) (x 1000 nacidos vivos)	vacunación en DPT en menores de 1 año	vacunación en triple viral en menores de 1 año

Bolivia	56,0 (2013) Meta: 43,1	44,0 (2013) Meta: 27,3	86,0 (2014) 81,0 (2013) Meta: 95,0	Sin medición
Ecuador	14,2 (2013) Meta: 14,4	8,4 (2014) 8,6 (2013)	86 (2014) 96,4 (2013)	Sin medición
Colombia	19,3 (2013) 19,75 (2012) Meta: 17,73	17,25 (2013) 17,47 (2012) Meta: 17,46	90,3 (2014) 91,0 (2013) Meta: 95%	91,2 (2014) 82,4 (2013) Meta: 95%

Cuadro No. 15. Elaboración propia. Fuente: <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/perfilesNacionales.html?idioma=spanish>. Informe de Seguimiento de los Objetivos de desarrollo del Milenio. Departamento Nacional de Planeación 2013, Colombia 2014. Objetivos del Desarrollo del Milenio. Informe 2015. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Septiembre de 2015. Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, Octavo Informe de progreso 2015. Ministerio de Planificación del Desarrollo, Estado Plurinacional de Bolivia, Diciembre de 2015. Objetivos del Milenio, Balance Ecuador 2014, SENPLADES, Primera Edición, Quito, Ecuador, 2015.

Del cuadro anterior, se puede realizar la siguiente lectura: Ecuador, en el año 2011 se ubicó dentro de los cinco países latinoamericanos con menor mortalidad de la niñez, superado solo por Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay, es decir, que ese indicador refleja que la política pública en materia de reducción de la mortalidad en menores de 5 años (niñez), ha sido exitosa, por cuanto, se alcanzó la meta planteada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que era para el 2015, en el 2013. Diferente situación ocurrió con Colombia y Bolivia, por cuanto no se pudo reducir la tasa de mortandad para cumplir el objetivo del Milenio, sin que ello signifique que no se ha avanzado en la materia, sino que los gobiernos deben redireccionar sus planes y programas para que sea 100% efectiva.

Referente a la tasa de mortalidad en menores de 1 año, es decir, mortalidad infantil, se extracta que Colombia logró alcanzar la meta propuesta respecto a este indicador específico del objetivo de desarrollo del milenio No. 4, diferente situación ocurrió con Ecuador y Bolivia, por cuanto aun les queda brecha pendiente de cumplir. Al respecto se debe hacer la siguiente claridad. Colombia redujo sus niveles de mortalidad infantil, es cierto, pero el problema

continúa, es decir, debe existir una clara correspondencia entre la voluntad gubernamental y quienes ejecutan el gasto público, para que las políticas públicas formuladas e implementadas sean efectivas. En 2015 la mortalidad infantil de la zona rural fue 1,5 veces más alta que la tasa de la zona urbana y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres de estratos más bajos sin ningún tipo de educación. Por tanto, aún quedan tareas pendientes para Colombia a pesar de haber alcanzado la meta del objetivo de desarrollo del milenio y lograr que a 2030, se cumpla con el objetivo de desarrollo sostenible a cabalidad.

Y respecto a la cobertura de vacunación en la población infantil, se denotan avances, pero no suficientes para proteger al 100% de los menores de 1 año, por tanto, sigue como tarea pendiente de los estados para que desde el 2015 que se establecieron los objetivos de desarrollo sostenible, se materialicen todas las metas pactadas, como por ejemplo la que le corresponde a este indicador que hace parte del objetivo No. 3 “Salud y Bienestar” y establece que: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”. En tanto, continúa como tarea pendiente de los 3 países la ampliación de su cobertura, lo cual debe materializarse a través de una adecuada y efectiva política pública de sanidad y prevención.

El otro indicador que se analizará, tiene que ver con la mortalidad materna. Éste término estadístico consiste en la muerte de una mujer durante el periodo de gestación o embarazo, el parto y el posparto (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo), siempre y cuando no sea por causas accidentales. Este problema principalmente refleja problemas estructurales, tanto de acceso al control de natalidad como de atención a la salud en los países donde se presenta. Se escogió este indicador, por cuanto hace parte de la meta propuesta por el objetivo No. 5 del desarrollo del milenio tendiente a “Mejorar la salud materna” y claramente, para que se cumpla con el objetivo, los países debían adoptar políticas públicas directamente relacionadas con proteger a las mujeres durante la gestación y posterior a ella, lo cual, denotará en la siguiente medición, el grado de eficacia o cumplimiento en los tres países analizados (Ecuador, Bolivia y Colombia).

Objetivo No. 5 “Mejorar la salud materna”	Razón de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)	Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)	Cobertura de atención prenatal	
			(al menos 1 consulta)	(al menos 4 consultas)
Bolivia	229 (2013) Meta:104	72,5 (2013) Meta: 70	90.1 (2012)	75.3 (2012)
Ecuador	49,2 (2014) Meta: 38,5	96,3 (2014) 93,3 (2013)	Sin medición	Sin medición
Colombia	55,2 (2013) 65,89 (2012) Meta: 45	99,5 (2013) 98,76 (2012) Meta: 95%	Sin medición	86,2 (2013) 84,79 (2012) Meta:90%

Cuadro No. 16. Elaboración propia. Fuente: <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/perfilesNacionales.html?idioma=spanish>. Informe de Seguimiento de los Objetivos de desarrollo del Milenio. Departamento Nacional de Planeación 2013, Colombia 2014. Objetivos del Desarrollo del Milenio. Informe 2015. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Septiembre de 2015. Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, Octavo Informe de progreso 2015. Ministerio de Planificación del Desarrollo, Estado Plurinacional de Bolivia, Diciembre de 2015. Objetivos del Milenio, Balance Ecuador 2014, SENPLADES, Primera Edición, Quito, Ecuador, 2015.

Los indicadores anteriormente relacionados reflejan los avances en las atenciones a los partos en instituciones hospitalarias con personal adecuado, por cuanto Bolivia y Colombia cumplieron la meta propuesta en los Objetivos del Desarrollo del Milenio en 2013 y 2012 respectivamente. Ecuador, aún tiene la tarea pendiente de cumplir. Respecto de la tasa de mortalidad materna, los tres países no cumplieron con el objetivo propuesto, pero al revisar los datos, se aproximaba más Colombia a cumplir que Ecuador y Bolivia, teniendo estos dos unos compromisos bastante difíciles, por cuanto, las tasas están alejadas de las metas, denotando claramente que la política pública en materia de salud materna, adolece de eficacia en dichos países.

Igual que se analizó respecto del derecho a la educación, es importante establecer el porcentaje de gasto público que cada uno de los países tratado en este trabajo, destinan para el cumplimiento del postulado constitucional de la salud. Los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud –OPS-, en el año 2014, acordaron elevar el gasto público en salud en hasta un seis (6) por ciento del producto interno bruto –PIB-. Según información de la CEPAL, se extrae lo siguiente:

Ecuador: gasto en salud del gobierno central, 2000-2015(En porcentajes del PIB)

Grafico No. 3 Fuente: <https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/ecuador>

Bolivia: gasto en salud del sector público, 2000-2015(En porcentajes del PIB)

Grafico No. 4 Fuente: <https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/bolivia>

Colombia: gasto en salud del sector público, 2000-2015(En porcentajes del PIB)

Grafico No. 5. Fuente: <https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/colombia>

De lo anterior se concluye y estando en concordancia con lo preceptuado por la OPS, que los países de análisis en el presente trabajo de investigación, alcanzaran la meta propuesta de llegar al 6% del PIB en gasto público en materia de salud, aproximadamente así: Colombia en el 2024, Ecuador en el 2026 y Bolivia en el 2027.(Pedraza, 2018)

En ese orden de ideas, habiendo determinado ciertos indicadores para el cumplimiento de los derechos a la educación y a la salud en Ecuador, Bolivia y Colombia, concatenándolos con el porcentaje de acatamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 2015, se procede a analizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vigentes a partir de 2016, relacionados con los mismos indicadores anteriormente propuestos.

El siguiente gráfico brinda un panorama sobre lo que hasta el momento se ha evaluado respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, puestos en marcha en enero de 2016 y

firmados por los países latinoamericanos que se relacionan a continuación:

Figura 8. Indicadores de ODS en Latinoamérica

Nota: Color verde significa “logro” en el ODS, y se asigna a un país sólo si todos los indicadores bajo el objetivo son clasificados como verdes. Amarillo, naranja y rojo muestran menos avance en los objetivos, siendo rojo el más bajo. Para obtener más información sobre la metodología, consulte Sachs et al. (2017, parte 2). Los metadatos completos de los indicadores utilizados están disponibles en www.sdgindex.org.

Fuente: Sachs et al. 2017, anexo de perfiles de país

Gráfico No. 6.

El cuadro anterior es producto del Informe del índice y paneles Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017 Responsabilidades globales- Efectos indirectos internacionales en el logro de los objetivos producido por Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network en Julio de 2017. Dicho estudio fue en asocio con personal de las Naciones Unidas y determinó el grado de avance en el cumplimiento de los Objetivos en los 193 países que firmaron el compromiso y que para el caso latinoamericano, elaboraron un consolidado de los diecisiete (17) objetivos con su correspondiente avance. Tal como se visibilizó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, antesala de los Objetivos que se tratan en este estadio de la investigación, los tres países que se están analizando se encuentran en camino a desarrollar todas las metas propuestas tendientes a cumplir – a 2030- con los objetivos a cabalidad, lo cual como bien se establece,

generaran un grado de sostenibilidad para los países y mas para los latinoamericanos que se encuentran en via de desarrollo.

Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”	Tasa neta de matrícula por nivel de enseñanza, según sexo			Años esperados de escolaridad (años)	Tasa de alfabetización de 15-24 años, ambos sexos (%)
Bolivia	Preprimaria	2016 73,9	2017 --	8.2	Sin datos
	Primaria	2016 89,8	2017 --		
	Secundaria	2016 78,0	2017 --		
Colombia	Preprimaria	2016 --	2017 --	7.6	98.7
	Primaria	2016 91,2	2017 --		
	Secundaria	2016 78,7	2017 --		
Ecuador	Preprimaria	2016 68,0	2017 67,1	8.3	98.8
	Primaria	2016 91,9	2017 91,3		
	Secundaria	2016 87,2	2017 88,2		

Cuadro No. 17. Elaboración propia. Fuente:

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/EstadisticasIndicadores.asp?idioma=e

Para el cuadro anterior, sobre el ODS No. 4, se realiza la siguiente lectura: Respecto a la tasa de matrícula (Primer indicador), en el nivel de preprimaria, Bolivia tiene mayor grado de porcentaje que Ecuador, Colombia no se tiene en cuenta por cuanto no hay datos disponibles. En el nivel de primaria, Ecuador ocupa el mayor porcentaje de matrícula, seguido por Colombia y en último lugar Bolivia. Para el año 2017, solo se tienen datos de Ecuador, Bolivia y Colombia

no reportaron datos a la CEPALSTAT. Y para el nivel de secundaria, se sigue la misma línea anterior, es decir, puntea Ecuador con mayor tasa de matrícula, sigue Colombia y por ultimo Bolivia. Para el año 2017, solo se tienen datos de Ecuador, Bolivia y Colombia no reportaron datos a la CEPALSTAT.

Seguidamente, para el segundo indicador, años esperados de escolaridad, es mayor el número de años escolarizados en Ecuador que en Bolivia y Colombia. Y para la tasa de alfabetización de 15 a 24 años, es decir, el tercer indicador propuesto, ocupa el primer lugar Ecuador y le sigue Colombia, aunque la diferencia es solamente un 0.1%. De Bolivia no se obtuvieron datos al respecto.

Por tanto, se concluye que respecto al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4, relacionado con la Educación, de los tres países analizados, Ecuador es el que mayor grado de avance tiene, seguido por Colombia y en tercer lugar Bolivia. Es importante aclarar que solo es un avance, los Objetivos entraron en vigencia a partir de enero de 2017 y esta medición se realizó con datos de 2016 (pocos) y los que alcanzaron a registrar del año del informe, sin decir que no sea viable la medición.

Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” Rendimiento por indicador Rango	Tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos)	Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud calificado	Porcentaje de niños sobrevivientes que recibieron 2 recomendaciones de la OMS vacunas (%)	Índice de seguimiento de cobertura de salud universal (0-100)	Bienestar subjetivo (puntaje promedio en la escalera, 0-10)
Bolivia	206	19.6	38.4	84.8	99	64.8	5.8
Colombia	64	8.5	15.9	99.1	91	75.1	6.2
Ecuador	64	10.8	21.6	93.7	78	84.5	6.1

Cuadro No. 18. Elaboración propia. Fuente: <http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf>

Respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 3, relacionado directamente con la Salud, su calidad, cobertura, etc, se extracta lo siguiente de la información recopilada en el cuadro anterior: la tasa de mortalidad materna en Ecuador y Colombia se registró igual, es decir, con el mismo valor numérico; Bolivia supera a éstos países en más de un 200%, es decir, que la brecha que existía cuando se realizó la medición de los Objetivos del Milenio, aun continua para ese país; se denota igualmente que en Ecuador hubo avances en el cumplimiento por cuanto bajo la tasa ostensiblemente, tanto que se asemeja a la de Colombia que fue mediana. La tasa de mortalidad neonatal fue mayor en Bolivia, seguida por Ecuador y luego Colombia. La tasa de mortalidad en menores de 5 años, siguió la misma dirección de la anterior medición, es decir, Bolivia primero, Ecuador segundo y Colombia tercero. La Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud calificado fue mayor en Colombia, seguida por Ecuador y después Bolivia. El Porcentaje de niños a los que se le aplicaron vacunas como recomendación de la Organización Mundial de la Salud fue mayor en Bolivia, seguido por Colombia y en tercer lugar Ecuador; para esta medición no se guarda estrecha relación con la evaluación realizada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por cuanto Colombia ocupaba el primer lugar de los tres países y ahora baja a segundo lugar, ocupando el primero Bolivia y tercero Ecuador.

Estos indicadores (Índice de seguimiento a la cobertura de salud universal y Bienestar Subjetivo) son innovaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y revisten de cierta importancia porque miden el grado de cobertura de la salud, así como la percepción de los ciudadanos como beneficiarios del servicio de salud en cada país donde se realiza la medición. Ecuador ocupa el primer lugar, seguido de Colombia y por último, Bolivia para el primero y para el segundo indicador, en primer lugar esta Colombia, seguido de Ecuador y tercero Bolivia.

3.3 Articulación de la política pública y los desarrollos jurisprudenciales

Los diferentes órganos de cierre en las jurisdicciones constitucionales de los países analizados en el presente trabajo, han proferido múltiples decisiones respecto a la protección de

los derechos fundamentales, en especial, al derecho a la salud y a la educación, por cuanto, no basta sólo con las políticas públicas que se han instaurado y ejecutado por parte de los gobiernos de turno, sino que a través de los mecanismos judiciales contemplados por las diferentes Constituciones para la protección de los derechos fundamentales, sientan posiciones para el debido ejercicio por parte de los órganos competentes para brindarle a la sociedad, óptimas condiciones de garantía de sus derechos, por lo tanto, en el presente aparte se sentarán posiciones tomadas por la Corte Constitucional de Colombia, por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y la Corte Constitucional de Ecuador. En Bolivia,

...el derecho a la salud ha sido entendido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 26/2003-R, de 8 de enero, como: *“aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida”*. [cursivas y comillas en texto fuente] (Vargas, 2017)

En ese orden de ideas, se entiende que el derecho a la salud como se estableció en el capítulo anterior, en Bolivia tiene el rango de derecho fundamental, ostenta una protección no solo legal sino jurisprudencial por parte del órgano de cierre constitucional, no sólo para el individuo sino para su entorno familiar. En igual sentido,

...la Sentencia Constitucional Plurinacional N°0486/2012, de 4 de julio, analizando el derecho a la salud y su especial protección en la Constitución Política del Estado, reflejada en sus artículos 35.I, 36.II, y 39, concluyó señalando que:

Del marco constitucional desglosado, inferimos que en nuestro ordenamiento jurídico, la salud es un derecho fundamental que amerita su resguardo prioritario cuando se encuentra en conexidad con el primigenio derecho a la vida, especialmente en los casos de personas vulnerables de la población, como son los niños, las personas con discapacidad, de tercera edad y los enfermos terminales; de ahí que el Estado se constituye en el mayor garante y contralor de este derecho; en cuya virtud los titulares de este derecho pueden exigir a los órganos del Estado

que establezcan condiciones óptimas para su ejercicio, por cuanto el derecho a la salud no implica simplemente adoptar medidas o políticas preventivas contra una enfermedad, sino el derecho a la existencia con calidad de vida. En este entendido cuando una entidad pública o particular tiene a su cargo la prestación de este servicio se encuentra obligada a ejercer con responsabilidad la práctica médica, cumpliendo a tal efecto con toda la normativa reglamentaria emitida por la autoridad de salud, pues con su inobservancia se coloca en peligro otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana y esencialmente la integridad física; por esta razón el Estado esta impelido a adoptar mecanismos que controlen y sancionen la mala praxis médica. [cursivas en texto fuente] (Vargas, 2017)

Este pronunciamiento confirma lo que en el párrafo anterior se concluyó respecto a ese derecho. Además corrobora la obligatoriedad que tiene el Estado de proteger dicho derecho al ser conexo con el derecho a la vida, pues no sólo debe respetarse la vida como derecho fundamental de la persona, sino brindar las condiciones adecuadas para una correcta calidad de vida. Para entrar a analizar la protección judicial del derecho a la salud en Ecuador, se estudió diversa doctrina donde identifican que al establecerse la salud como uno de los derechos primordiales que garantiza la Constitución de 2008, es deber del Estado al pretender salvaguardar como prioridad el respeto de la dignidad del ser humano como principal característica de un estado proclamado como constitucional de derechos, garantizar ese derecho fundamental a través del establecimiento de diversas políticas en materia económica, social, cultural y demás, que certifiquen el acceso de carácter permanente y constante al cumplimiento del derecho.

En tal virtud, el órgano de cierre en materia constitucional de la República de Ecuador, en la sentencia 0012-09-SIS-CC identificó el derecho a la salud con un carácter de justiciabilidad relevante, al ser establecido como un derecho de estirpe constitucional y primordialmente ostentar la característica de ser fundamental. A su turno,

La corte constitucional colombiana a través de sus sentencias de tutela ha desarrollado la dinámica del cumplimiento de la obligación del Estado frente a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) orientando, en cada categoría de sujeto en particular, según las necesidades que presentan, la forma en que deben ser atendidos, valorados y

efectivamente protegidos ante la vulneración de su Derecho a la Salud por parte de los actores que dirigen el sistema. (Díaz y Arrieta, 2012, p. 5)

Para dar cabal cumplimiento a la obligatoriedad que le acarrea al Estado respecto a tal derecho,

Jurisprudencialmente en Colombia desde 1992 se venía protegiendo a la Salud por tres vías:

La primera, estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana; la segunda, reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección (en el caso de los niños); la tercera, afirmando la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, abarcando los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con la sentencia T-760/08... (Díaz y Arrieta, 2012, p. 5)

Se dirimió la controversia que suscitaba la justiciabilidad del derecho a la salud por considerarse que no pertenecía al capítulo de derechos fundamentales, al reconocerle como un derecho fundamental autónomo.

El derecho a la salud, analizado en clave del Estado Social, es un verdadero derecho fundamental por ser universal, irrenunciable, inherente a la persona humana, integral e integrador, esencial para la materialización de una vida digna y con calidad, y vital para la eficacia real del principio de igualdad material. Comporta libertades y derechos. (Gañán, 2012, p. 11)

En virtud de lo anterior, se extracta de la consagración constitucional que

El derecho a la salud se encuentra conectado directamente con los principios establecidos en la carta política así: por ser Colombia un Estado Social de Derecho [(como se determinó en el párrafo anterior)]; por contribuir a la materialización de la dignidad humana; por ser un derecho inalienable que, en consecuencia, goza de primacía, sin discriminación alguna; por ser la Constitución norma de normas y ser el derecho a la salud una disposición constitucional. (Gañán, 2012, p. 16)

La jurisprudencia respecto a tal derecho, ha tratado en diversos pronunciamientos aspectos relevantes tales como:

T-307 2006	de	se establece el argumento del derecho a la salud como fundamental en sí mismo " <i>...cuya efectiva realización depende, como suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto</i> ", sin que por ello, deje de ser un derecho fundamental
T-016 2007	de	"todos los derechos constitucionales son fundamentales, la fundamentalidad de los derechos no depende —ni puede depender— de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica, la salud es un derecho fundamental cuyo contenido es acentuadamente prestacional"
C-811-2007		determinó que el derecho a la salud es un derecho que tiene categoría autónoma como fundamental, y que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos
C-463 2008	de	expresó que el carácter universal del derecho a la seguridad social en salud apareja como consecuencia su fundamentabilidad
T-760 2008	de	la sentencia vuelve a reconocer, sin ningún tipo de ficción jurídica, que el derecho a la salud es un derecho fundamental

Fuente: Elaboración propia, a partir de Gañán (2012).

Habiendo analizado algunas de las diferentes concepciones jurisprudenciales que conciben los órganos de cierre en materia constitucional respecto al derecho a la salud, se determina que la fundamentalidad con la que se ha consagrado tal derecho, obedece no sólo a la protección en conexidad con el derecho a la vida, sino, en que hace parte de los principios de los Estados, el garantizar una calidad de vida que responda a los postulados de la dignidad humana como fin esencial del Estado. De igual manera, al fundarse los Estados objeto de estudio en el presente trabajo, bajo la cláusula de Estado Social de Derecho para los casos de Bolivia y Colombia y Estado Constitucional de Derecho para Ecuador, como ya se estudió en capítulos anteriores, debe garantizarse el valor inherente que posee el ser humano por el sólo hecho de serlo, es decir, una dignidad humana que preserve las libertades individuales y se reconozca, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos que se consagran constitucionalmente, sin diferenciar su categoría para su debido y correcto cumplimiento.

La parte orgánica de las constituciones de Ecuador, Bolivia y Colombia, facultan a los diferentes órganos de los Estados para garantizar mediante la instauración de políticas públicas el adecuado cumplimiento de los derechos consagrados en la parte dogmática de las Cartas Políticas, para lo cual, se analizaron los diferentes programas que se han concretado desde la expedición y aprobación de dichos textos, evidenciándose así que existe voluntad estatal para responder por la observancia de los derechos fundamentales, para el caso particular, el derecho a la salud, pero al analizar la justiciabilidad del mismo, denota que faltan mecanismos de protección diferentes a tener que acudir a la jurisdicción para protegerlos. Las acciones de protección constitucional o la acción de tutela, se quedan cortas para salvaguardar los derechos fundamentales, por cuanto es obligatoriedad de los Estados implementar programas o políticas públicas cuyo único fin sea preservar los derechos, sin menoscabarse su acatamiento por el accionar o la omisión de quienes ejerzan funciones públicas o por las entidades encargadas de prestar adecuadamente los servicios.

Respecto al derecho a la educación, en Bolivia a través de la acción de amparo constitucional, se resguarda la protección de tal derecho por medio de las sentencias constitucionales plurinacionales, donde se analizan las decisiones tomadas por los diferentes órganos judiciales respecto a violaciones que se susciten a los derechos fundamentales. Para el objeto del presente trabajo, se analizaron las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia No 1414/2011-R¹⁶, 760/2013, 0677/2013¹⁷ y 0080/2012¹⁸, la sentencia No. 133-15-SEP-CC Caso No. 0273-12-EP¹⁹ de la Corte Constitucional del Ecuador, donde la pretensión de los accionantes era la protección del derecho a la educación entre otros, por encontrarse presuntamente vulnerados y al haber tomado decisión de primera instancia por parte

¹⁶ El accionante estima vulnerados sus derechos a la no discriminación y a recibir una educación, citando al efecto los arts. 14, 17 y 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).

¹⁷ La representante del accionante estima lesionados los derechos de éste al debido proceso, a la educación superior, a la igualdad jurídica, “seguridad jurídica” y a la no discriminación, citando al efecto los arts. 17, 78.I, 82.I, 91.II, 93.IV, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¹⁸ Ayda Choque Orellana, alega la lesión del derecho de su hija a la educación y la “garantía de la igualdad” citando al efecto el art. 17 de la Constitución Política del Estado (CPE).

¹⁹ El señor Julio César Hidalgo Chávez, representante legal del menor N.N. presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 26 de diciembre de 2011, dictada por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante la cual se acepta el recurso de apelación interpuesto por la ingeniera Maritza Pérez Galindo, se revoca la sentencia recurrida y en su lugar se desecha la acción de protección interpuesta por motivos de que al infante A.S.H.A se le negó la inscripción a un establecimiento educativo.

de los jueces de conocimiento. Por ser ostentar el rango el derecho a la educación de fundamental, procede la interposición de la acción de amparo constitucional, para defender los derechos y garantías constitucionales frente a los actos u omisiones ilegales de los servidores públicos o particulares. (Sentencia 0080/2012). De lo anterior se puede extractar que no sólo mediante las políticas públicas implementadas por el Estado se protege el derecho a la educación, sino que en ocasiones es imperioso acudir ante los órganos judiciales para defender y salvaguardar tal derecho que es vulnerado.

Para el caso de la República de Colombia, existe variada jurisprudencia respecto a la protección del derecho a la educación, donde se analizan aspectos como las peculiaridades que ostenta tal derecho, como las características de la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, jurisprudencialmente se concibe al derecho a la educación ha sido catalogado como fundamental, inherente a la persona, propio de la esencia del hombre y de su dignidad humana, amparado por la Carta Política ²⁰ y por los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 67 del texto constitucional concretamente ha señalado que la educación es “...un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.”²¹ A partir de ello, el órgano de cierre en materia constitucional

...ha sostenido que la educación constituye una herramienta necesaria para el desarrollo y evolución de la sociedad así como un instrumento para la construcción de la equidad social. Ha

²⁰ Artículos 1, 44, 67, 70, 305, 334, 356 y 366 de la Carta Política.

²¹ El artículo 67 de la Constitución Política dispone: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. // La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. // El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. // La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. // Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. // La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. Sentencia T-743/13

señalado la Corte, puntualmente, que este derecho permite la proyección social del ser humano, el acceso al conocimiento, a la ciencia y demás bienes y valores culturales así como la realización de otros derechos fundamentales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política. Su núcleo esencial está representado por el acceso y permanencia en el sistema educativo. Al tratarse además de un servicio público, su prestación está a cargo tanto de las entidades estatales como de los particulares, quienes conjuntamente deben asegurar el adecuado y efectivo cubrimiento del mismo. (Corte Constitucional de Colombia, 2015, Sentencia T-137/15)

La Corte Constitucional en múltiples jurisprudencias (T-527/95, T-329/97, T-534/97, T-974/99, T-925/02, T-041/09, T-153/13, T-137/15) ha sostenido que el derecho a la educación comporta las siguientes características:

- (i) es objeto de protección especial del Estado;
- (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros;
- (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social Democrático de Derecho;
- (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”;
- (v) se trata de un derecho deber y genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo.

En la sentencia T-642 de 2001, la Corte Constitucional sostuvo que

...el artículo 67 de la Constitución Política prescribe que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, la cual será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. A su vez, el artículo 95-1 de la Carta prescribe que son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

La Corte Constitucional ha adoptado los lineamientos señalados en la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Esta Observación establece cuatro (4) características interrelacionadas que debe tener la educación en todas sus formas como componente esencial del derecho a la educación, a saber *disponibilidad*, *accesibilidad*, *aceptabilidad* y *adaptabilidad*. Se entiende por

a) *Disponibilidad*. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc. b) *Accesibilidad*. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. c) *Aceptabilidad*. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13). d) *Adaptabilidad*. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación, responder a las necesidades de los alumnos en contextos

culturales y sociales variados y garantizar la continuidad en la prestación del servicio. (Sentencia T-137/15)

La jurisprudencia establece de igual manera que el derecho a una educación accesible acarrea en cabeza del Estado la obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la implantación de la enseñanza, y que la omisión de este deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades. En este orden de ideas, en el caso particular analizado en la Sentencia T-008/16, se determinó que: “...el derecho fundamental a la educación comporta la obligación positiva de proveer el transporte de los niños campesinos, cuando la institución educativa más cercana se ubica lejos de su vivienda.” (Corte Constitucional de Colombia, 2016) Con el fin de salvaguardar su integridad personal y garantizarles condiciones dignas para educarse.

Respecto al impacto del hecho de que al interior de un Estado Social de Derecho, sea el juez constitucional quien materialice e incluso garantice derechos por encima del legislados y del ejecutivo, es decir, a quienes en principio se les encomienda esa función por parte de la Carta Magna, y al visibilizar la inacción, la falta de calidad de las políticas públicas, la ineficiencia administrativa, la inflación normativa por un congreso desordenado e ineficiente, el Juez se subroga ese cumplimiento de la constitución que no le es otorgado directamente por la constitución y procede a conminar a la administración para conseguir el cumplimiento de su deber legal. Para los casos de los derechos a la educación y la salud en Colombia, se encontraron los siguientes ejemplos de ese activismo del juez constitucional. Sentencia T-760/2008. M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa. En materia de salud, equiparó el Plan Obligatorio de Salud y obligó a que las personas del régimen contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, gocen de los mismos beneficios obligando así a adquirir y poner en circulación medicamentos de alto costo sin ningún análisis de viabilidad financiera. En materia educativa, la Sentencia C-252/95 M.P. Eduardo Cifuentes, equiparó los salarios del sector público y privado y la sentencia C-560/97 M.P. José Gregorio Hernández, prohibió en la educación básica, el cobro de bonos educativos en los colegios privados, desincentivando la reinversión privada en ese sector.

En ese orden de ideas, se concluye que en Colombia, por haber sido creada la Corte Constitucional con la expedición de la Carta Política de 1991, existen más pronunciamiento con relación el derecho a la educación en la jurisdicción constitucional, donde se vela por su cabal cumplimiento otorgándole al Estado, la familia y la sociedad la corresponsabilidad en la debida ejecución del derecho, por cuanto no sólo es deber del órgano estatal sino de quienes conforman el núcleo familiar de los beneficiarios de la educación y de la sociedad a la que hacen parte por el solo hecho de pertenecer a un Estado.

Con todo lo analizado en los capítulos que hacen parte integral de este trabajo, se puede concluir que necesariamente los Estados estudiados deben garantizar el debido y correcto cumplimiento de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados, no sólo con la implementación de políticas públicas, sino con la adecuada vigilancia y control de tales políticas por cuanto no pueden convertirse en ruedas sueltas del gobierno, sino deben consolidarse en un engranaje que vele por los derechos de las personas, sin que se menoscabe su cumplimiento por omisión del deber ser Estatal.

Así mismo, se evidencia que los mecanismos de protección con que cuentan las personas para garantizar el cumplimiento de sus derechos cuando han sido vulnerados sea por funcionarios públicos o por particulares, no son suficientes para salvaguardar los derechos, por cuanto al proteger las violaciones que se suscitan le cargan cierta obligatoriedad al Estado que no muchas veces se cumple. Sin embargo, se le atribuye a los constituyentes primarios especialmente a la Asamblea Constituyente de Colombia de 1991, que fueron precursores de los mecanismos de amparo constitucional con la Acción de Tutela, que fue posteriormente adoptada por Ecuador y Bolivia respectivamente, el sentir de la norma, el deber ser de la misma, donde lo que se buscaba con la ampliación de las cartas de derechos, era que se protegieran los mismos principalmente por el Estado y posteriormente con quienes tuvieran potestades para cumplirlos.

En definitiva, se puede decir que en materia de salud y educación, Ecuador y Bolivia han implementado practicas adecuadas para proteger los derechos, toda vez que al analizar los mecanismos de protección judicial con que cuentan los ciudadanos, se evidencia que son

utilizados pero no en las cantidades de Colombia, al ser el único elemento que tienen a quienes se les vulneran los derechos, por cuanto, la Acción de Tutela se aplica cuando se genere un perjuicio irremediable y no haya otro mecanismo alternativo de aplicación. De igual forma, se puede establecer que los Estados de Bolivia y Ecuador cumplen con la generación de políticas públicas tendientes a proteger los derechos, diferente situación ocurre en Colombia, por cuanto no son suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno tendientes a disminuir la ocurrencia de violaciones a los derechos a la salud y a la educación, toda vez que los ciudadanos a quienes se les vulnera el derecho, el único camino que tienen para defenderlo es acceder a la interposición de la acción constitucional de tutela como se analizó anteriormente.

Conclusiones

De acuerdo al análisis realizado para 1. ¿Determinar cuál es el estado de los derechos fundamentales a la educación y la salud, a través de la evaluación de las políticas públicas implementadas en Ecuador, Bolivia y Colombia, como elemento esencial de los estados sociales de derecho? , se concluyó que:

Los países de Ecuador, Bolivia y Colombia, han avanzado en la formulación e implementación de políticas públicas tendientes a satisfacer los derechos a la salud y a la educación. Igualmente, para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, se tomaron medidas extremas, tratando al máximo de utilizar todos los mecanismos posibles para alcanzar las metas propuestas, quedando pendientes algunas de ellas, las cuales, en los objetivos de desarrollo sostenible se materializaran su debido cumplimiento.

Los procesos constituyentes llevados a cabo en los países de Colombia, Ecuador y Bolivia, fueron concebidos en el primer caso, por la necesidad de cambio en las políticas gubernamentales por el auge del narcotráfico que desencadenó una época de violencia en el país, y para el segundo y tercer caso, fueron producto de las movilizaciones sociales que llevaron al poder a candidatos de ideología de izquierda, cuya fortaleza de campaña se centró en el cambio constitucional tendiente a empoderar a los pueblos indígenas y reconocerles sus derechos.

Tanto el derecho a la educación como el derecho a la salud, son considerados como fundamentales dentro del constitucionalismo Ecuatoriano, Boliviano y Colombiano, como ejes articuladores de las sociedades. Dentro de las políticas de los estados asistencialistas, se enmarca su actuar en la obligación que tienen los gobiernos de asistir, apoyar o colaborar a sus ciudadanos para satisfacer las necesidades básicas cuando las personas no pueden hacerlo por sus propios medios. Para los casos del cumplimiento de los derechos citados, los gobiernos han generado políticas públicas tendientes a satisfacer la prestación de los servicios en ambos derechos, tal como se verificó en el aparte 2.2, donde se enumeraron los planes, programas o

proyectos que cada país implementó, con el fin de articularlas con las metas propuestas por los Objetivos del Milenio tendientes a superar la extrema pobreza en sus múltiples dimensiones, que para el caso concreto se tomaron solo las referentes a salud y educación.

Respecto a los elementos, características o criterios de Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que determina la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación, acogidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 13, se visibilizó en primera medida que los tres países estudiados ubican cada una de las características en un artículo específico de la carta política, tal como se demostró en el cuadro de las páginas 108, 109, 110 y 111; es decir, se adoptan medidas desde la norma constitucional para que los gobiernos de turno, a través de políticas públicas las conviertan en mandatos para los órganos rectores de cada derecho y por ende, se garantice a los habitantes de los territorios, un cumplimiento óptimo y eficaz en cada aspecto que rige a los derechos.

Para determinar si las políticas públicas en materia educativa han sido eficaces o no, se tuvieron en cuenta ciertos indicadores tales como cantidad de maestros/docentes, estudiantes matriculados en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato, programas de alimentación y transporte escolar, porcentaje de gasto público en el sector educativo, tasa neta de matrícula en educación primaria y secundaria, tasa de deserción en primaria y secundaria los cuales se trataron de medir de acuerdo a la información recolectada de los productos o consecuencias de cada actividad en particular. De todo ello, se concluye que:

- En Colombia se atendían para el año 2017 22,36 estudiantes por maestro/docente, siendo el menor entre los tres países (Ecuador 25,57 y Bolivia 29,67). Entre menor sea el número de estudiantes por maestro/docente, mejora y se favorecen los procesos de aprendizaje. Esta relación denota la materialización de la característica de disponibilidad de la Obligación No. 13 de la CDESC al garantizar el Estado un personal docente relativamente adecuado para cada nivel de formación.
- Bolivia, para el año 2017, era el país que atendía educativamente el mayor porcentaje de estudiantes en primaria y secundaria con relación a la población total del país. Esta

relación denota la materialización de la característica de accesibilidad de la Obligación No. 13 de la CDESC, por cuanto los Estados deben garantizar el acceso en todos los niveles de aprendizaje, de forma gratuita, universal e integral y de los tres países estudiados, Bolivia es el que más cumplía con éste precepto. Y para el año 2016, Ecuador era el país que atendía el mayor porcentaje de los estudiantes matriculados (28,36%) en primaria y secundaria con relación a la población total.

- Ecuador, para el año 2017, era el país que ostentaba la mejor relación población total / maestros, es decir, tenía mayor número de maestros con relación a la población total del país. Esta relación denota la materialización de la característica de aceptabilidad de la Obligación No. 13 de la CDESC, toda vez que para que un país garantice un adecuado servicio educativo, debe contar con personal docente suficiente, calificado y de calidad, para que los procesos de aprendizaje sean debidamente suministrados y aceptados por la población estudiantil.
- Y para la materialización de la cuarta característica de la Obligación No. 13 de la CDESC, adaptabilidad, se dedujo del análisis realizado que los tres países cuentan con programa de alimentación durante la jornada escolar en los niveles de formación estatal, pero para los casos de Colombia y Ecuador, la cobertura del programa no es total, es decir, no cubre a toda la población educativa (61% Colombia (2017) y 63,71%-2016 – 67,40% -2017 Ecuador). Para el caso de Bolivia no se pudo realizar medición por cuanto el programa comenzó a aplicarse en el año 2016 y a la fecha no se han consolidado resultados de cobertura. Así mismo, se analizó la existencia del programa de transporte escolar, que podría encuadrarse dentro de esta característica y se concluyó que en Colombia existe y se aplica la política pública como tal, habiendo sido descentralizada a las entidades territoriales, pero para los casos de Bolivia y Ecuador no se contempla tal política dentro del actuar del órgano rector en materia educativa o de los gobiernos dentro de los planes de desarrollo. Por tanto, en este caso, se cumple en Colombia con la política de transporte escolar, aventajándose sobre los otros dos países, siendo un punto extra para que se configure como tal la característica al brindar posibilidad de acceso y permanencia en la educación para los habitantes del territorio nacional que lo requieran.

- Con relación al porcentaje de gasto público en materia educativa, utilizado para sostenimiento de las instituciones, administración educativa, subsidios o transferencias, mantenimiento y ejecución, se concluyó que de los tres países estudiados, Bolivia ha sido desde el año 2014, en que mayor inversión hace del total del PIB con destino a la educación. Lo cual concuerda con la segunda relación realizada, donde fue Bolivia el país que atendía el mayor porcentaje de la población total. Pero no guarda relación con el análisis que se realizó de la tasa neta de matrícula neta en primaria, toda vez que para los años 2015 y 2016, se visibilizó que fue mayor en Ecuador, seguido por Colombia y por ultimo Bolivia, por tanto, la política pública en materia de primera infancia y niñez debe ser ajustada para lograr mayores resultados. Respecto a la tasa neta de matrícula en secundaria, surtió el mismo resultado de la anteriormente expuesta. Y para el año 2017, Bolivia tuvo un incremento en la tasa de matrícula en primaria y fue el que mayor porcentaje obtuvo de los tres países analizados, siguiéndole Ecuador y por ultimo Colombia, es decir, hubo una mejora en el manejo de la política y se obtuvo resultados diferentes.
- Referente a la tasa de deserción se deduce que para el año 2015 en el nivel de primaria fue mayor en Colombia que en Bolivia; y para la secundaria, fue mayor en Bolivia que en Colombia. Respecto a Ecuador, no se encontró información, por tanto, no se incluyó dentro del análisis respectivo. Para el año 2016, la deserción escolar en primaria fue mayor en Ecuador, seguido de Colombia y por ultimo Bolivia; y para secundaria, fue mayor en Bolivia que en Colombia. El dato de Ecuador fue un estimado que la UNESCO proporcionó al no haber datos concretos. Y para el año 2017, solo se encontró información respecto del nivel secundario y claramente se denota que la deserción fue mayor en Bolivia que en Colombia, por cuanto la información respecto a Ecuador igual que lo anterior, fue un estimado de la UNESCO. Por tanto, en términos promedios, la deserción escolar para los tres países analizados se encuentra entre un 5 y 10%. En conclusión, los países deben adecuar y proceder a ejecutar programas con currículos flexibles destinados a las personas con escolaridad inconclusa, logrando reducir los niveles de deserción, asegurar la permanencia del estudiante en el sistema educativo y, consecuentemente, la erradicación del analfabetismo.

De todas las mediciones realizadas, se concluye que tanto Ecuador, como Bolivia y Colombia, han avanzado con la implementación de políticas públicas tendientes a cumplir con cada una de las características preceptuadas por la Obligación No. 13 de la CDESC. Es decir que se amplió la cobertura educativa, se implementó la gratuidad en la prestación del servicio educativo, se generaron más cupos para acceder al sistema, se fundó la obligatoriedad de que los niños y adolescentes gocen del derecho sin menoscabo de su condición social, económica, cultural o racial, otorgando características de igualdad en toda la población, entre otras.

Colombia y Ecuador, son países que hacen parte de mediciones internacionales en materia educativa. Han participado en el PISA – Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes- iniciativa de la OCDE. Diferente es el caso de Bolivia, que no participa de este programa y aproximadamente desde el año de 1997, no incluye a sus estudiantes en pruebas internacionales, denotando falta de interés o podría decirse de voluntad política para que internacionalmente se conozca el grado de avance en sus programas académicos, de aprendizaje y análisis.

Respecto al Objetivo del Desarrollo del Milenio No. 2, lograr la enseñanza primaria universal, se procedió a determinar ciertos indicadores basados en la bibliografía existente para determinar el porcentaje de avance para la época de la evaluación de la meta propuesta cumplir al 2015, de lo cual, se concluyó que Colombia y Ecuador alcanzaron años antes la meta fijada para el 2015 respecto de lograr la educación primaria universal (2013); Bolivia, a la fecha de la evaluación por parte de la CEPAL, se encontraba camino a conseguirla. Respecto a la tasa de alfabetización, Bolivia un año antes de llegarse el plazo fijado para los ODM, cumplió con la meta fijada, alcanzando el porcentaje requerido y erradicando la analfabetismo de sus territorios. Quedaron retos pendientes, como era que la población de 20 a 24 años completara la educación secundaria, por cuanto los 3 países analizados no alcanzaron la meta fijada por los ODM.

Respecto al indicador de Analfabetismo, se dedujo que Bolivia, desde el año 2016, no tiene personas analfabetas en su sociedad (personas entre los rangos de 15 a 24 años y mayores de 65

años), es decir que la política pública tendiente a erradicar el analfabetismo, fue exitosamente ejecutada, no siendo el caso para Ecuador y Colombia, por cuanto en las mediciones realizadas, claramente se evidencia que prosigue la tasa de analfabetismo y debe continuarse con la ejecución correcta y debida de la política pública tendiente a erradicarla. Es claro mencionar que sin voluntad política, es decir, sin inversión económica, social, cultural y administrativa, es imposible que se logre cumplir con el objetivo propuesto. Por tanto, se convierte en responsabilidad exclusiva y perentoria de los estados, impulsar la ejecución de programas dirigidos especialmente a las poblaciones más vulnerables que necesitan su presencia, no temporal sino definitiva.

Para el caso de lo preceptuado del derecho a la salud, las Obligaciones No. 14 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como los informes del relator especial para el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, disponen los elementos esenciales, dentro de los cuales debe enmarcarse la prestación del servicio de salud y que dentro del presente trabajo, fueron objeto de análisis uno a uno, donde se evidenció que los países de Ecuador, Bolivia y Colombia, han evolucionado en el cumplimiento de las obligaciones preestablecidas, correspondientes a la disponibilidad, accesibilidad (con sus cuatro dimensiones), aceptabilidad y calidad. Además, se concatenaron con las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio No. 4 y 5, relacionadas con la mortalidad infantil y la salud materna, donde se encontraron los siguientes resultados:

- Ecuador, en el año 2011 se ubicó dentro de los cinco países latinoamericanos con menor mortalidad de la niñez, es decir, que ese indicador refleja que la política pública en materia de reducción de la mortalidad en menores de 5 años (niñez), ha sido exitosa, por cuanto, se alcanzó la meta planteada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que era para el 2015, en el 2013. Diferente situación ocurrió con Colombia y Bolivia, por cuanto no se pudo reducir la tasa de mortandad para cumplir el objetivo del Milenio, sin que ello signifique que no se ha avanzado en la materia, sino que los gobiernos deben re direccionar sus planes y programas para que sea 100% efectiva.

- Referente a la tasa de mortalidad en menores de 1 año, es decir, mortalidad infantil, se concluye que Colombia logró alcanzar la meta propuesta respecto a este indicador específico del objetivo de desarrollo del milenio No. 4; diferente situación ocurrió con Ecuador y Bolivia, por cuanto aún les queda brecha pendiente de cumplir. Al respecto se debe hacer la siguiente claridad. Colombia redujo sus niveles de mortalidad infantil, es cierto, pero el problema continúa, es decir, debe existir una clara correspondencia entre la voluntad gubernamental y quienes ejecutan el gasto público, para que las políticas públicas formuladas e implementadas sean efectivas. En 2015 la mortalidad infantil de la zona rural fue 1,5 veces más alta que la tasa de la zona urbana y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres de estratos más bajos sin ningún tipo de educación. Por tanto, aún quedan tareas pendientes para Colombia a pesar de haber alcanzado la meta del objetivo de desarrollo del milenio y lograr que a 2030, se cumpla con el objetivo de desarrollo sostenible a cabalidad.
- Respecto a la cobertura de vacunación en la población infantil, se denotan avances, pero no suficientes para proteger al 100% de los menores de 1 año, por tanto, sigue como tarea pendiente de los estados para que desde el 2015 que se establecieron los objetivos de desarrollo sostenible, se materialicen todas las metas pactadas, como por ejemplo la que le corresponde a este indicador que hace parte del objetivo No. 3 “Salud y Bienestar” y establece que: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”. En tanto, continúa como tarea pendiente de los 3 países la ampliación de su cobertura, lo cual debe materializarse a través de una adecuada y efectiva política pública de sanidad y prevención.
- En lo concerniente a las atenciones a los partos en instituciones hospitalarias con personal adecuado, los avances visibilizados se enmarcan en que Bolivia y Colombia cumplieron la meta propuesta en los Objetivos del Desarrollo del Milenio en 2013 y 2012 respectivamente. Ecuador, aún tiene la tarea pendiente de cumplir. Respecto de la tasa de mortalidad materna, los tres países no cumplieron con el objetivo propuesto, pero al revisar los datos, se aproximaba más Colombia a cumplir que Ecuador y Bolivia, teniendo estos dos unos compromisos bastante difíciles, por cuanto, las tasas están

alejadas de las metas, denotando claramente que la política pública en materia de salud materna, adolece de eficacia en dichos países.

- Los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud –OPS-, en el año 2014, acordaron elevar el gasto público en salud en hasta un seis (6) por ciento del producto interno bruto –PIB- y de acuerdo al análisis realizado, se determinó que los países de Ecuador, Bolivia y Colombia, alcanzaran la meta propuesta de llegar al 6% del PIB en gasto público en materia de salud, aproximadamente así: Colombia en el 2024, Ecuador en el 2026 y Bolivia en el 2027.

Habiendo analizado el avance que han tenido los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de estudio, se pudo concluir lo siguiente al respecto del objetivo No. 4, la tasa de matrícula (Primer indicador), en el nivel de preprimaria, Bolivia tuvo mayor grado de porcentaje que Ecuador, Colombia no se tiene en cuenta por cuanto no hubo datos disponibles para la medición. En el nivel de primaria, Ecuador ocupó el mayor porcentaje de matrícula, seguido por Colombia y en último lugar Bolivia. Para el año 2017, solo se obtuvieron datos de Ecuador, Bolivia y Colombia no reportaron datos a la CEPALSTAT. Y para el nivel de secundaria, se siguió la misma línea anterior, es decir, puntuó Ecuador con mayor tasa de matrícula, seguido Colombia y por ultimo Bolivia. Para el año 2017, solo se obtuvieron datos de Ecuador, Bolivia y Colombia no reportaron datos a la CEPALSTAT. Seguidamente, para el segundo indicador, años esperados de escolaridad, era mayor el número de años escolarizados en Ecuador que en Bolivia y Colombia. Y para la tasa de alfabetización de 15 a 24 años, es decir, el tercer indicador propuesto, ocupó el primer lugar Ecuador y le siguió Colombia, aunque la diferencia es solamente un 0.1%. De Bolivia no se obtuvieron datos al respecto.

Por tanto, se concluye que respecto al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4, relacionado con la Educación, de los tres países analizados, Ecuador es el que mayor grado de avance tiene, seguido por Colombia y en tercer lugar Bolivia. Es importante aclarar que solo es un avance, los Objetivos entraron en vigencia a partir de enero de 2017 y esta medición se realizó con datos de 2016 (pocos) y los que alcanzaron a registrar del año del informe, sin decir que no sea viable la medición.

Respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 3, relacionado directamente con la Salud, su calidad, cobertura, etc, se extracta que la tasa de mortalidad materna en Ecuador y Colombia se registró igual, es decir, con el mismo valor numérico; Bolivia supera a éstos países en más de un 200%, es decir, que la brecha que existía cuando se realizó la medición de los Objetivos del Milenio, aún continua para ese país; se denota igualmente que en Ecuador hubo avances en el cumplimiento por cuanto bajo la tasa ostensiblemente, tanto que se asemeja a la de Colombia que fue mediana. La tasa de mortalidad neonatal fue mayor en Bolivia, seguida por Ecuador y luego Colombia. La tasa de mortalidad en menores de 5 años, siguió la misma dirección de la anterior medición, es decir, Bolivia primero, Ecuador segundo y Colombia tercero. La Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud calificado fue mayor en Colombia, seguida por Ecuador y después Bolivia. El Porcentaje de niños a los que se le aplicaron vacunas como recomendación de la Organización Mundial de la Salud fue mayor en Bolivia, seguido por Colombia y en tercer lugar Ecuador; para esta medición no se guarda estrecha relación con la evaluación realizada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por cuanto Colombia ocupaba el primer lugar de los tres países y ahora baja a segundo lugar, ocupando el primero Bolivia y tercero Ecuador.

Los órganos de cierre en materia constitucional en cada país analizado, concuerdan en que los derechos a la salud y a la educación, deben priorizarse en su aplicación por su conexidad con el derecho a la vida, por lo tanto, la carga prestacional está en cabeza del estado, quien a través de las políticas públicas, deben formularse e implementarse medidas tendientes a salvaguardar la adecuada prestación de los servicios en ambas materias. En tal virtud, los gobiernos tratan, en mayor proporción, de dar cumplimiento a esas políticas que ellos mismos formulan e implementan, pero aspectos como el déficit económico, dificultan una debida y correcta aplicación de tales medidas. La anterior conclusión llevó a identificar, en lo concerniente a las políticas públicas establecidas por los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Colombia, que en los tres estados, ostentan la característica de constituirse como políticas asistencialistas, por cuanto pretenden satisfacer necesidades de la comunidad con subsidios por parte de los gobiernos de turno. Además, en Ecuador y Bolivia se denota claramente con tales políticas la ideología de los gobiernos de turno, al enmarcarlas con ideologías socialistas,

anticapitalistas y anticolonialistas que pretendieron siempre fue otorgarles beneficios a las comunidades.

Entonces, respecto al problema jurídico planteado, se debe concluir que los estados estudiados, analizados y evaluados, no cumplen eficazmente con la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la educación, toda vez que las políticas públicas adoptadas, aunque han generado avances significativos, no son suficientes para salvaguardar en debida forma el correcto estado de los derechos, muestra de ello son los altos porcentajes en materia deserción escolar en el nivel de secundaria por parte de Bolivia para el 2017 o del nivel de primaria para Ecuador en el 2016, seguida por Colombia, esto por la parte educativa y en materia de salud, el alto porcentaje de mortalidad infantil en Bolivia y Ecuador para el año 2013 o el déficit de cobertura de vacunación en población infantil por parte de los tres países analizados o la altísima tasa de mortalidad materna en Bolivia que supera en un 200% a los otros países. Por tanto, no se cumple con lo preceptuado en los primeros artículos de las tres constituciones, donde se adopta un modelo de estado social de derecho o constitucional de derecho, cuyo objetivo principal es hacer valer la igualdad no solo frente a la ley, sino una igualdad material que proteja a los sectores más desamparados de la población, de manera efectiva.

Y para dar respuesta a la hipótesis planteada en la introducción, se evidencia que aunque está consagrada constitucionalmente la obligatoriedad de los Estados de ocuparse de la realización de derechos fundamentales, como la educación y la salud, las medidas formuladas e implementadas claramente no están siendo eficaces y se encuentran afectando el cumplimiento del postulado constitucional del Estado Social de Derecho, por cuanto, aunque se acatan en algunos aspectos los estándares nacionales e internacionales de los derechos objeto de estudio, no son suficientes para que la totalidad de la población accede, se le preste y garantice un óptimo servicio de salud y educativo.

Referencias bibliográficas

- Aguilera, R. E. (2012). Las transformaciones del estado contemporáneo: legitimidad del modelo de estado neoconstitucional. *Universitas*, (15), 3-25.
- Andaluz, H. (2014). Constitución, derechos y jurisprudencia. *Revista boliviana de derecho* (15), 10-29.
- _____ (2014). El régimen constitucional de los derechos en Bolivia: de la Constitución a la jurisprudencia. Un breve repaso sobre su aplicación. *Barataria*, (17), 177-188.
- Andes. (Junio 28 de 2017). Red Pública Integral garantiza el derecho a la salud gratuita en Ecuador. Recuperado de: <https://www.andes.info.ec/es/noticias/sociedad/1/red-publica-integral-garantiza-derecho-salud-gratuita-ecuador>
- Anria, S., Cameron, M., Goenaga, A., Toranzo, C. y Zuazo, M. (2010). Bolivia: democracia en construcción. En M. Cameron y J. P. Luna (Ed.), *Democracia en la región andina: diversidad y desafíos*. (pp. 243-272). Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos -IEP-.
- Arango, M. (2004). El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. *Precedente*, 79-102. Recuperado de: <http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/article/view/1406/1805>
- Asamblea Constituyente de Bolivia. (2008). *Nueva Constitución Política del Estado*. Recuperado de: http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bolivia/bolivia_newconstitution_spaorf.pdf
- _____ (s.f.). Recuperado de: <http://www.laconstituyente.org/>
- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (20 de diciembre de 2010). Ley N° 070. Ley de 20. Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”
- Asbún, J. (Diciembre 16 de 2014). El contenido esencial de los derechos fundamentales. *La Razón*.
- Ase, I. y Buriyovich, J. (2009). La estrategia de Atención Primaria de la Salud: ¿progresividad o regresividad en el derecho a la salud? *Salud colectiva*, 27-47.

- Ávila, L. F. (2016). Garantismo y estado constitucional en la constitución del ecuador para el siglo XXI. A propósito de *principia iuris*. *Ciencia Jurídica*, 5(10), 37-71.
- Baldivieso, R. (2003). Los derechos fundamentales: la Constitución y los tratados en el ordenamiento jurídico de Bolivia. *Ius et Praxis*, 9(1), 193-203.
- Basset, Y. (2004). El derrumbe del modelo boliviano de gobernabilidad. *Análisis político*, (51), 51-63.
- Bastidas, F., Villaverde, I., Requejo, P., Presno, M. Á., Aláez, B. y Sarasola, I. F. (2004). *Teoría general de los derechos fundamentales en la constitución española de 1978*. Madrid: Tecnos.
- Bazán, V. (2012). Los derechos fundamentales (particularmente económicos, sociales y culturales) en el Estado plurinacional de Bolivia y ciertos desafíos que a su respecto afronta la justicia constitucional. *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, (16), 21-60.
- Bedoya, Á. (2006). Derecho: ¿Cuál derecho? De la Constitución burguesa a la Constitución de nueva democracia. Universidad de Caldas. La Dorada.
- Bejarano, A. M., Alviar, H., Botero, F., Hoskin, G. y Pachón, M. (2010). Colombia: “democracia amenazada”. En M. Cameron y J. P. Luna (Ed.), *Democracia en la región andina: diversidad y desafíos*. (pp. 100-164). Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos -IEP-.
- Bejarano, A. M., y Segura, R. (2013). Asambleas constituyentes y democracia: una lectura crítica del nuevo constitucionalismo en la región andina. *Colombia Internacional*, (79), 19-48.
- Benavides, J. (2012). Del bien común al buen vivir. En L. F. Ávila (Ed.) *Política, Justicia y Constitución*. (pp. 189-204). Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición.
- Bohórquez, J. P. (2001). *Concepciones políticas en la Constituyente de 1991*. Medellín: Cooimpresos.
- Bon, P. (1992). La protección constitucional de los derechos fundamentales: aspectos de derecho comparado europeo. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, (11), 43-82.
- Bueso-Merriam, J., Galindo, A. y Gómez-Peña, A. (2015). *Panorama de la Efectividad en el Desarrollo 2014*. Banco Interamericano de Desarrollo -BID-: Washington, D.C.

- Caetano, G. (2011). Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina. En F. Rojas y J. Guzmán (coord.) *Apuntes para una teoría sobre gobernabilidad y convivencia democrática*. (pp. 7-15). San José, Costa Rica: FLACSO.
- Caicedo, D. A. (2009). El bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Derechos Humanos más allá de la Constitución. *Foro*, (12), 5-29.
- Cameron, M. y Luna, J. P. (2011). El estado de la democracia en la región andina. En M. Cameron y J. P. Luna (Ed.), *Democracia en la región andina: diversidad y desafíos*. (pp. 13-27). Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos -IEP-.
- Camisón, J. Á. (2012). Los derechos civiles y políticos en la Constitución boliviana. *Derecho del Estado. Nueva serie*, (28), 171-231.
- Campaña, F. S. (2010). La noción “derechos fundamentales” en la jurisprudencia de la autodenominada Corte Constitucional ecuatoriana (La exclusión del derecho de propiedad de la acción extraordinaria de protección por no ser “derecho constitucional”). *Iuris Dictio*, 13(10), 9-31.
- Cardona, J. (3 de julio del 2011). El arduo camino de la Constituyente de 1991. El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/content/el-arduo-camino-de-la-constituyente-de-1991>
- Cecchini, S. y Vargas, L. H. (2014). Transferencias de ingresos para la erradicación de la pobreza. Dos décadas de experiencia en los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Santiago de Chile: CEPAL.
- Centro de Estudios Constitucionales, plural, (2012). El paso a paso del proceso constituyente. En C. González (Comp.), *Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia*. (pp. 63-69). Bogotá: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
- Congreso de la República de Colombia. (Enero 09 de 2007). Ley 1122. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
-
- (Febrero 16 de 2015). Ley 1751. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Bogotá.
- Constitución política del estado de Plurinacional de Bolivia.

Contraloría General de la República. Evaluación Del Programa De Alimentación Escolar.

(Lecciones Aprendidas del control fiscal, Financiamiento, Cobertura e Impacto). 2016.

Recuperado de:

<https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452124/Evaluacion+del+programa+de+alimentaci%C3%B3n+escolar+PAE+2016.pdf/15542781-cd89-4788-a305-73f1dcb53fd2?version=1.0>

Copa, A. y Carcamo, M. (2013). *La política SAFCI, su estrategia de promoción de la salud y prácticas alimentarias saludables*. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes

Corte Constitucional de Colombia. (1992). Sentencia No. C-574/92. Recuperado de:

<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C-574-92.htm>

_____ (1992). Sentencia T-002/92. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-002-92.htm>

_____ (1992). Sentencia T-426/92. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-426-92.htm>

_____ (1992). Sentencia T-533/92. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-533-92.htm>

_____ (1992). Sentencia T-612/92. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-612-92.htm>

_____ (1993). Sentencia C-114/93. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-114-93.htm>

_____ (1993). Sentencia T-425/93. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-425-93.htm>

_____ (1993). Sentencia T-597. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-597-93.htm>

_____ (1994). Sentencia C-179/94. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-179-94.htm>

_____ (1994). Sentencia T-543/94. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-543-94.htm>

_____ (1995). Sentencia C-225/95. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-225-95.htm>

- _____ (1995). Sentencia C-566/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-566-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia C-578/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-578-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia C-373/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-373-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia C-381/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-381-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia C-489/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-489-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia T-165/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-165-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia T-236/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-236-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia T-237/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-237-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia T-336/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-336-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia T-496/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-496-95.htm>
- _____ (1995). Sentencia T-527/95. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-527-95.htm> T-329/97
- _____ (1997). Sentencia C-358/97. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-358-97.htm>
- _____ (1997). Sentencia T-329/97. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-329-97.htm>
- _____ (1997). Sentencia T-534/97. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-534-97.htm>
- _____ (1998). Sentencia C-191/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-191-98.htm>

-
- _____ (1998). Sentencia SU-225/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU225-98.htm>
-
- _____ (1998). Sentencia SU-250/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU250-98.htm>
-
- _____ (1998). Sentencia SU-747/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/su747-98.htm>
-
- _____ (1998). Sentencia T-415/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-415-98.htm>
-
- _____ (1998). Sentencia T-473/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-473-98.htm>
-
- _____ (1998). Sentencia T-576/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-576-98.htm>
-
- _____ (1998). Sentencia T-799/98. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-799-98.htm>
-
- _____ (1999). Sentencia C-866/99.
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-866-99.htm>
-
- _____ (1999). Sentencia T-513/99. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-513-99.htm>
-
- _____ (1999). Sentencia T-527/99. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-527-99.htm>
-
- _____ (1999). T-864/99. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/t-864-99.htm>
-
- _____ (1999). T-974/99. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-974-99.htm>
-
- _____ (2000). Sentencia T-009/00. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/t-009-00.htm>
-
- _____ (2000). Sentencia T-202/00. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/t-202-00.htm>
-
- _____ (2000). Sentencia T-784/00. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-784-00.htm>

- _____ (2000). Sentencia T-1001/00. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-1001-00.htm>
- _____ (2000). Sentencia T-1072/00. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-1072-00.htm>
- _____ (2001). Sentencia C-142/01. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-142-01.htm>
- _____ (2001). Sentencia C-620/01. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-620-01.htm>
- _____ (2001). Sentencia C-1064/01. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1064-01.htm>
- _____ (2001). Sentencia SU.1184/01. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/SU1184-01.htm>
- _____ (2001). T-642 de 2001. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-642-01.htm>
- _____ (2002). Sentencia T-925/02. Recuperado de:
<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-925-02.htm>
- _____ (2003). Sentencia T-491/03. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-491-03.htm>
- _____ (2003). Sentencia T-807/03. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-807-03.htm>
- _____ (2006). Sentencia T-583/06. Recuperado de:
<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-583-06.htm>
- _____ (2007). Sentencia C-319/07. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-319-07.htm>
- _____ (2007). T-016/07. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-016-07.htm>
- _____ (2009). Sentencia T-041/09. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-041-09.htm>
- _____ (2010). Sentencia T-698/10. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-698-10.HTM>

-
- _____ (2011). Sentencia T-306/11. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-306-11.htm>
-
- _____ (2013). Sentencia T-153/13. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-153-13.htm>
-
- _____ (2013). Sentencia T-495/13. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-495-13.htm>
-
- _____ (2013). Sentencia T-660/13. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-660-13.htm>
-
- _____ (2013). Sentencia T-743/13. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-743-13.htm>
-
- _____ (2015). Sentencia T-137/15. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-137-15.htm>
-
- _____ (2016). Sentencia T-008/16. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-008-16.htm>
-
- _____ (2016). Sentencia T-138/16. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-138-16.htm>
-
- _____ (2016). Sentencia T-581/16. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-581-16.htm>
-
- _____ (2016). Sentencia T-700/16. Recuperado de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-700-16.htm>
- Corte Constitucional del Ecuador. (10 de diciembre de 2008). Sentencia Interpretativa: 002-08-SI-CC de los casos acumulados: 0005-08-IC y 0009-08-IC. Recuperado de:
http://www.alfonsozambrano.com/corte_constitucional_ec/cce-002-SI-08-CC_sentencia_inter.pdf
-
- _____ (8 de octubre de 2009). Sentencia 012-09-SIS-CC. Caso No: 0007-09-IS. Recuperado de:
<http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/316e8180-1645-41cd-862e-2a2b20939156/0007-09-IS-res.pdf?guest=true>

-
- (22 de octubre de 2015). Sentencia N.º 184-14-SEP-CC
 CASO No. 2127-II-EP. Recuperado de:
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2014/184-14-SEP-CC/REL_SENTENCIA_184-14-SEP-CC.pdf
-
- (29 de abril de 2015). Sentencia N.º 133-15-SEP-CC. CASO N.º 0273-12-EP. Recuperado de:
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/133-15-SEP-CC.pdf>
- Costa, J. (2007). Partidos y sistema de partidos en Bolivia. En R. Roncagliolo y C. Meléndez (Eds.) *La política por dentro. Cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*. (pp. 75-122). Lima, Perú: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral -Idea Internacional-
- De Sousa, B. (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*, Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad; Programa Democracia y Transformación Global.
- Delgado Gutiérrez, A. (2002). Las políticas sociales en la perspectiva del derecho y la justicia. Documento presentado en la Reunión de Expertos “El impacto de la reforma de pensiones en Colombia sobre la equidad de género”, Bogotá, 31.
- Decreto Supremo N° 0066. (2009). Bono Juana Azurduy. Recuperado de:
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/bolivia_decreto_supremo_nro_0066_2009.pdf
-
- N° 29601. (2011). Nuevo Modelo Sanitario de Bolivia. Modelo de salud familiar comunitario intercultural. Recuperado de:
http://www.mariestopes.org.bo/webassets/documentos/decreto_supremo_29601.pdf
- Departamento Administrativo de Planeación. (s.f.). SINERGIA Seguimiento Recuperado de:
<http://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento>
- Defensoría del Pueblo. (2010). *Primera evaluación de la política pública de Salud a la luz del derecho a la salud*. Bogotá.

- Díaz, E. (2002). Estado de derecho y sociedad democrática. M. Carbonell, W. Orozco y R. Vázquez (coord.), Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización en América Latina. (pp. 61-95). México D. F.: Siglo XXI.
- Díaz, T. y Arrieta, Y. (2012). *La salud colombiana en la jurisprudencia constitucional*. Cartagena, Universidad Libre, Universidad de Cartagena.
- Díaz, E. (2011). *Estado de derecho y sociedad democrática*. Madrid: Taurus.
- Echeverry Á. y Duque, C. (2015). *Política y Constitucionalismo en Suramérica*. Bogotá: Ibáñez.
- Espinosa, V., Acuña, C., de la Torre, D. y Tambini, G. (2017). La reforma en salud del Ecuador. *Panam Salud Pública*, (41), 1-3.
- Ferrajoli, L. (2001). Pasado y futuro del Estado de derecho. *Revista internacional de filosofía política*, (17), 31-45.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA- Bolivia. (s.f.). Bono Juana Azurduy. Recuperado de: <http://bolivia.unfpa.org/content/bono-juana-azurduy>
- Fondo Monetario Internacional -FMI-. (2014). *Perspectivas de la economía mundial. La recuperación se afianza, pero sigue siendo despareja*. Washington.
- Gañán, J. L. (2012). Del derecho a la salud en Colombia. ¿Un derecho seriamente fundamental? *Quid*, (19), 11-24.
- Gargarella, R. (2015). El «nuevo constitucionalismo latinoamericano». *Estudios sociales*, 25(48). 196-172.
- Góngora, M. E. (2003). El Derecho a la Educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- González, C. (2012). Proceso pre Constituyente, antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En C. González (Comp.), *Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia*. (pp. 63-69). Bogotá: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
- Guevara, S. (2011). *El plan del buen vivir y la corresponsabilidad de los gobiernos locales en las políticas sociales, análisis de la secretaría metropolitana de inclusión social del distrito metropolitano de Quito*. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quito, Ecuador.
- Häberle. (2003). *El Estado Constitucional*. México D. F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM.

- Hernández, P. A. (1999). Descentralización, desconcentración y delegación en Colombia. Santafé de Bogotá: LEGIS.
- Hernández, J. A. (2013). La Constitución de Colombia de 1991 y sus enemigos. El fracaso del consenso constitucional. *Colombia Internacional*, (79), 49-76.
- Herrera, Á. M. (s.f.). Barco Vargas, Virgilio. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/barcvirg>
- Hurtado, M. (2006). Proceso de reforma constitucional y resolución de conflictos en Colombia: el frente nacional de 1957 y la constituyente de 1991. *Revista de estudios sociales*, (23), 97-104.
- Insignares, S. (2015). *Construcción constitucional del proceso de integración suramericano*. Barranquilla: Universidad del Norte; Ibáñez.
- Jaramillo, M. A. (2011). *El nuevo modelo de Estado en el Ecuador: Del estado de derecho al estado constitucional de derechos y justicia*. Universidad San Francisco de Quito, Quito.
- Katz, A. (1987). Staatsrecht. C. F. Muller: Heidelberg.
- Lascousmes P. y Le Galés P. (2004). *Gouverner par les instruments, Presses de la fondation Nationale des Sciences Politiques*. Paris.
- Lemaitre, J. (2009). *El derecho como conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales*. Bogotá: Siglo del Hombre; Universidad de los Andes.
- Lazarte. (2008). La Asamblea Constituyente de Bolivia: de la oportunidad a la amenaza. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Recuperado de: <https://nuevomundo.revues.org/42663>
- Ley 115. (de Febrero 8 de 1994). Por la cual se expide la ley general de educación. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Majone G. (1997). *Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas*. México: FCE,
- Mancero, P. H. (2011). *El tránsito del Estado social de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia: su implicación en la garantía jurisdiccional de los derechos sociales*. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
- Marco, F. (2012). *El Bono Juancito Pinto del Estado Plurinacional de Bolivia. Programas de transferencias monetarias e infancia*. Santiago de Chile: CEPAL.

Mariaca, M. (s.f.). Modelo o tipo del estado boliviano. Recuperado de:

<https://jorgemachicado.blogspot.com.co/2009/08/te.html>

Marín, J. C. y Zuluaga, D. L. (2013). Estado constitucional: marco institucional esencial para la comprensión de los límites de la reforma constitucional. *Criterio Jurídico*, 13(1), 141-169

Martínez, R. (2009). El proyecto de Constitución de Ecuador, ejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano. *IUS*, (23), 264-274.

Mayorga, F. (2008). El gobierno de Evo Morales: cambio político y transición estatal en Bolivia. En Y. Murakami (Ed.) *Tendencias políticas actuales en los países andinos*. (pp. 21-39). Kyoto: Kyoto University.

Medici, A. (2010). El nuevo constitucionalismo latinoamericano y el giro decolonial: Bolivia y Ecuador. *Revista Derecho y Ciencias Sociales*, (3), 3-23.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2017). *Plan nacional decenal de educación 2016-2026. El camino hacia la calidad y la equidad*. Bogotá.

Ministerio de Educación de Ecuador. (s.f.). Ecuador mejoró su sistema educativo en los últimos 7 años. Recuperado de: <https://educacion.gob.ec/ecuador-mejoro-su-sistema-educativo-en-los-ultimos-7-anos/>

(2011). *Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia*, Quito- Ecuador.

(2014). *Guía Metodológica para la Implementación del Currículo de Educación Inicial*, Mineduc, Quito –Ecuador.

(2015). *Revisión nacional 2015 de la Educación para Todos: Ecuador*. Recuperado de: http://www.acaoeducativa.org.br/desenvolvimento/wp-content/uploads/2014/11/Informe_Ecuador.pdf

(2016) *Guía técnico operativa*, Mineduc, Quito – Ecuador.

(2017). *Evaluación de Impacto del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional*. Recuperado de: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/Evaluacion-de-Impacto-del-Programa-de-Diploma-de-Bachillerato-Internacional.pdf>

(2018). *Rendición de cuentas 2017*. Quito.

Ministerio de Educación. Estado Plurinacional de Bolivia. *Bolivia: Revisión Nacional de la EPT al 2015*.

Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. (s.f.). Bono Juana Azurduy. Recuperado de: <http://www.bja.gob.bo/index.php/el-bono/que-es-el-bono>

Ministerio de Salud Pública de Ecuador. (s.f.). Programas del Ministerio de Salud Pública.

Recuperado de: <http://www.salud.gob.ec/programas-del-ministerio-de-salud-publica/>

(s.f.). Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud. Recuperado de: <http://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-calidad-de-los-servicios-de-salud/>

(s.f.). *Producción Estadística MSP 2006 - 2015*.

Recuperado de:

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/Produccion_Estadistica_2015-2016.pdf

(s.f.). *Producción Estadística MSP 2006 - 2016*.

Recuperado de: <http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/Producci%C3%B3n-Estad%C3%ADstica-2006-2016.pdf>

(s.f.). *Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad*. Recuperado de: <http://www.salud.gob.ec/fortalecimiento-de-la-red-de-servicios-de-salud-y-mejoramiento-de-la-calidad/>

(s.f.). *Proyecto de Tamizaje Metabólico Neonatal*.

Recuperado de: <http://www.salud.gob.ec/proyecto-de-tamizaje-metabolico-neonatal/>

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. (s.f.). *Bolivia. Informe final. Referéndum Nacional Constituyente 25 de enero de 2009*. Recuperado de:

http://eeas.europa.eu/archives/eueom/missions/2009/bolivia/pdf/eueom_bolivia_2009_final_report_es.pdf

Molina-Roa, J. A. (2016). La irrupción del biocentrismo jurídico. Los derechos de la naturaleza en América Latina y sus desafíos. *Ambiente y Sostenibilidad*, (6), 64-79.

Montenegro, S. (2006). *Sociedad abierta, geografía y desarrollo. Ensayos de economía política*. Bogotá: Norma.

Younes, Diego. (2004). *Panorama de las reformas del Estado y de la administración pública*. Bogotá: Universidad del Rosario.

- Mundial, B. (2009). La calidad de la educación en Colombia: un análisis y algunas opciones para un programa de política. Bogotá: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial Misión residente en Colombia, 80.
- Muñoz, V. (2012). El derecho a la educación: una mirada comparativa Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia. Santiago: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura.
- Naranjo, V. (2006). *Teoría constitucional e instituciones políticas*. Bogotá: Temis.
- Navia, D. A. (2010). *Libertad de expresión en relación con la honra, intimidad y buen nombre de funcionarios públicos en el sistema interamericano de derechos humanos*. Universidad ICESI, Santiago de Cali.
- Nogueira, H. (2009). Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano. *Estudios constitucionales*, 7(2), 143-205.
- Noguera, A. (2009). El constitucionalismo de los derechos: apuntes sobre la nueva Constitución ecuatoriana de 2008. *Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, (83), 117-148.
- Noguera, A. (2015). La adaptación del código de procedimiento civil venezolano al paradigma del nuevo constitucionalismo latinoamericano: una reforma necesaria. *Ciencia Jurídica*, 4(8), 75-98.
- Noguera-Fernández, A. y Criado, M. (2011). La Constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina. *Estudios Socio-Jurídicos*, 13(1), 15-49.
- Observatorio de territorios étnicos y campesinos. (2012). Editorial: 20 años de la Constitución Política de 1991: ¿Cómo van las cosas? Recuperado de:
<http://www.etnoterritorios.org/Editorial.shtml?apc=o-xx-1-&x=51>
- Olano, H. A. (2002). *Constitución política de Colombia. Comentada y concordada*. Bogotá: Doctrina y Ley.
- Organización de las Naciones Unidas -ONU-. (1999). Aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Recuperado de: <http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource->

attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf

-
- (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. New York.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Educación en Colombia 2016 Aspectos Destacados. Recuperado de:
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/oecd_educacion_en_colombia_apectos.pdf
- Organización Mundial de la Salud. Plan de Acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021. Ginebra: OMS; 2014.
- Osuna, N. (2009). La democracia constitucional en América Latina y las evoluciones recientes del presidencialismo. En P. P. Vanegas (Coord.), *Memorias encuentro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional*. (pp. 131-142.) Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Palacios, V. (2014). Estado Social de Derecho y Estado Constitucional de Derechos. Recuperado de:
<http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2014/03/13/estado-social-de-derecho-y-estado-constitucional-de-derechos>
- Panizza, F. (2008). La Marea Rosa. En M. Alcántara y F. García (Coord.) *Elecciones y política en América Latina*. (pp. 19-40) México D. F.: Instituto Electoral del Estado de México.
- Parra, C. (2015). La salud como nuevo derecho fundamental. Recuperado de:
http://www.larepublica.co/la-salud-como-nuevo-derecho-fundamental_228331
- Peces-Barba, G. (1987). Derechos fundamentales. *Revista Jurídica de Castilla-La Mancha*, (2), 7-34.
- Pedraza, C. C., Matus-López, M., & Báscolo, E. (2018). Espacio fiscal para salud en las Américas: ¿es suficiente el crecimiento económico?. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 42, e86.
- Peña, J. (2009). Procesos constituyentes en el mundo andino. Bolivia y Ecuador en perspectiva comparada. *OSAL*, 10(25), 79-98.

- Plazas, M. A. (2007). *La cuestión social y la nueva izquierda en América Latina: ¿hacia otra ética de la globalización?* Bogotá: Temis.
- Portero, C. (2008). ¿Qué es el **buen vivir** en la Constitución? En R. Ávila (Ed.), *La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado*. (pp. 111-154). Quito, Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Prats, J. (s.f.). A propósito de la constitución boliviana: el Estado Social y Democrático de Derecho. Recuperado de: http://www.bivica.org/upload/constitucion_boliviana.pdf
- Red Interamericana de Protección Social -RIPSO-. (s.f.). Renta Universal de Vejez “Renta Dignidad”. Organización de los Estados americanos -OEA-. Recuperado de: <http://www.redproteccionsocial.org/portfolio/renta-universal-de-vejez-renta-dignidad>
- República del Ecuador. (s.f.). Ecuador ama la vida. Recuperado de: <http://www.presidencia.gob.ec/>
- República del Ecuador. Consejo Nacional De Planificación. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural. Quito: SENPLADES.
- Rivera, J. A. (2015). La Protección de los derechos humanos y fundamentales en el estado plurinacional de Bolivia. En M. Carbonell, H. Fix-Fierro, L. R. González y D. Valadés (coord.), *Estado constitucional, derechos humanos, justifica, y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos humanos. Tomo V, Vol. 2*. (pp. 311-346). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rodas, G. (2008). El caso ecuatoriano. En B. Stolowicz (coord.), *Gobiernos de Izquierda en América Latina: un balance político*. (pp. 107-225). Bogotá: Aurora.
- Romero, C. (2008). La nueva estructura del Estado plurinacional y comunitario. En Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), *Comentarios a la propuesta constitucional aprobada por la Asamblea Constituyente boliviana*. (pp. 25-44). La Paz, Bolivia: Plural.
- _____ (2009). El proceso constituyente boliviano. En M. Carbonell, J. Carpizo y D. Zovatto (coord.), *Tendencias del constitucionalismo en Iberoamérica*. (pp. 889-935). México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

- Romero, R. (2012). La ausencia de la Coordinadora Guerrillera en la Constituyente. En C. González (Comp.), *Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia*. (pp. 182-195). Bogotá: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
- Roncagliolo, R. (2007). Los partidos Andinos: entre la crisis y el cambio. En R. Roncagliolo y C. Meléndez (Eds.) *La política por dentro. Cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*. (pp. 11-18). Lima, Perú: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral -Idea Internacional-
- Roth, A-N. (2017). *Deubel. Políticas Públicas Formulación, implementación y evaluación*. Aurora. 12.
- Safford, F. y Palacios. (2002). *Colombia: Fragmented land, divided society*. Nueva York y Oxford: Oxford University Press.
- Secaira, P. (2004). *Curso breve de derecho administrativo*. Quito: editorial Universitaria.
- Sentencia Constitucional Plurinacional No 1011/2013. (del 27 de Junio de 2013). Bolivia. Recuperado de: <http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/sentencia-constitucional-plurinacional-no-10112013-del-27-de-junio-de-2013/>
- Solares, A. (2011). *Integración teoría y procesos. Bolivia y la integración*. Santa Cruz: Instituto Boliviano de Comercio Exterior -IBCE-.
- Tapia, H. (2016). El núcleo esencial de los derechos del buen vivir en la administración del gobierno autónomo descentralizado de Sevilla de oro”. *Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*.
- Tapias, L. (2005). Izquierda y movimiento social en Bolivia. En C. Rodríguez, P. Barrett y D. Chávez. *La nueva Izquierda en América Latina, sus orígenes y trayectoria futura*. (pp.339-357) Bogotá: Norma.
- TeleSur. (2016) ¿Cuánto ha cambiado Ecuador con la Revolución Ciudadana? Recuperado de: <http://www.telesurtv.net/news/Cuanto-ha-cambiado-Ecuador-con-la-Revolucion-Ciudadana--20150115-0097.html>
- Tocancipá, L. S. (s.f.).Betancur Cuartas, Belisario. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/belisario-betancur>

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (s.f.). X Conferencia Iberoamericana de

Justicia Constitucional. La Normatividad de la Constitución. Recuperado de:

<https://www.cijc.org/miembros/Bolivia/Documents/Bolivia%20-%20Tribunal%20Constitucional%20Plurinacional.pdf>

(7 de noviembre de 2011 Sentencia

Constitucional Plurinacional 1786/2011-R. Expediente: 2010-21149-43-AAC.

Recuperado de:

<http://www.tcpbolivia.bo/tcp/sites/all/modulostcp/gaceta/resolucion23504.html>

(30 de septiembre de 2011). Sentencia

Constitucional Plurinacional 1414/2011-R No 1414/2011-R. Expediente: 2009-20547-42-AAC. Recuperado de:

<http://www.tcpbolivia.bo/tcp/sites/all/modulostcp/gaceta/resolucion23478.html>

(16 de abril de 2012). Sentencia Constitucional

Plurinacional 1250/2012. Recuperado de:

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFuZKl3KHUAhUJNiYKHWI0DmkQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacionconstruir.org%2Findex.php%2Fjurisprudencia1%2Fdescargar%2Farchivo%2FSENTENCIACONSTITUCIONALPLURINACIONAL1250_41.pdf&usg=AFQjCNFPR8AyTJkKLRl7sKQr0ZQ3MapdsA&sig2=JxAD6XqUOTqI1Sk-jQTapg

(20 de septiembre de 2012). Sentencia

Constitucional Plurinacional 0080/2012. Recuperado de:

(3 de junio de 2013). Sentencia Constitucional

Plurinacional 0677/2013. Recuperado de:

<http://www.revistabolivianadederecho.org/index.php/item/685-sentencia-constitucional-plurinacional-0677-2013>

(7 de junio de 2013). Sentencia Constitucional

Plurinacional 0760/2013. Recuperado de:

<http://www.revistabolivianadederecho.org/index.php/item/591-sentencia-constitucional-plurinacional-0760-2013>

UNESCO. (s.f.). *Revisión nacional 2015 de la Educación para Todos*.

http://www.acaoeducativa.org.br/desenvolvimento/wp-content/uploads/2014/11/Informe_Ecuador.pdf

UNICEF. (s.f.). *El plan decenal de educación (2006 – 2015)*. Recuperado:

https://www.unicef.org/ecuador/nacionalidades_y_pueblos_indigenas_web_Parte3.pdf

Uprimny, R. (2011). Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina:

tendencias y desafíos. *Pensamiento penal*, 1-22. Recuperado de:

<http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/28469-transformaciones-constitucionales-recientes-america-latina-tendencias-y-desafios>

Valencia, J. G. (2007). Los principios y valores del estado social de derecho como marco jurídico político para la resolución de los conflictos. *Gestión y Ambiente. Gestión y Ambiente*, 10(1), 105-112.

Vargas, A. (2017). El derecho a la vida y a la salud, en la CPE de Bolivia. Recuperado de:

<http://www.urgentebo.com/noticia/el-derecho-la-vida-y-la-salud-en-la-cpe-de-bolivia>

Verdesoto, L. y Ardaya, G. (2005). La participación política de la sociedad civil en la Región Andina. En K. Sample y D. Zovatto (Eds.) *Democracia en la región Andina, los telones de fondo*. (253-274). Lima, Perú: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral -Idea Internacional-

Viciano, R. y Martínez, R. (2010). Los procesos constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional. *IUS*, (25), 7-29.

Villar, L. (2007). Estado de derecho y Estado social de derecho. *Derecho del Estado*, (20), 73-96.

Villarraga, Á. (2012). ¿Cómo fue el proceso de paz que precedió a la Constituyente de 1991? En C. González (Comp.), *Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia*. (pp. 70-73). Bogotá: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Villota, S. (2012). El principio constitucional de la sostenibilidad fiscal y el proyecto social para Colombia: reflexiones en torno al acto legislativo no. 03 de 2011. *Tendencias*, 13(2), 36-51.

- Wanderley, F. (2018). Bolivia: Los Avances Sociales y Laborales en el Periodo de Boom Económico y los Desafíos con el Fin de la Bonanza (No. 2/2018).(31-32)
- World Economic Forum. (2013). *Exploring the Outlook on the Global Agenda 2014*. Ginebra, Suiza. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalAgendaOutlook_2014.pdf
- Zegada, M. T. (2008). Una respuesta a la exclusión social de difícil aplicación. En Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), *Comentarios a la propuesta constitucional aprobada por la Asamblea Constituyente boliviana*. (pp. 25-44). La Paz, Bolivia: Plural.